

**DR. JUAN RABINDRANA CISNEROS GARCÍA**

**DERECHO HUMANO AL BUEN GOBIERNO. CUANDO LA  
DEMOCRACIA NO ES SUFICIENTE**

**ANÁLISIS JURÍDICO**

REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS JURÍDICOS

# CUEJ

M.R.

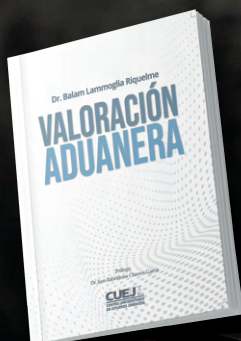
**PARA ESPECIALISTAS, ENTRE ESPECIALISTAS**

.....  
**TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.  
COMPETENCIA DUAL**

**MTRO. JOSÉ ANTONIO GARCÍA OCHOA**

.....  
**LA VALORACIÓN ADUANERA Y SU RECHAZO  
EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL**

**DR. BALAM LAMMOGLIA RIQUELME**



.....  
**LA UMA COMO VALOR PARA EL LÍMITE DEL  
CÁLCULO DE LAS PENSIONES**

**MTRO. EDGAR RENÉ MARÍN GÓMEZ**

.....  
**CREACIÓN DE UN NUEVO ORGANISMO  
ADMINISTRATIVO DE LA SHCP**

**LIC. SANDRA DÍAZ CEBALLOS CAMACHO**

.....  
**CONSIDERACIONES SOBRE LAS CAUSALES DE  
IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO**

**LIC. ROGELIO CASTILLO ROSALES**



@RevistaCUEJ



/CUEJREVISTA

www.revistacuej.com.mx

OCT-DIC 2021

\$ 120.00

018



042016112313103600102

## Contenido

**05 DERECHO HUMANO AL BUEN GOBIERNO. CUANDO LA DEMOCRACIA NO ES SUFICIENTE**  
Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

**09 TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA DUAL**  
Mtro. José Antonio García Ochoa

**13 ¡HAY JUECES EN BERLÍN!**  
Mtro. Iván Guerrero Barón

**15 IMPLICACIONES FISCALES DEL MUTUO**  
Mtro. Alfredo Jesús Vargas Cid del Prado

**18 CONSIDERACIONES SOBRE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO**  
Lic. Rogelio Castillo Rosales

**22 COLISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: EL DERECHO HUMANO A LA SALUD Y EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN**  
Dra. Rosa Eloísa Pinzón Caballero

**27 DERECHO CORPORATIVO, UNA INDUDABLE RELACIÓN CON LAS DEMÁS ÁREAS DEL DERECHO Y LAS CIENCIAS AUXILIARES**  
Mtro. Gerardo Hurtado Razo

**31 LA GRAN CRISIS HUMANITARIA DE NUESTROS TIEMPOS: LA MIGRACIÓN. CASO MEXICANO**  
Dr. Víctor Amaury Simental Franco

**35 LA REFORMA CONSTITUCIONAL LABORAL Y EL T-MEC**  
Mtro. Magdalena Villanueva Flores

**39 LA VALORACIÓN ADUANERA Y SU RECHAZO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL**  
Dr. Balam Lammoglia Riquelme

**42 CREACIÓN DE UN NUEVO ORGANISMO ADMINISTRATIVO DE LA SHCP**  
Lic. Sandra Díaz Ceballos Camacho

**47 UNA RADIOGRAFÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS**  
Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco

**52 OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO**  
C.P. Víctor Hugo Castañeda Pérez

**55 AGRADECIMIENTOS**  
Mtro. Sergio Casillas Macedo

**57 LA UMA COMO VALOR PARA EL LÍMITE DEL CÁLCULO DE LAS PENSIONES**  
Mtro. Edgar René Marín Gómez

**60 EFECTOS FISCALES DEROGACIÓN DE LA REGLA 5.2.5 DE LAS RGCE PARA EL 2020**  
Lic. Guillermo Bonilla Gándara

**63 LA REFORMA LABORAL EN MÉXICO**  
Lic. Raymundo Huerta Lucio

**67 LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y SUS IMPLICACIONES EN LA REGULACIÓN JURÍDICA DE MÉXICO A NIVEL FEDERAL**  
Ing. José Mendieta Zúñiga

**70 FEMINICIDIO**  
Benjamín Argumedo Perrusquia

**72 EL PAMA Y SUS CONSECUENCIAS**  
María Cristina Martínez Marcial

**74 IMPACTO EN LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES POR LA REFORMA A LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL**  
Lic. Israel Hilario Ávila Alegría

**76 CAROLINA HERRERA Y PLAGIO A DISEÑOS TEXTILES MEXICANOS**  
Regina del Rosario García Gualo

**80 PARA ELLA . . .**  
ANÓNIMO

## DIRECTORIO

### DIRECTOR GENERAL

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

### DIRECTOR DEL CONSEJO EDITORIAL

Dr. Dante Jehová Cisneros García

### CONSEJO EDITORIAL

Dr. Hadar Moreno Valdéz

Dr. Miguel Antonio Gutiérrez Güereca

Dr. Carlos Javier Verduzco Reina

Dra. Sara Esteban Cabrera

### EDICIÓN Y ARTE

#### COORDINADORA DE ARTE

DISEÑO EDITORIAL Y GRÁFICO

Lic. Liliana Andrade Gutiérrez

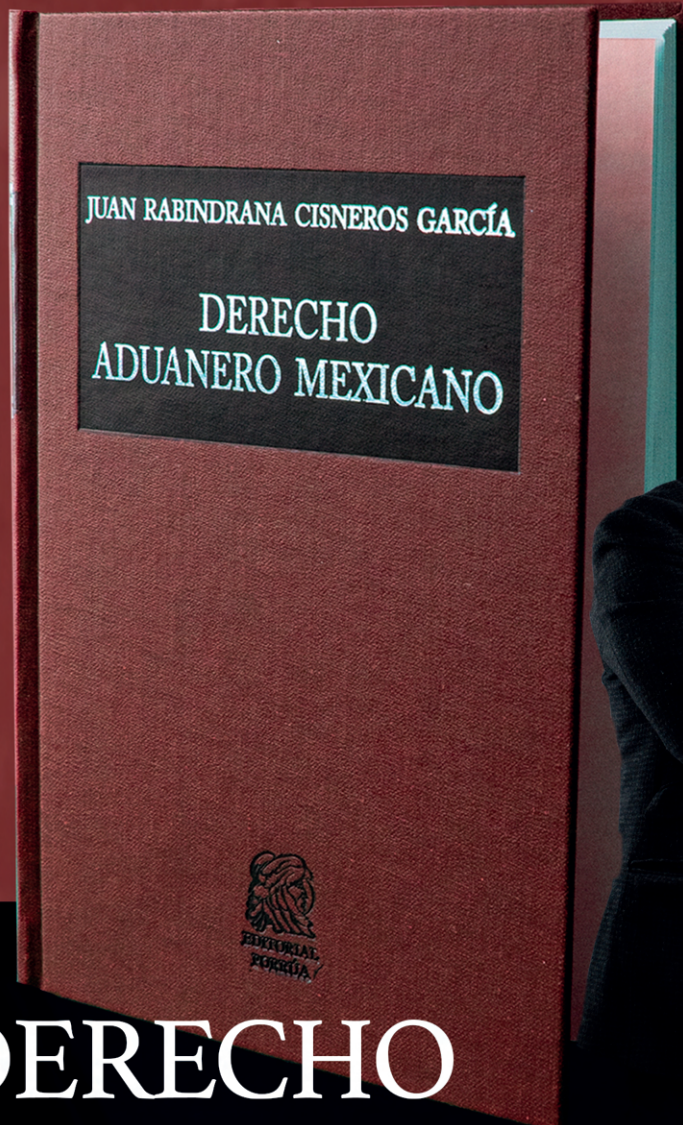
#### CORRECTORAS DE ESTILO

Rosa Elena Cruz Ramos

Sandra Sofía Cisneros Grosso







# DERECHO ADUANERO MEXICANO

*4ta. Edición*

*Dr. Juan Rabindrana Cisneros García*



EDITORIAL  
PORRÚA

ecex  
ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

# EDITORIAL

**L**a *resiliencia* es definida como la capacidad de adaptación de un ser vivo frente a situaciones adversas. Esa adaptación es percibida cultural y socialmente como una virtud pues implica sobreponerse a los infortunios y utilizarlos de forma positiva para crecer. De esta manera, la sociedad internacional y, por supuesto, la mexicana, han sabido ser resilientes ante la enfermedad que aqueja al mundo.

En esta entrega, Revista CUEJ ofrece a sus lectores análisis variados sobre las nuevas interpretaciones jurídicas, resultado de la adaptación al proceso por el que estamos atravesando; cambios y perspectivas en materia de derechos humanos, entre otros.

Esperamos que las reflexiones que hechas por los autores les sean de utilidad y, principalmente, abone a su reflexión.

**Dr. Juan Rabindrana Cisneros García**

Rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ)





Incluye **códigos QR** con **formatos descargables** y vídeos de apoyo al lector.

**CUEJ**  
CENTRO UNIVERSITARIO  
DE ESTUDIOS JURÍDICOS



# Derechos Humanos y Amparo

en Materia Administrativa

**2da. Edición**

# DERECHO HUMANO AL BUEN GOBIERNO. CUANDO LA DEMOCRACIA NO ES SUFICIENTE

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García

Doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, rector del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ), exfuncionario en 4 ocasiones de la Administración General de Aduanas, miembro de número de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y del Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es expositor a nivel nacional e internacional y, autor de los libros: *Derecho Aduanero Mexicano* (editorial Porrúa), *Manual Práctico de Amparo contra el embargo de mercancías* (editorial Cencomex) y coautor de los libros: *Derecho Procesal Fiscal y Aduanero*, *El Sistema Nacional Anticorrupción* (ambos de Tax Editores), *Derechos Humanos y Amparo en materia administrativa*, *El Agente y la Agencia Aduanal* y *T-MEC comentado* (ambos de la editorial CUEJ). Ha participado en la creación de más de 200 videos visibles en YouTube, sobre contenidos jurídicos. Es creador del canal de Spotify del CUEJ donde se ha grabado la Ley Aduanera y otras disposiciones jurídicas importantes.



**E**l presente artículo expone un tema que es importante para toda persona en lo individual y para toda la sociedad mexicana en su conjunto: el derecho humano al buen gobierno. También expreso mi consideración en el sentido de que la democracia no es el fin, sino el medio para lograr los objetivos del Estado y la conservación de los derechos humanos de las personas, pero debemos implementar otras acciones para lograr el efectivo buen gobierno y alcanzar el anhelado “bien común”.

Como se expone en el libro *Derechos Humanos y Amparo en materia administrativa*, escrito por el maestro José Antonio García Ochoa y un servidor<sup>1</sup>, los derechos humanos son los derechos que tiene toda persona, por el simple hecho de serlo; son las facultades o prerrogativas que tienen los seres humanos para garantizar una vida digna y libre de discriminación.

En este mismo libro se expresa que los derechos económicos, sociales y culturales, comprende los

derechos básicos de la población como es el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, seguridad social, trabajo, educación, medio ambiente, etc. En este sentido, Nicolás Enrique Zuleta Hincapié, rector nacional de la Universidad Libre de Colombia, señala:

“ No siempre se tiene una idea clara de lo que son los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) y muchas veces se desconoce que se trata de aquellos derechos que posibilitan un nivel de vida adecuado para las personas dentro de un concepto de dignidad humana. Se trata de derechos tan básicos e inherentes a la persona humana y de tan sencilla, que basta decir, para comprenderlos, que **se traducen en alimentación, seguridad social, salud**

<sup>1</sup> Cisneros García, Juan Rabindrana, García Ochoa, José Antonio, *Derechos humanos y amparo en materia administrativa*, México, CUEJ, 2021, p. 1.



física y mental, vivienda, trabajo, sindicalización, educación, medio ambiente sano y agua.<sup>2</sup> ”

Ahora bien, desde la **Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano**, expedida por la Asamblea Nacional francesa de 1789, se estableció en el artículo 2º que “la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre”, prescribiendo que son: “la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión”. El artículo 15 señala vehementemente:

**Art. 15.** La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración.

Ahora bien, la Constitución Política de la Monarquía Española o Constitución de Cádiz, expedida el 19 de marzo de 1812, estableció también una disposición importante, ya que el artículo 13 señaló: “El objeto del Gobierno es la felicidad de la nación (sic), puesto que el fin de toda sociedad política no es otro que el bien estar(sic) de los individuos que la componen.”

Ahora bien, la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857, indicaba:

**ARTICULO 1.** El pueblo mexicano reconoce que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del país deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución (sic).

(Énfasis añadido)

De esta manera y de la simple lectura que se llega al conocimiento que el objeto del Estado es respetar y garantizar los derechos humanos de las personas.

Ahora bien, al hablar de los fines y valores del Estado, el Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco, en su libro *Teoría General del Estado* señala que:<sup>3</sup>

“Resulta incuestionable que el Estado constituye un producto cultural y jurídico cuya evolución ha permitido al hombre gozar de una organización colectiva que juega un papel trascendente para la coexistencia armónica”.

(...)

A partir de lo anterior, es fácil distinguir en qué consiste la función sustantiva del Estado, que ya desde pensadores como Aristóteles y Platón, **se identifican con la persecución del bien común.**”

(Énfasis añadido)

Actualmente, nuestra Constitución Política no tiene una disposición expresa que nos hable del derecho humano al buen gobierno, no obstante, con base en los textos antes transcritos se infiere que si lo que justifica la asociación política es garantizar la vida armoniosa de los ciudadanos, el respeto a los derechos humanos y el bien común, entonces podemos llegar a la conclusión de que sí existe el derecho humano a un buen gobierno.

El problema se da cuando se piensa que la democracia por sí sola va a garantizar este respeto a los derechos humanos y el bien común, o que en automático un nuevo gobierno lo hará. Hemos visto con tristeza, que cada vez más son desdeñados y considerados

2 ZULETA HINCAPIÉ, Nicolás Enrique, *DERECHOS sociales, económicos y culturales*, Universidad Libre de Colombia, Colombia, 2009. P. 5., visible en la página de internet: <http://www.cor-teidh.or.cr/tablas/26759.pdf>, consultada el 13 de julio de 2020.

3 Granados Atlaco, Miguel Ángel, *Teoría general del Estado*, México, CUEJ, 2021, p. 177.

como un cuento irrisorio que sólo tiene cabida en los buenos deseos y en el discurso, pero que no tienen aplicación en la realidad.

No me queda duda que si lo que da fundamento o legitima el vivir en un Estado es precisamente el garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas y la persecución del bien común, entonces ese fundamento no está siendo respetado.

El 10 de junio pasado celebramos 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que obliga al Estado mexicano a reconocer los derechos humanos establecidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en esa materia, pero hoy nos toca reflexionar si estos derechos han sido efectivamente tutelados y si el día de hoy tenemos un mayor respeto a la vida, a la libertad, a la alimentación, a la salud, a la educación, al trabajo, entre otros derechos fundamentales del individuo.

La pandemia que hoy vivimos ha puesto de manifiesto el deterioro en el respeto de los derechos fundamentales de las personas y la necesidad de acudir al juicio de amparo para poder exigirlos. Estos juicios crean molestia en los servidores públicos, pero es por demás lamentable que las personas tengan que accionar el juicio de garantías para poder obtener el respeto de sus derechos fundamentales más básicos.

Debemos de entender que el respeto de los derechos humanos es el fundamento de todo, del propio Estado, entonces hemos visto que nuestros gobernantes desdeñan este fundamento y se hace necesario hablar del derecho al buen gobierno y de respeto de estos derechos, a fin de poderlos hacer exigibles ante malas decisiones de nuestros gobernantes. Hoy en día los gobernantes deben de rendir cuentas de su actuación a los gobernados, tal y como lo consigna el artículo 15 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en Francia, referido previamente.

También, hemos apreciado a lo largo de la historia de México de los últimos 50 años, el desarrollo de nuestra democracia, en donde afortunadamente ha habido alternancia. Hemos presenciado el cambio del ejercicio del poder en manos del PRI, del PAN y

ahora de MORENA, pero insisto, no se ha apreciado, en la realidad, un mayor desarrollo en el respeto de los derechos humanos ni un avance en el buen gobierno. Basta ver que cada día hay más pobres y mayores problemas de acceso a salud, mayor desempleo y menor educación.

En este sentido, el doctor Miguel Ángel Granados Atlaco,<sup>4</sup> indica que:

Uno de los grandes dilemas de la Filosofía Política consiste en la identificación de la mejor manera en que deba organizarse y funcionar un gobierno. Desde los primeros filósofos de la antigüedad occidental es identificable esta necesidad, verbigracia, las clasificaciones ofrecidas por platón en La República, en el caso de Aristóteles en La política.

(...)

“Maurice Duverger nos ofrece en su obra Instituciones Políticas y Derecho Constitucional una caracterización del modelo democrático, a partir de sus elementos esenciales, a saber: “la designación de los gobernantes mediante elecciones por sufragio universal, la existencia de un parlamento con grandes poderes, y una jerarquía de normas jurídicas destinadas a asegurar el control de las autoridades públicas por jueces independientes para salvaguardar las libertades de los ciudadanos”.

(Énfasis añadido)

Desde luego que la honestidad es un baluarte indispensable del servicio público, pero también continuamos con los problemas de su falta de preparación y la carencia de un verdadero sistema de selección por concurso de oposición que garantice un servicio público más eficiente, tal y como sucede en España, en donde las personas que deseen ingresar al ministerio de Hacienda (por ejemplo) deben de hacer examen y resultar ganadores de

<sup>4</sup> Ídem.



este para ocupar una plaza. Esto garantiza, en gran medida el buen gobierno.

Por otra parte, se requiere una gran cruzada de capacitación del servidor público y de los empresarios, sobre todo en materia de derechos humanos y de combate a la corrupción, tal y como lo indica el capítulo 27 del T-MEC. El respeto al derecho a la transparencia también resulta fundamental para vigilar el comportamiento debido de los servidores públicos y de la buena marcha del gobierno.

Es así, que no basta el garantizar las elecciones (problema que parece ser la única preocupación para los funcionarios públicos que arriban al poder), sino debemos fomentar el conocimiento de los derechos humanos en la población y los servidores públicos, y desarrollar una cultura de cumplimiento y respeto a las leyes.

Necesitamos que la Constitución Política de nuestro país reconozca expresamente el derecho al buen gobierno que tenemos los individuos que vivimos a fin de que el ciudadano pueda exigir este derecho vía amparo. Es necesario que el poder judicial participe más activamente en el respeto de los derechos humanos de las personas incluyendo el derecho al buen gobierno.

La justicia debe ser independiente y estar al margen de la política y, ser un real motor que preserve los derechos y libertades de las personas con base en lo jurídico, no en lo político.

Los abogados también debemos de esforzarnos más en nuestra preparación y conocimiento del juicio de amparo, a fin de poder garantizar a los mexicanos estos derechos. En este tema nuestra escuela ha hecho mucho énfasis en la difusión del juicio de amparo, no sólo para los abogados sino para la sociedad en general.

La reciente reforma a la Constitución del 11 de marzo de 2021 no fue, a mi consideración, una reforma de "gran calado"; no se establecieron mejoras al juicio de amparo ni a la suspensión del acto reclamado. El juicio de amparo debe ser más sencillo, más accesible y regular de una manera más fácil y ágil el tema

de la suspensión del acto reclamado. Si los juicios de amparo duran mucho tiempo, la suspensión de los actos reclamados debe de restituir provisionalmente a los quejosos y sólo si llegan a perder el juicio de amparo es cuando se pueden ejecutar dichos actos. Es claro que no se puede generalizar, ya que cada asunto tiene sus características propias, pero el amparo es una herramienta indispensable, que posibilita el real acceso al derecho humano de recurso efectivo, a que hace referencia el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Hoy más que nunca es necesario el reconocimiento pleno, exacto y escrito del derecho humano al buen gobierno. Las decisiones de los gobernantes que afecten a los mexicanos no deben ser absolutas, sino en el marco del efectivo respeto de los derechos humanos de las personas. Sólo así podremos tener un México más justo e igualitario, donde el respeto a los derechos básicos de las personas y la no discriminación sean una realidad y la base del desarrollo armónico del país. Donde el buen gobierno y el bien común sean una realidad. Dios bendiga a nuestros gobernantes para que tomen buenas decisiones en beneficio de nuestra sociedad.

## Derechos Económicos, Sociales y Culturales



# TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. COMPETENCIA DUAL

## Mtro. José Antonio García Ochoa

Licenciado en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, diplomado en Derecho tributario por el ITAM, con especialidad en Derecho constitucional y maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Dentro del Poder Judicial de la Federación fungió como actuario y secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos y secretario proyectista en el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en el Primer Circuito; docente de la materia de amparo y Derecho constitucional en maestría en diversas universidades; ponente del “Taller práctico del juicio de amparo” y del “Diplomado en Derechos humanos y amparo en materia administrativa” en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos; coautor del libro *Derechos humanos y amparo en materia administrativa* (editorial CUEJ). Actualmente funge como abogado contencioso en la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos.



**D**erivado de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, actualmente existe una competencia DUAL para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pues conoce de juicios contenciosos administrativos en los supuestos de procedencia previstos en el artículo 3º de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y también de los procedimientos administrativos de responsabilidades relacionados con conductas graves de los servidores públicos y particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, en términos de lo establecido en el diverso artículo 4º del mismo ordenamiento, lo que ha generado, entre otras cuestiones, el desconocimiento de Tribunales Colegiados de Circuito de la actual procedencia de **dos recursos distintos en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa**, a saber:

- A)** Recurso de revisión fiscal (no comparto la denominación de “fiscal”) previsto en el artículo **63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo** y;
- B)** Recurso de revisión administrativa previsto en el artículo **220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**.

Lo anterior se puede advertir del marco constitucional y legal siguiente:

- 1.** Con motivo de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, se reformaron, entre otros artículos, el 73, fracciones XXIV y XXIX-H. 104, fracción III, 109, 113 y 114, párrafo tercero, de la Constitución Federal. De los que se desprende, en lo que interesa destacar, lo siguiente:
  - a)** Se faculta al Congreso de la Unión para expedir leyes generales que establezcan las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción;
  - b)** Se otorga competencia al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y, a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda



Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.<sup>1</sup>

- c) Se otorga competencia a los tribunales de la federación para conocer de los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de la Constitución, esto es, en contra de las sentencias emitidas en los juicios contenciosos administrativos y las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos de sanción a servidores públicos por conductas graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades.<sup>2</sup>

## 2. Con motivo de las reformas constitucionales de referencia, se expidieron, entre otras, la Ley

General de Responsabilidades Administrativas y la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

3. Para adaptar la estructura, organización y funcionamiento del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la parte relativa a su **NUEVA competencia**, para resolver los procedimientos administrativos en materia de responsabilidades administrativas relacionadas con conductas graves, el 18 de julio del 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la nueva Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en la que se crean Salas especializadas en materia de responsabilidades de los servidores públicos, con competencia para resolver dichos procedimientos (**NOTA IMPORTANTE, NO SON JUICIOS**).<sup>3</sup>

1 Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

(...)  
XXIV. Para expedir las leyes que regulen la organización y facultades de la Auditoría Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos federales; así como para expedir la ley general que establezca las bases de coordinación del Sistema Nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 113 de esta Constitución;

(...)  
XXIX-H. Para expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, dotado de plena autonomía para dictar sus fallos, y que establezca su organización, su funcionamiento y los recursos para impugnar sus resoluciones.

(...) Asimismo, será el órgano competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilidades, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales. (...) Artículo. 109.- Los servidores públicos y particulares que incurran en responsabilidad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente: (...)

III. (...)

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente. Las demás faltas y sanciones administrativas, serán conocidas y resueltas por los órganos internos de control.

2 Artículo 104. Los Tribunales de la Federación conocerán:

(...)  
III. De los recursos de revisión que se interpongan contra las resoluciones definitivas de los tribunales de justicia administrativa a que se refiere la fracción XXIX-H del artículo 73 de esta Constitución, sólo en los casos que señalen las leyes. Las revisiones, de las cuales conocerán los Tribunales Colegiados de Circuito, se sujetarán a los trámites que la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de esta Constitución fije para la revisión en amparo indirecto, y en contra de las resoluciones que en ellas dicten los Tribunales Colegiados de Circuito no procederá juicio o recurso alguno; (...)

3 Artículo 4. El Tribunal conocerá de las Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares Vinculados con Faltas Graves promovidas por la Secretaría de la Función Pública y los Órganos Internos de control de los entes públicos federales, o por la Auditoría Superior de la Federación, para la imposición de sanciones en términos de lo dispuesto por la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales.

Capítulo XI

De las Salas Especializadas en Materia de Responsabilidades Administrativas Artículo 38. Las Salas Especializadas en materia de Responsabilidades Administrativas conocerán de:  
A) Los procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 4 de esta Ley, con las siguientes facultades:

I. Resolverán respecto de las faltas administrativas graves, investigadas y substanciadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control respectivos, según sea el caso, ya sea que el procedimiento se haya seguido por denuncia, de oficio o derivado de las auditorías practicadas por las autoridades competentes;

II. Impondrán sanciones que correspondan a los servidores públicos y particulares, personas físicas o morales, que intervengan en actos vinculados con faltas administrativas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades. Así como fincar a los responsables el pago de las cantidades por concepto de responsabilidades resarcitorias, las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Federal o al Patrimonio de los entes públicos federales, locales o municipales, y

(...)

B) Los procedimientos, resoluciones definitivas o actos administrativos, siguientes:

(...)

III. De las resoluciones definitivas que impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la Ley General de Responsabilidades, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dicho ordenamiento, y

IV. Las resoluciones definitivas por las que se impongan sanciones administrativas a los servidores públicos en términos de la legislación aplicable, así como contra las que decidan los recursos administrativos previstos en dichos ordenamientos.

4. En la misma data citada en el acápite anterior, se publica la Ley General de Responsabilidades Administrativas, en la que, **en congruencia con lo previsto en el artículo 109, fracción III, constitucional**, establece:

- Para el fincamiento de responsabilidades se establecen **dos procedimientos**: uno para el de responsabilidades administrativas graves, del que corresponde conocer al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, quien, como autoridad resolutora debe emitir la resolución correspondiente y otro para las responsabilidades administrativas no graves del que corresponde conocer las unidades de responsabilidades y órganos internos de control.<sup>4</sup>
- Medios de defensa para que las autoridades investigadoras, como partes de los órganos internos de control o unidades de responsabilidades, recurran las determinaciones del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.<sup>5</sup>

Los antecedentes expuestos con antelación permiten llegar a la conclusión siguiente:

Por disposición constitucional y legal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa tiene una **competencia DUAL**, pues **conoce**:

- **De los juicios contenciosos administrativos en las materias que prevé el artículo 3° de la Ley Orgánica del Tribunal y;**
- **De los procedimientos administrativos en materia de responsabilidades administrativas relacionadas con conductas graves, en términos de lo previsto en el artículo 4° de ese ordenamiento.**

Así, en contra de las sentencias y resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa procede:

- A) Recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo a favor de las autoridades demandadas, en contra de las sentencias emitidas en los juicios contenciosos administrativos y;**
- B) Recurso de revisión administrativa a favor de la autoridad investigadora, por disposición constitucional (73-XXIX-H y 104, fracción III) y legal (artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas).**

#### 4 Capítulo II

Del procedimiento de responsabilidad administrativa **ante las Secretarías y Órganos internos** de control Artículo 208. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas no graves, se deberá proceder en los términos siguientes:

I. La Autoridad investigadora deberá presentar ante la Autoridad substanciadora el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa, la cual, dentro de los tres días siguientes se pronunciará sobre su admisión, pudiendo prevenir a la Autoridad investigadora para que subsane las omisiones que advierta, o que aclare los hechos narrados en el informe; (...)

#### Capítulo III

Del procedimiento de responsabilidad administrativa cuya resolución corresponda a los Tribunales Artículo 209. En los asuntos relacionados con Faltas administrativas graves o Faltas de particulares, se deberá proceder de conformidad con el procedimiento previsto en este artículo.

Las Autoridades substanciadoras deberán observar lo dispuesto en las fracciones I a VII del artículo anterior, luego de lo cual procederán conforme a lo dispuesto en las siguientes fracciones:

I. A más tardar dentro de los tres días hábiles siguientes de haber concluido la audiencia inicial, la Autoridad substanciadora deberá, bajo su responsabilidad, enviar al Tribunal competente los autos originales del expediente, así como notificar a las partes de la fecha de su envío, indicando el domicilio del Tribunal encargado de la resolución del asunto; (...)

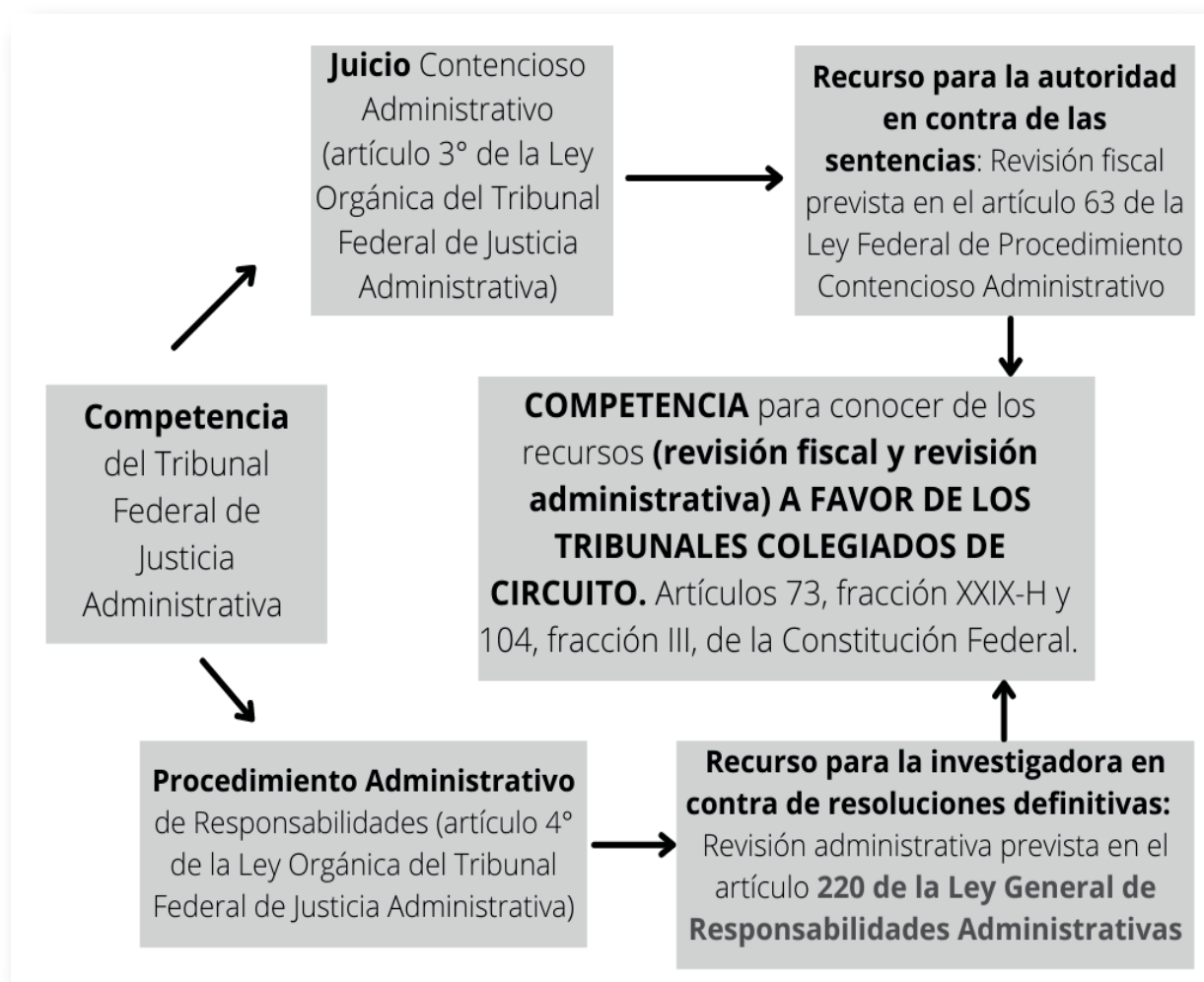
IV. Una vez transcurrido el periodo de alegatos, el Tribunal, de oficio, declarará cerrada la instrucción y citará a las partes para oír la resolución que corresponda, la cual deberá dictarse en un plazo no mayor a treinta días hábiles, el cual podrá ampliarse por una sola vez por otros treinta días hábiles más, cuando la complejidad del asunto así lo requiera debiendo expresar los motivos para ello, y... (énfasis añadido).

#### 5 Sección Cuarta

##### De la Revisión

Artículo 220. **Las resoluciones definitivas** que emita el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, podrán ser impugnadas **por la Secretaría de la Función Pública, los Órganos internos de control de los entes públicos federales o la Auditoría Superior de la Federación, interponiendo el recurso de revisión**, mediante escrito que se presente ante el propio Tribunal, dentro de los diez días hábiles siguientes a aquél en que surta sus efectos la notificación respectiva. (Énfasis añadido).

La competencia dual a que he hecho alusión y de la actual procedencia de **dos recursos distintos en contra de las resoluciones emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa**, se deja en claro en el cuadro siguiente:



En conclusión, espero que lo relatado y el cuadro anterior abone para aclarar el desconocimiento que tienen los tribunales colegiados de la existencia y procedencia de un recurso de revisión diverso al fiscal, lo que resulta de suma utilidad, pues algunos tribunales han desechado los recursos aludidos en el artículo 220 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, bajo el argumento de que no se cumplen con los supuestos previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, lo que evidentemente carece de sustento constitucional y legal, de conformidad con lo expuesto en párrafos anteriores.



# ¡HAY JUECES EN BERLÍN!

**Mtro. Iván Guerrero Barón**

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Diplomado en Derecho Tributario por la Universidad Panamericana. Doctorando en Derecho por el CUEJ. Ha impartido clases en el Instituto de la Judicatura Federal y ha sido conferencista en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Actualmente se desempeña como secretario del Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito.



La frase “hay jueces Berlín” se remonta al rey Federico de Prusia. El rey tenía un palacio en el campo para pasar el verano, cuando el tiempo era agradable en aquel país, muy frío el resto del año. En su palacio se celebraban suntuosas fiestas y conciertos musicales. En los bosques vecinos se organizaban grandes cacerías. Acudían invitados de la élite social: príncipes, nobles, artistas, músicos y hasta filósofos. Pero había un molinero que tenía su molino muy cerca del palacio. En cuanto se levantaba un poco de viento, el ruido de sus aspas molestaba al rey y a sus invitados. También había quejas porque, decían, el molino afeaba las vistas de los paisajes desde el palacio y ahuyentaba la caza. Un día el rey Federico ordenó que trajeran al molinero a su presencia. «Tu molino es una molestia para el palacio», le dijo. «Estoy dispuesto a comprártelo». Pero el molinero se negaba a vender el molino. Entonces el rey le inquirió: ¿«Sabes que si quiero puedo destruir tu molino sin tener que pagarte un solo céntimo?»». Asustado, el molinero respondió: «Eso sería una grave injusticia, majestad». Entonces el rey, señalando con el dedo hacia donde se encontraba la capital de su reino, le dijo: «Para eso hay jueces en Berlín». El molinero planteó el caso ante el Tribunal de Berlín, que dictó una sentencia favorable al molinero. El rey Federico, que había comenzado la destrucción del molino,

acató la sentencia: paró al momento la demolición e indemnizó adecuadamente al molinero por todos los daños que le había causado.

La frase se acuñó como lema del control judicial del Poder en todo el mundo y subsiste en los libros de historia del derecho universal como emblema de la valentía que deben tener los jueces para moderar el imperio del poder.

Esta es una frase icónica en el libro de Luigi Ferrajoli intitulado *Derechos y garantías, la ley del más débil*. Al leerla se me quedó grabada cuando en mi juventud estudiaba en Ciudad Universitaria. Hace poco la recordé, cuando en algún ejercicio del doctorado, escuché una de las preguntas jurídicas más complejas y también escuché la mejor definición de boca de uno de mis compañeros: ¿qué cosa es el amparo?

**¡REFUGIO!**

**¡REFUGIO, SEÑORES!**

**EL NOMBRE NO ES CASUALIDAD.**

“ No es un capricho, el amparo se llama amparo porque protege, porque ampara, porque cuida, y todas estas características describen a un refugio, el refugio de quienes necesitan protección ante la injusticia. ”

## HAY JUECES EN BERLÍN.

Lo dijo Ferrajoli cuando hablaba de la valentía de los jueces para sostener el cumplimiento de sus sentencias; de la valentía que debía tenerse para sostener el sentido de un fallo. Incluso cuando el cúmulo de las pruebas apoye al Derecho y no a la justicia. Incluso cuando lo único con lo que se cuenta, es la convicción. ¡Incluso cuando la única defensa que tenga el gobernado sea la duda!

Hay jueces en Berlín; cuando vemos jueces que están dispuestos a dejar su mejor esfuerzo por ayudar y no sólo por resolver números.

Hay jueces en Berlín; cuando vemos en las noticias que son abatidos por el hampa por haber impuesto sanciones reales y no negociadas a los transgresores del Estado de Derecho.

Hay jueces en Berlín; cuando vemos a juzgadores dispuestos a retar a la máxima figura de Poder en un país, vetando sus hierros y reconociendo sus aciertos, pero con el conocimiento del juez Hércules de Dworkin de su lado.

Hay jueces en Berlín; cuando una vida importa más que todos los presupuestos económicos al conceder una suspensión. Y no obstante ello... sabe que al resolver un asunto genera a cien inconformes con su criterio y a un mal agradecido que ufano dirá afuera “gané... Gané porque engañé al juez.”

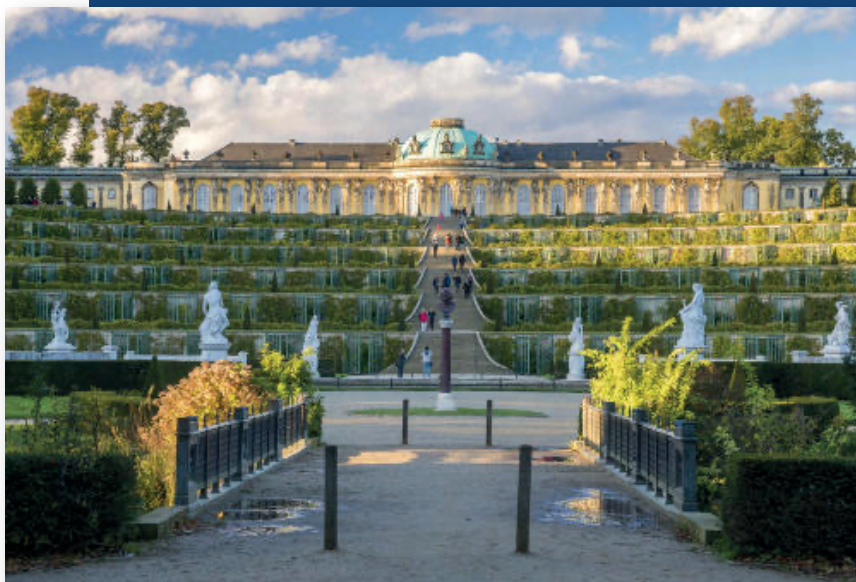
Pero lo que nadie sabe, es que no engañó al juez, él sabía que eso se diría de él, porque así ha sucedido desde siempre.

Pero ese juez es humano, y sabe que incluso tras haberse acercado durante el día al Olimpo y robar el fuego del conocimiento como hizo Prometeo a los mismos

Dioses, al llegar a su casa y quitarse la investidura se sentará para obtener la única aprobación de su propio juez; el único que tiene el poder de ponerlo en el estrado y que con una sola pregunta juzgará todas sus acciones del día: ¿Qué hiciste hoy, papá?

A él habrá de responderle si lo hizo bien o lo hizo mal, a él habrá de verlo a los ojos y decirle que hizo su mejor esfuerzo por dejarle un mundo más justo en donde vivir, a él tendrá que explicarle que la justicia no se vende ni se negocia, a él tendrá que explicarle que el buen juez comienza y termina por su casa con principios y con gallardía en su actuar y que no importa lo que los demás piensen de él, porque él actuó en justicia.

No se confundan, señores. Es cierto, hay jueces en Berlín y también ¡hay jueces en México!



# IMPLICACIONES FISCALES DEL MUTUO



**Mtro. Alfredo Jesús Vargas Cid del Prado**

L.C y E.F. por la Facultad de Contaduría y Administración (UNAM). Maestro en Derecho Fiscal y Administrativo egresado del CUEJ.

**F**rente a los problemas de salud mundial y su repercusión en la economía, muchos contribuyentes han tenido la necesidad de buscar financiamiento para seguir operando, acudiendo a la práctica más común: solicitar un préstamo.

En una idea general esta figura no tiene repercusiones fiscales de acumulación y causación de impuestos; sin embargo, esta apreciación no es del todo correcta.

En materia civil entendemos al préstamo como el acto jurídico denominado mutuo. El Código Civil lo define como aquel contrato por el cual el mutuante se obliga a transferir la propiedad de una suma de dinero o de otra cosa fungible al mutuario, quien se obliga a devolver otro tanto de la misma especie y calidad. A su vez encontramos dos especies de mutuo: simple o con interés.

En síntesis, el mutuante (quien otorga el préstamo) se obliga a transferir una suma de dinero a otra persona denominada mutuario (quien recibe el préstamo) a título gratuito o bien estipulando el porcentaje de un interés; obligándose este último a pagar lo pactado.

Inicialmente cuando el mutuario recibe el dinero, lejos de modificar positivamente su patrimonio genera una deuda por pagar, lo que en términos contables se conoce como un pasivo. Por ello el monto recibido no se considera ingreso para efectos fiscales.

Pese a lo anterior, existen determinados escenarios en donde la naturaleza del mutuario, del mutuante y del préstamo recibido le da a este el matiz de ingreso acumulable, como a continuación se detalla:

## **A)** Omisión de aviso

MUTUANTE	MUTUARIO	SITUACIÓN JURÍDICA O DE HECHO	CONSECUENCIA FISCAL
Persona física o moral (préstamo otorgado en efectivo mayor a \$ 600,000.00 pesos)	Persona moral	La persona moral no informa a la autoridad el préstamo recibido dentro los 15 días posteriores a su recepción.	La suma recibida se considerará ingreso acumulable (Art. 76, f. XVI y 19 f. XI LISR).



**B)** Discrepancia fiscal

MUTUANTE	MUTUARIO	SITUACIÓN JURÍDICA O DE HECHO	CONSECUENCIA FISCAL
Persona física o moral (préstamo otorgado mayor a \$	Persona física.	La persona física no informa en su declaración anual el préstamo recibido.	La contribuyente persona física se ubica en un procedimiento de discrepancia fiscal con la posibilidad de que el monto recibido por concepto de préstamo se considere ingreso acumulable.  (Art. 90 tercer y cuarto párrafo, art. 91 párrafo quinto LISR).

**NOTA:** Aunque la obligación se genera cuando el préstamo sea mayor a seiscientos mil pesos, vale la pena considerar cumplir la obligación de informar cualquier monto recibido a efecto de evitar la discrepancia fiscal.

**C)** Dividendo ficto

MUTUANTE	MUTUARIO	SITUACIÓN JURÍDICA O DE HECHO	CONSECUENCIA FISCAL
Persona moral.	Persona física con naturaleza de socio o accionista.	<ul style="list-style-type: none"> <li>El préstamo otorgado por la empresa no es consecuencia normal de sus operaciones.</li> <li>Se pacta a un plazo mayor de un año.</li> <li>El interés pactado no es igual o superior a la tasa que fije la Ley de Ingresos de la Federación.</li> </ul>	La autoridad considerará el préstamo recibido por el socio como un dividendo ficto sujeto a ISR; donde el costo del impuesto podría ascender hasta en un 40 % del total del préstamo otorgado.  (Art. 140, f II LISR).

**D)** Condonación del sistema financiero

MUTUANTE	MUTUARIO	SITUACIÓN JURÍDICA O DE HECHO	CONSECUENCIA FISCAL
Persona moral del sistema financiero.	Persona física con actividad empresarial y profesional.	La institución financiera otorga una quita sobre el préstamo origen.	El contribuyente considerará ingreso acumulable la diferencia que resulte de restar del principal actualizado por la inflación el monto de la quita.  (Art. 101, f. I LISR).

**E** Quita de mutuante no perteneciente al sistema financiero

MUTUANTE	MUTUARIO	SITUACIÓN JURÍDICA O DE HECHO	CONSECUENCIA FISCAL
Persona física o moral que no es parte integrante del sistema financiero.	Persona física con actividad empresarial o profesional.	El mutuante otorga una quita sobre el préstamo origen.	El contribuyente considerará ingreso acumulable el monto total de la condonación.  (Art. 101, f. I párrafo segundo LISR).

**NOTA:** Las personas morales tendrán el mismo efecto en cuanto a la acumulación de remisiones o quitas mencionadas en los incisos d) y e).

**F** Presunción de ingresos por parte de la autoridad

MUTUANTE	MUTUARIO	SITUACIÓN JURÍDICA O DE HECHO	CONSECUENCIA FISCAL
Persona física o moral.	Persona física o moral.	La obtención del préstamo no cumple los requisitos de materialidad y fecha cierta al no haber contrato firmado, comprobantes de depósitos o transferencias, carecer del registro contable respectivo o no haber correspondencia en los movimientos bancarios.	La autoridad podría considerar el monto del préstamo como un ingreso omitido y acumularlo.  (Art. 59, f. IV CFF).

Si bien la obtención del numerario necesario, adquirido por medio de un préstamo, para continuar con las operaciones de un contribuyente no detona la imposición de un pago de contribuciones de manera inmediata; si requiere el cuidado preciso para cumplir con las formalidades que satisfagan a corto y largo plazo los requisitos de materialidad, fecha cierta, de avisos informativos fiscales e incluso referentes al tema de lavado de dinero, a fin de que el contribuyente evite excesivas cargas fiscales y la imposición de sanciones.





# CONSIDERACIONES SOBRE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO

Lic. Rogelio Castillo Rosales

Maestrante en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos de la maestría en Derecho constitucional, licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, bajo la tesis intitulada *Análisis crítico a la reforma constitucional al juicio de amparo*. Se ha desempeñado como servidor público en la administración pública (IMSS, PGJCDMX, PROFECO), abogado postulante con más de 10 años de experiencia; actualmente labora en el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación.

Es bien sabido que nuestra institución del amparo es tan noble como querida, además de recurrente, aunque no precisamente ágil y sencilla como se quisiera. Pues constituye el medio extraordinario de defensa que tienen las personas habitantes de la República, para hacer frente a los actos y omisiones de la autoridad, así como las normas generales que transgredan en su perjuicio los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados suscritos por el Estado mexicano. Sin embargo, este juicio constitucional no resulta procedente en todo caso, en función de que el ejercicio de la acción de amparo, ya sea en la vía directa o en la indirecta, debe supeditarse a ciertos requisitos y exigencias previstos tanto en la Constitución Federal como en la Ley Reglamentaria de sus artículos 103 y 107. De tal suerte que, si el acto (positivo o negativo) o la norma que se tilda de inconstitucional encuadra en alguna de las hipótesis previstas en la Ley Suprema, en la ley reglamentaria o incluso en su interpretación, el juzgador federal se halla en impedimento para resolver el asunto sometido a su conocimiento, dado que se está ante un motivo de inejecutabilidad de la acción constitucional y, por ende, el juicio de amparo resulta improcedente.

Al hablar de “improcedencia”, debemos referirnos a lo opuesto a lo que es procedente, esto es, a aquello con falta de oportunidad, de fundamento o de derecho.<sup>1</sup> Desde una perspectiva amplia, en términos procesales, la “improcedencia” consiste, señala Rubén Sánchez Gil (2017) es “la inviabilidad de que el tribunal analice y resuelva el litigio que se le plantea.”;<sup>2</sup> en un sentido estricto y, para efectos del amparo, la improcedencia es concebida como la imposibilidad del juzgador de amparo de conocer y/o resolver un juicio constitucional sometido a su potestad, al actualizarse alguna de las hipótesis contenidas en la Constitución Federal o en la Ley de Amparo.

El hecho de que el amparo no sea procedente en todo caso se justifica, en la medida en que la jurisdicción ordinaria perdería razón de ser, pues todos los recursos legales o medios de defensa establecidos en las leyes perderían eficacia, al existir la posibilidad de acceder a este juicio tutelador de derechos fundamentales; de ahí que el ejercicio de la acción constitucional se vea limitado, debiendo cumplir ciertos requisitos al excitar la maquinaria jurisdiccional federal, haciendo del amparo un proceso de alta especialización.

<sup>1</sup> REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, *Diccionario de la lengua española*, consultado el 22 de agosto de 2021, en: <https://dle.rae.es/improcedencia?m=form>

<sup>2</sup> SÁNCHEZ GIL, Rubén, *La improcedencia del juicio de amparo*, México, IIJ-UNAM, 2017, p. 361.



A pesar de ello, la improcedencia del medio de control de la constitucionalidad del poder político por antonomasia constituye una restricción, y ello se ve inmerso en el ejercicio del derecho efectivo de acceso a la justicia, consagrado en los numerales 17 de la Carta Magna y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que sostienen que este derecho fundamental sólo puede ser objeto de limitaciones razonables y proporcionadas que deben ser interpretadas de la manera más favorable posible a la admisión de la acción procesal. A este respecto, es dable mencionar que existen posturas doctrinales que sostienen que es posible realizar un parámetro de regularidad constitucional y convencional sobre dichas causales contenidas en la ley de la materia, ello, derivado de la principal consecuencia del control difuso instituido por el más alto Tribunal del país en el caso Radilla, en el expediente varios 912/2010 donde, para el juicio de amparo, es la posibilidad de que los tribunales, aun oficiosamente, puedan estudiar la regularidad de las disposiciones que lo regulan y omitir su aplicación cuando no se ajusten a las normas fundamentales que los rigen.<sup>3</sup>

Ahora, si bien las causales de improcedencia pueden derivar de la Constitución, así como de la jurisprudencia, lo cierto es que únicamente en la legislación de la materia es que se contienen –de forma enunciativa mas no limitativa– una serie de supuestos de inejecutabilidad de la acción de amparo, específicamente en el artículo 61, fracciones I a XXIII, aunque esta última es una hipótesis “comodín”, un supuesto genérico que el legislador ordinario casi siempre agrega al final de un catálogo enunciativo, aunque no precisamente limitativo sobre diversos casos; sin embargo, para efectos de esta monografía, no correspondió su estudio individual, infortunadamente por razones de estilo literario, dada la voluminosidad que ello acarrearía.

No obstante lo anterior, ya sea que se tramite por la vía directa (uniinstancial), ya por la indirecta (biinstancial), existe una multiplicidad de supuestos por los cuales no es procedente el juicio de amparo. Ello, obedece a que en contra de ciertos actos se encuen-

tran ya establecidos en la Constitución General de la República o en las leyes reglamentarias o secundarias medios de control de la constitucionalidad o para combatir determinadas actuaciones puede promoverse algún juicio o recurso legal ordinario, o bien, en función de las características, efectos o consecuencias del acto que pretenda impugnarse, no es posible analizarlo a través del juicio constitucional; asimismo, porque atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se conculcarían diversos principios constitucionales, como el mal llamado de división de poderes, acorde a la distribución de funciones del poder público, pues hay que recordar que en su obra *Del espíritu de las leyes*,<sup>4</sup> Montesquieu, inspirado en las ideas de Locke, abogó por depositar el gobierno del Estado en los poderes que actualmente se conocen: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, cuya doctrina tenía como finalidad que el poder frenara el poder, esto es, que cada poder sirviera de contrapeso para los otros dos, con tal de evitar la reunión del gobierno en un solo individuo o en una sola corporación, lo que genera el despotismo.

De tal suerte, que un juicio de amparo puede devenir improcedente por dos motivos; a saber: 1. Por una causa notoria, manifiesta e indudable (de improcedencia),<sup>5</sup> o 2. Por una causal de improcedencia contenida en la Constitución o en la Ley. En el primer caso, es invocada por el juzgador en el auto “cabeza de proceso”, esto es, en el primer acuerdo que recaiga a la demanda presentada por el quejoso, cuya consecuencia será el desechamiento de la misma, aunque puede darse el caso que el juez dicte un acuerdo de prevención y al aclararse el escrito inicial, lo deseche, al advertir el motivo constitucional o legal para ello; en el segundo supuesto, se decretará el sobreseimiento<sup>6</sup> en el juicio, ya sea que el juez de amparo las advierta de oficio (al ser de estudio preferente, atento al artículo 62, de la ley de la materia), ya que las partes en el juicio las hagan valer.

Invariablemente, al actualizarse una causal de improcedencia, se decretará el sobreseimiento en el juicio, en términos de la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo y se puede decretar fuera de audiencia

3 Cfr. FERRER MAC-GREGOR, Eduardo y SÁNCHEZ GIL, Rubén, *El nuevo juicio de amparo. Guía de la reforma constitucional y la nueva Ley de Amparo*, 2da ed., México, Porrúa-UNAM, 2013, pp. 164 y 165.

4 Cfr. MONTESQUIEU, *Del espíritu de las leyes*, trad. Mercedes Blázquez y Pedro de Vega, Barcelona, Ediciones Altaya, S.A., 1987.

5 Véase la tesis 2a./J. 10/2003, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época I. XVII, marzo de 2003, p. 386. Número de registro 184572: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.

6 El “sobreseimiento”, a diferencia de la improcedencia, implica necesariamente la admisión de la demanda y conlleva a la terminación del juicio sin entrar al estudio de fondo del asunto.

constitucional, en tratándose de amparo indirecto o al celebrarse la misma, aunque no es una resolución en estricto sentido, sino un auto, justamente porque el juez no aborda cuestiones de fondo, no lo resuelve, sino lo da por concluido. Siguiendo esta lógica, no todas las causales de improcedencia dan lugar al sobreseimiento en el juicio, toda vez que puede darse el supuesto de la actualización de una hipótesis manifiesta e indudable, dando lugar al desechamiento de la demanda, así como tampoco todas las causales de sobreseimiento se actualizan por operar las de improcedencia.

En ese orden, conviene señalar que en segunda instancia de amparo indirecto, al interponerse el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por el juez de distrito, no existe impedimento alguno para que el tribunal colegiado de circuito que conozca del medio de impugnación, pueda válidamente de oficio estudiar e invocar las causales de improcedencia que omitió el juez de primer grado, pues al ser una cuestión de orden público y estudio preferente y al reasumir jurisdicción como tribunal revisor, se halla en aptitud de advertir diversas pudiendo, en todos caso, decretar el sobreseimiento en el juicio, parcial o totalmente, modificando o revocando el fallo de la primera instancia. Así lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/97, con número de registro 198223, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el tomo VI, julio de 1997, página 137, correspondiente a la Novena Época, que lleva como rubro: **REVISIÓN. ESTUDIO OFICIOSO DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA NO EXAMINADAS POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.**

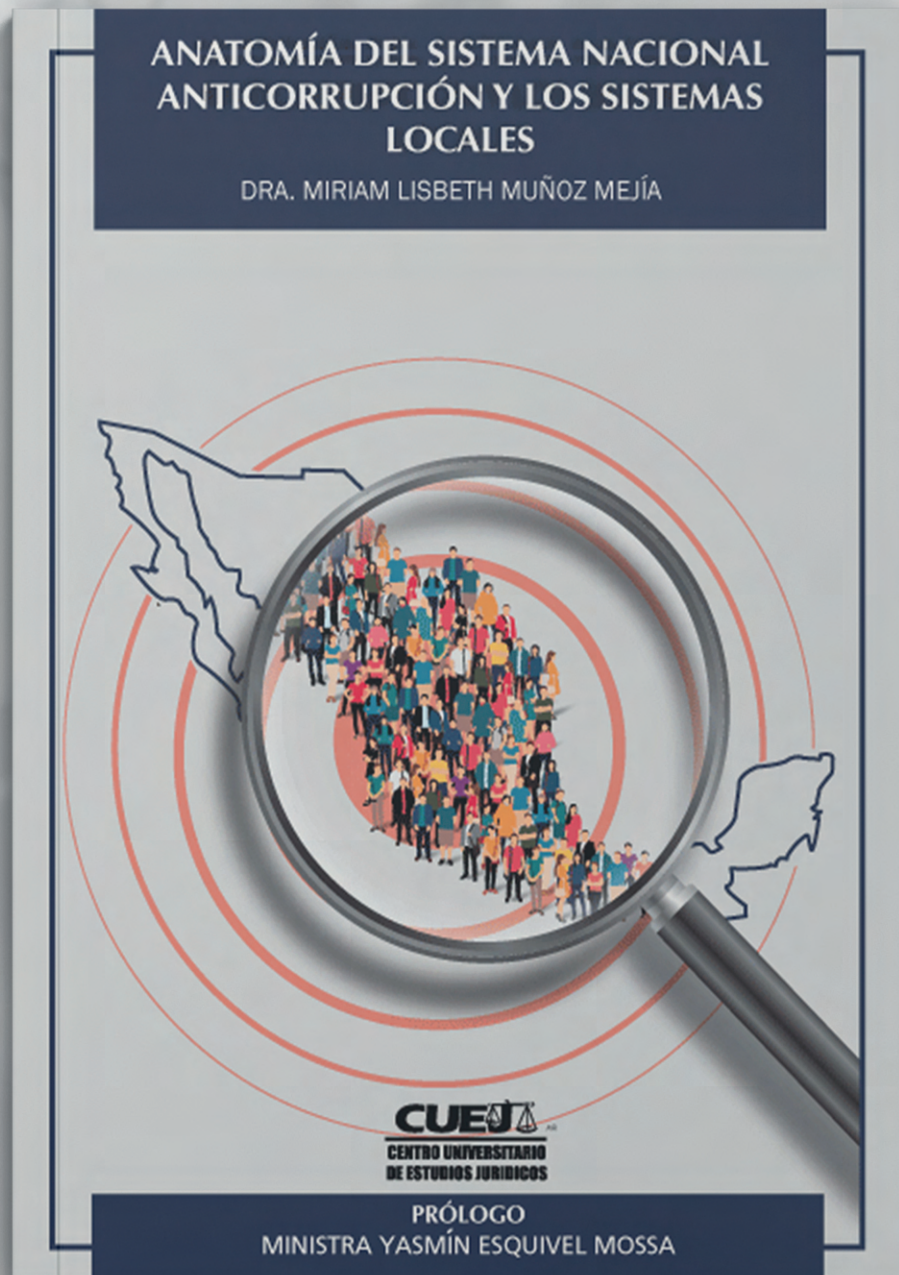
Así, al abordar las causales de improcedencia, es común encontrar en la doctrina que se hace referencia a los principios rectores del juicio de amparo por su íntima relación dentro del proceso de amparo (en función de que dicho juicio comprende y es un todo: desde la acción hasta la sentencia), esto es, aquellos postulados fundamentales que sirven de base y encauzan al referido medio de control de la constitucionalidad del poder político. Los principios rectores del juicio de derechos fundamentales se encuentran contenidos en el artículo 107 de la Constitución Federal y en diversos preceptos de la ley reglamen-

taria y constituyen pues, las reglas a que se somete este juicio, a fin de que la justicia de la Unión pueda conocer y resolver lo que en derecho corresponda sobre una controversia de esta índole ante ella planteada, restableciendo, en su caso, el orden constitucional, y pueden estudiarse desde aquellos contenidos en la demanda (de instancia de parte agraviada, de agravio personal y directo y de definitividad) o en la sentencia (de estricto derecho y de relatividad de las sentencia).

Por lo anterior, se concluye que la improcedencia del juicio de amparo consiste en aquellas restricciones o limitantes establecidas en la Ley de Amparo o que resultan de la interpretación de algún precepto de la Constitución o de la jurisprudencia, por las cuales el juzgador se halla imposibilitado para conocer y resolver el asunto sometido a su potestad. Sin embargo, con el actual paradigma de revisión de regularidad constitucional, así como el control de convencionalidad ejercidos por los jueces constitucionales, existe la posibilidad de que se analice si una disposición de la Ley de Amparo —a pesar de ser una ley reglamentaria— sea acorde con los principios constitucionales, no los contravenga, ni conculque derechos fundamentales en perjuicio del quejoso, así como los contenidos en los tratados suscritos por el Estado mexicano. Ello, aunado al hecho de que, sin duda alguna, la improcedencia debe ser vista como una cuestión excepcional y no obligatoria u oficiosa por parte de los juzgadores de amparo, lo que conlleva a una interpretación conforme a la Constitución, seguido de la aplicación del principio pro personae, consagrado en el artículo 1º, de la Norma Fundamental.







DE  
VENTA  
EN

**librosyrevistas**cuej.com

el **SÓTANO**



EDITORIAL  
PORRÚA



mercado  
libre





## COLISIÓN DE DERECHOS HUMANOS: EL DERECHO HUMANO A LA SALUD Y EL DERECHO HUMANO A LA EDUCACIÓN

**Dra. Rosa Eloísa Pinzón Caballero**

Doctora en Derecho con mención honorífica por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, maestra en Derecho constitucional y amparo con mención honorífica por la Barra Nacional de Abogados, licenciada en Derecho por la UNAM y licenciada en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Abogada litigante con más de 17 años de experiencia en el despacho jurídico “Pinzón Romero Asociados” y con 21 años de servicio público en dependencias como Auditoría Superior de la Federación de la Cámara de Diputados, Secretaría de Seguridad Pública Federal y Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Profesora de asignatura en diversas instituciones educativas como Universidad Motolinía del Pedregal, Centro Universitario de Estudios Jurídicos, Universidad Abierta y a Distancia de México.

**E**n el presente artículo se realiza un análisis sobre la ponderación de dos derechos del menor: el derecho a la salud y el derecho a la educación; lo anterior como resultado de las acciones que ha implementado el Gobierno mexicano para el regreso presencial de los menores a clases en escuelas públicas y privadas.

En el mes de julio de 2021 el presidente de México anunció el regreso a clases presenciales para el 30 de agosto del mismo año, ya que para su gobierno “no hay nada que impida reiniciar aunado a que ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagios y ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, necesitamos abrir.”

Es un hecho que, hasta el momento, el programa nacional de vacunación en México no contempla vacunar a los niños menores de 18 años; sin embargo, es conocido por toda la población a nivel mundial que la variante Delta del virus SARS-CoV-2 (Covid-19) afecta más a este sector de la población que, a los grupos de adultos de 18 años en adelante, máxime si los menores no se encuentran vacunados. De junio a agosto, el incremento semanal de casos de Covid-19 en menores de edad, únicamente en la

capital, fue del 401 %. De acuerdo con los informes de la propia Secretaría de Salud Federal, desde el inicio de la pandemia y a la fecha, se han tenido que hospitalizar a 3,357 niños de 0 a 4 años; 1,133 de entre 5 y 9 años; 1,402 de 10 a 14 años y 1,599 en el rango de 15 a 19 años, sumando al 16 de agosto 8,491 menores internados a causa del Covid-19. Hasta el 12 de agosto fallecieron 41 niños y adolescentes únicamente en la Ciudad de México. El doctor Jorge Baruch, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM ha señalado que “... la ausencia de vacunación para niños y adolescentes y la presencia de la variante Delta son dos factores que pueden provocar la aceleración en el aumento de casos en menores...”. En el mismo sentido, con datos del INEGI, la Covid-19 es la séptima causa de muerte en niños menores de un año y de uno a cuatro años, la octava causa de muerte en niños de cinco a nueve años, la novena causa de muerte de niños de 10 a 14 años y la sexta causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años.

En México el tema relativo a los derechos humanos ha sido motivo de diversas disertaciones. Nuestro país formalmente se encuentra adherido a diversos

pactos y convenciones en materia de derechos humanos; uno de los instrumentos más importantes es la Convención Americana de los Derechos Humanos (Pacto de San José), al cual el Estado mexicano se adhirió el 24 de marzo de 1981, iniciando su vigencia en la misma fecha. Asimismo, en el ámbito universal, la protección de los derechos humanos se ha acrecentado con la adopción de instrumentos internacionales como la “Convención sobre los Derechos del Niño”, la “Convención contra la Tortura”, entre otros. Sobre la base de la interpretación del principio pro homine, el Estado mexicano se encuentra obligado a proporcionar la protección más amplia para el ser humano, siempre respetando los derechos y garantías del gobernado.

El Gobierno federal ha decidido, independientemente de las condiciones de salud por las que pasa nuestro país derivado de la pandemia de Covid-19, el regreso a clases presenciales de los niños, sin tomar en consideración o minimizar el riesgo que corren, argumentando entre otros, que la salud mental y física de los menores por el confinamiento amerita responder con el regreso a las aulas. Si bien es cierto que el confinamiento en el hogar tiene repercusiones en todos los seres humanos tales como depresión, incremento en los índices de violencia familiar, enfermedades, lo anterior no es razón para que los menores acudan a clases presenciales a costa del riesgo en su salud y en su propia vida, pasando definitivamente por alto diversos derechos que tienen los menores tanto a nivel nacional como internacional, violentando entre otros el interés superior del menor, la salud y lo primordial, la vida.

El Pacto de San José claramente establece en el artículo 4.1 en relación con el tema de salud, que “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción...”. El propio artículo 19 de la misma Convención instituye la obligación del Estado en proporcionar a los menores las medidas de protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. Por su parte, la “Convención sobre Derechos

del Niño” en el artículo 3.2 consagra que “Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas.” En el artículo 6.1 de la misma Convención consigna que: “Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” y finalmente, sin limitar los derechos que consagra dicha Convención en relación con los niños, el Artículo 24.1 funda que “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios” y el propio numeral 2.a del artículo 24 establece la obligación de los Estados, en este caso el Estado mexicano, de asegurar la plena aplicación del derecho a la salud, debiendo adoptar las medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil.

Por lo que respecta al tema de la educación, en nuestra Carta Magna como en las convenciones antes mencionadas, no existe una preferencia que privilegie la educación por encima de la salud y de la propia vida de los niños; ambos son derechos constitucionales que no pueden ser medidos, ni en teoría se podría privilegiar alguno de ellos por encima del otro. Sin embargo, en la actualidad en materia de derechos humanos, existe el tema de la ponderación de derechos, en donde la proporcionalidad de derechos radica sobre la base de la comprensión moderna de los derechos que se encuentra en la distinción entre el supuesto de hecho del derecho fundamental (que se encuentra determinado en la constitución) y la justificación de su restricción, la cual determina el ámbito de su protección o realización (que se encuentra en las normas infraconstitucionales).

En el presente estudio, se visualiza que existe una colisión de dos derechos fundamentales: el derecho a la educación y el derecho a la salud (el cual trae implí-

cito el derecho a la vida) de los menores; vale la pena preguntarnos, ¿cuál de ellos debe prevalecer por encima del otro en el Estado mexicano, dadas las actuales condiciones sanitarias de pandemia en las que vive la sociedad mexicana? Los derechos fundamentales se formulan a menudo como principios. Estos derechos contienen los valores más fundamentales de una sociedad, que reflejan los ideales que compiten entre sí para el logro de su máxima realización. La mayoría de los derechos fundamentales son relativos, es decir, que se puede justificar su no realización en la máxima extensión de su supuesto de hecho. El criterio conforme al cual se mide tal realización del derecho fundamental es el de la proporcionalidad. Se asume que el derecho fundamental que está en discusión ha sido sometido a una restricción a través de una medida infraconstitucional; sin embargo, ¿cuál es la base, tanto formal como sustantiva, de esa restricción?



La proporcionalidad es una construcción jurídica y está compuesta por cuatro elementos: el fin adecuado, la conexión racional, los medios necesarios y la relación adecuada entre el beneficio ganado con la realización del fin y la vulneración causada al derecho fundamental, éste último se denomina ponderación. En el caso que analizamos la interrogante es ¿qué derecho debe ponderar el Estado mexicano, la educación o la salud de los menores? Y como consecuencia, ¿restringir el otro derecho? La respuesta a las anteriores interrogantes se encuentra en los componentes antes mencionados. La proporcionalidad se describe como un criterio que determina la relación adecuada entre los fines y los medios y por su parte la ponderación consiste en pesar o sopesar los derechos a la educación y a la salud (vida) y poder resolver la controversia entre ambos. Para definir qué derecho debe prevalecer se utiliza el test de ponderación dado que tenemos una colisión de dos principios que consagran derechos humanos. Evidentemente estos principios no se conciben como simples derechos, que pueden o no cumplirse, sino que son mandatos de optimización en los que se busca que ambos sean cumplidos en la mayor medida posible y con el menor detrimento. Por lo tanto, en este caso, los factores relevantes a considerar en esta proporcionalidad son los fines y los medios escogidos para alcanzarlos.

Es precisamente en este punto donde cobra relevancia el realizar este test de ponderación para que el Ejecutivo federal motive y fundamente debidamente, la prevalencia del derecho a la educación sobre el derecho a la salud, ya que ambos tienen el mismo rango constitucional resolviendo esta colisión de principios, y no como un criterio de interpretación personal del Ejecutivo (además sin bases sólidas), pues el criterio debe consistir en privilegiar con la mayor amplitud posible la protección del derecho de los menores (en aras del interés superior), ya que se encuentran en una condición menos favorable y se debe buscar al mismo tiempo, el menor detrimento posible de la salud y de la vida, ya que este derecho de los menores resultaría más afectado, que el propio derecho a la educación en caso de insistirse en la reapertura de aulas.



La ponderación de derechos es un subprincipio del principio de proporcionalidad el cual como ya se ha mencionado, es un criterio jurídico utilizado alrededor del mundo para la protección de derechos fundamentales y trae implícito también el subprincipio de idoneidad que exige que una limitación sea adecuada para contribuir a la obtención de un fin constitucionalmente legítimo. En conclusión, observamos entonces que el principio de proporcionalidad es un mecanismo que busca la optimización de principios y que en el caso que nos ocupa es por demás evidente, que debe prevalecer el derecho a la salud y a la vida por encima del derecho a la educación. Con base en lo anterior, el Ejecutivo federal debería implementar el test de proporcionalidad a efecto de analizar esta problemática de colisión de derechos constitucionales y con bases sólidas, tomar decisiones correctas e idóneas, ya que de lo contrario, sus decisiones pueden afectar no solo la salud y vida de los menores en este país, sino de millones de familias que pueden enfermar gravemente ante la actual tercera ola de contagios por la Covid-19 que se vive a nivel mundial y que puede hasta derivar en muertes masivas de gobernados por falta de atención médica en el país, situación que de ninguna manera se justifica por la imperiosa necesidad, a criterio del Ejecutivo, de regresar a las aulas.

## CONCLUSIÓN

Cuando dos derechos fundamentales se colisionan y se debe ponderar uno de ellos, implica una actividad de argumentación jurídica que no debe tomarse a la ligera, ni sustentarse en bases no racionales. En la decisión del Ejecutivo federal del regreso de menores a aulas de manera presencial, se evidencia que está privilegiando el derecho a la educación por encima del propio derecho a la vida que es una responsabilidad y obligación que debe asumir el Estado mexicano. Tanto autoridades educativas como el Ejecutivo Federal deben adoptar criterios razonables que les permita motivar la prevalencia del derecho humano a la educación sobre el derecho humano a la salud y por ende a la vida; que en opinión de la suscrita con

el análisis realizado en el presente y por simple razonamiento lógico, jurídico, racional y social, prevalece el derecho humano a la salud y a la vida sobre el derecho a la educación, máxime que los niños no se han quedado sin instrucción académica por parte de la Secretaría de Educación Pública.

El hecho de reabrir las aulas para que los estudiantes acudan de manera presencial a tomar sus cátedras además, debe contemplar no solo protocolos de actuación al interior de los inmuebles escolares, sino protocolos sanitarios y hospitalarios para el caso de que en esta tercera ola de contagios, se incrementen los casos de Covid-19 en menores al interior de los propios planteles educativos, ya que está por demás comprobado que de no tomarse las medidas de prevención adecuadas, se incrementarán los contagios en cada una de las familias que decidan enviar a los menores a la escuela para sus clases presenciales, pero más preocupante resulta que es evidente que el Estado mexicano no está preparado para atender masivamente los contagios que pueden desencadenarse por ponderar el derecho a la educación sobre el derecho a la salud y a la vida.

## FUENTES DE CONSULTA

Barak Aharon, Proporcionalidad, Los derechos fundamentales y sus restricciones, Palestra Editores, Lima, 2017.

Comisión Nacional de los Derechos Humanos. (1991). Convención Sobre los Derechos del Niño de 25 de enero de 1991, México, Recuperado de [http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Pro victima/1LE-GISLACI%C3%93N/3InstrumentosInternacionales/F/convencion\\_derechos\\_nino.pdf](http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Programas/Pro victima/1LE-GISLACI%C3%93N/3InstrumentosInternacionales/F/convencion_derechos_nino.pdf)

Organización de Estados Americanos, Convención Americana de los Derechos Humanos de 7 de noviembre de 1969, México, Recuperado de [https://www.oas.org/dil/esp/tratados\\_b-32\\_convencion\\_americana\\_sobre\\_derechos\\_humanos.htm](https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm)



DE  
VENTA  
EN

**librosyrevistas**[cuej.com](http://cuej.com)

**el SÓTANO**



EDITORIAL  
PORRÚA



mercado  
libre



# DERECHO CORPORATIVO, UNA INDUDABLE RELACIÓN CON LAS DEMÁS ÁREAS DEL DERECHO Y LAS CIENCIAS AUXILIARES



## Mtro. Gerardo Hurtado Razo

Licenciado en derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México; especialista en propiedad intelectual e industrial; maestro en Derecho corporativo; actualmente doctorando en Derecho Aduanero y Comercio Exterior en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Socio fundador de la firma J. Hurtado & Mendoza y Asociados. Litigante en Derecho corporativo y propiedad intelectual e industrial. Profesor a nivel licenciatura de Derecho de la empresa, derecho de la propiedad intelectual, contratos mercantiles, y sociedades mercantiles.

**E**l derecho corporativo, también conocido como el derecho de la empresa o derecho societario, es una de las áreas de estudio que ha cobrado gran importancia en nuestros tiempos, debido a la necesidad de tener un mejor orden administrativo o gobierno dentro de las personas morales, disciplina que ha ampliado su difusión entre los estudiosos del derecho.

Las sociedades han buscado desde su acta constitutiva, hasta su disolución y liquidación, tener un orden que permita cumplir con todas las obligaciones y derechos que se derivan a partir del nacimiento de un acuerdo de voluntades entre los socios; personas físicas que desean consumir un fin, ya sea con expectativas de obtener un beneficio preponderantemente económico o no lucrativo. La relevancia del nacimiento de una sociedad mediante su acuerdo de voluntades, nos habla de la decisión de uno o más individuos por desarrollar los estatutos sociales con los cuales se constituirá y regirá su sociedad; como fuente primigenia de armonía en conjunto con las leyes que regulen la figura jurídica, pacto que desarrollará un fin social (civil) o una actividad comercial (mercantil).

En lo general, la estructura administrativa de una sociedad es parecida entre las diversas figuras jurídicas que existen en ellas, variando en sus diversas modalidades, cuyos puntos precisos y primigenios a cumplir son su organización y administración, por ende, se desarrollan los puntos finos que los accionistas o socios deberán conocer. Esta responsabili-

dad no solamente puede recaer en el administrador único o el consejo de administración, o el comisario; quienes propiamente serán el órgano de dirección administrativa y vigilancia, figuras por las cuales correrán las funciones de dirigir o gobernar a la sociedad. Gobierno corporativo que dependerá en un inicio de la estructura que se plasme en sus preceptos constitutivos, los cuales serán la columna vertebral de la sociedad desde su nacimiento hasta su liquidación; en este punto nace la problemática más interesante para sus socios, debido a que en la práctica el fenómeno más común es el desconocimiento del contenido y alcance (derechos y obligaciones) de cada uno de sus estatutos.

¿Qué sucede en realidad? La mayoría de las sociedades constituidas, en sus estatutos no fueron creadas específicamente para el fin deseado por sus socios, en el mejor de los casos el proyecto de acta es encomendado a un abogado que puede ser o no especialista en derecho corporativo; quien será el encargado de desarrollar el proyecto que contendrá la forma en cómo será administrada y dirigida la sociedad, pero en la práctica el uso de formatos por los profesionales del derecho ha generado que no sean los preceptos adecuados para el objeto social que desempeñaran.

Hoy las sociedades dentro del aspecto jurídico tienen una participación cada vez más amplia en sus actividades, pero a la vez con las actuales reformas y cambios



que han sufrido diversas legislaciones, estas han marcado la evolución y la pauta para que el objeto social tenga que ser más específico y delimitado, con el fin de evitar que las actividades sean vinculadas a actos considerados de simulación. Pero ¿por qué decir simulación? Si en realidad sus actos son lícitos, el fenómeno en la práctica es claro, debido a que en su objeto social se tiene la mala costumbre de colocar que puedan desarrollar cualquier actividad que se les ocurra a los encargados de la elaboración del proyecto.

Estas figuras jurídicas son tan delicadas, a tal grado de darles trato de una vida propia y un destino de persona física, que es contenida en un ente de ficción jurídica (persona moral); este tipo de acuerdos contenidos en un contrato social buscan darle vida e independencia propia, y un desarrollo en el transcurso de sus actividades al auxiliarse de todas las áreas del derecho y de las ciencias auxiliares del propio derecho. Pero el constante uso de formatos ha generado un completo desconocimiento y entendimiento por parte de los socios, respecto de los principios que regirán a la sociedad. La práctica ha demostrado que aun cuando se asiste a un especialista, la realidad es que ellos también han caído en el abuso de estos formatos y no desarrollan una sociedad en concordancia a las necesidades y requerimientos que les han encomendado.

Aun cuando se recurra únicamente a un fedatario público, nos encontramos en presencia del mismo fenómeno que existe entre los abogados, debido a que los formatos fueron diseñados para un tipo de sociedad, ya sea civil, mercantil, cooperativa o bursátil. Dicho fenómeno es continuo porque fueron elaborados para la sociedad que en ese momento se les encargó constituir, o en su caso fueron diseñados como un formato general que cubriera los mínimos requeridos para la existencia de una sociedad. Pero el fenómeno se ha extendido inclusive al propio Estado, quien para las sociedades de acción simplificada ha optado por proporcionar un formato de estatutos sociales en la página web ([www.gob.mx/tuempresa](http://www.gob.mx/tuempresa)), el cual no se pueden adecuar en el momento del acto constitutivo de dicha sociedad.

Diferentes doctrinarios han dado al acta constitutiva la calidad de ser la primera asamblea general ordinaria de una sociedad, punto de origen de la idea de crear un ente jurídico con personalidad propia; que cumpla con ciertos atributos y características que la acompañaran (domicilio, patrimonio, capacidad, denominación o razón social [nombre] y nacionali-

dad), durante su existencia y que serán parte de la identificación de la persona moral. Documento jurídico que para efectos ante terceros deberá cumplir ante un fedatario público con un protocolo y formalidades que darán fe del acto celebrado, y se perfeccionará con su inscripción ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio.

No perdamos de vista que el derecho reconoce como figuras jurídicas a las personas físicas y a las personas morales, mismas que desde los inicios de nuestra disciplina de estudio han sido dotadas de atributos que las identifican en el ámbito del derecho civil; dicho acto nos da la pauta para reflexionar sobre cómo una persona moral es la misma creación de un ente que nacerá y se desarrollará durante el transcurso del tiempo, con el único objetivo de lograr el desarrollo de un fin social (no lucrativo) o una actividad preponderantemente económica; actos que se manifiestan con la sola exteriorización del acuerdo de voluntades de las personas físicas que decidieron darle vida.

Lo interesante es cómo las personas morales tienen la necesidad en diferentes momentos de su vida de todas las áreas del derecho y las ciencias auxiliares, para poder cumplir con sus objetivos frente a terceros. Si bien es cierto se ha buscado una independencia para el objeto de estudio del derecho corporativo, pero la práctica jurídica nos ha demostrado que está relacionado con todas las ramas del derecho, aun cuando el derecho societario se encuentra en un punto de separación por sus leyes específicas que lo regulan. Lo cierto es que su relación con las otras ramas jurídicas es innegable.

Por su organización y funciones, encontramos que el derecho corporativo busca en las ciencias auxiliares del derecho un apoyo para regular a las sociedades y cumplir con su administración en la parte económica y contable, que a sus vez se combinan con el derecho fiscal, administrativo y financiero. No puede dejar de depender como una persona física de todas las áreas del conocimiento para su desarrollo y sobre vivencia.

Así, el sujeto o persona moral regulado por el derecho corporativo encuentra su origen en el derecho civil, por los atributos de la persona y la necesidad de que las personas físicas se unan, a fin de lograr objetivos comunes que les generen un beneficio individual o colectivo. El propio Estado es una ficción, una persona moral necesaria para la organización de la sociedad, y su origen parte de los primeros asenta-

mientos del hombre e incluso de la familia como una forma de organización.

Es innegable que las personas morales surgen a partir de las necesidades, y son reguladas por las áreas del derecho más longevas; pero su necesidad parte no sólo del derecho, sino también del conjunto de ciencias auxiliares que ayudan a su crecimiento y fortalecimiento. El propio derecho corporativo en su doctrina nos obliga a estudiar diversas áreas del conocimiento y ver cómo se conjugan para lograr una serie de principios que lo rigen. Las sociedades no únicamente tienen fines económicos, sino sociales, por ello las propias leyes que las regulan se encuentran en diferentes disciplinas del conocimiento aplicado en las ciencias auxiliares, para ejecutar el funcionamiento de su estructura, organización y administración.

Es por ello por lo que el derecho corporativo guarda una estrecha relación con todas las ramas del derecho y con ciencias auxiliares como la medicina, psicología, filosofía, ingeniería, entre otras; no se concibe una independencia total de dicha área del conocimiento jurídico, debido a que para lograr sus fines jurídicos depende de las demás disciplinas. No podemos separarlo por completo y decir que es autónomo ante las necesidades que en la práctica lo vinculan constantemente a las demás áreas del conocimiento jurídico.

La doctrina ha buscado darle un carácter independiente, pero es indudable que al estudiarse en los propios libros se necesita profundizar en las demás áreas de nuestra materia de estudio, para poder comprender cómo en la práctica se regula a su interior la vida de una sociedad; no se puede dejar de ver los lazos tan estrechos con el derecho civil, fiscal, administrativo, penal, laboral, seguridad social, y demás materias.

En conclusión, las respuestas a las necesidades de las sociedades en la práctica siempre son encontradas en otras áreas del conocimiento, que van más allá de las leyes que regulan. Para nosotros es un estudio diversificado de todos los conocimientos jurídicos que existen y fluyen en el derecho corporativo que en realidad regula los atributos de las personas morales, que en este caso son su organización, funcionamiento, administración y su gobierno corporativo. Así es como en la práctica las también llamadas sociedades o empresas, ya sean de naturaleza civil o mercantil, desarrollan y materializan todas sus actividades con el auxilio de todas las áreas del derecho y de las ciencias auxiliares, por ello indudablemente siempre tendrán la necesidad de recurrir a alguna de estas.



**ecex**

ESCUELA DE COMERCIO EXTERIOR Y ADUANAS

CDMX  
VERACRUZ

Especialízate en

# **Tráfico de Mercancías y Tramitación Aduanal**

**Av. Municipio Libre #103 Col. Portales,  
Del. Benito Juárez. C.P. 03300, México, CDMX**  
**Alc**  
**(55) 5998 8186 - 5575 9840 - 5672 2020 - 52430290**



# LA GRAN CRISIS HUMANITARIA DE NUESTROS TIEMPOS: LA MIGRACIÓN. CASO MEXICANO

Dr. Víctor Amaury Simental Franco

Licenciado, maestro y doctor en Derecho por la UNAM, maestro y doctor en medio ambiente y desarrollo por el IPN, investigador nacional nivel 1, autor de los libros *Análisis del Régimen Jurídico del Agua en México. Incompatibilidad entre la política privatizadora y el derecho humano al agua*; *La Ciudad de México un espacio socio-urbano no sustentable*; *Derecho Ambiental, Desarrollo Sostenible y Responsabilidad Social*; *Fundamentos Constitucionales del Derecho Electoral Mexicano*; *Obligaciones y contratación actuales*; *Derecho de las obligaciones*; *Enfoque actual de la Teoría General del Contrato*; y *Argumentación jurídica. Práctica y Deontología*.



La época actual tiene muchos elementos distintivos de otros momentos en la historia de la humanidad, pero podemos destacar los siguientes: una crisis ambiental sin precedentes (que, además, es provocada por acciones humanas); una revolución científica-tecnológica sin precedentes; un fenómeno de integración-globalización en materia económica y, por último; movimientos poblacionales masivos de países extremadamente desolados hacia otros desarrollados (o al menos, con mejores condiciones económicas, como México). En este artículo nos enfocaremos a este último aspecto y sus implicaciones jurídicas en el contexto mexicano.

La historia de la humanidad en gran medida es la historia de nuestras migraciones, naturalmente surgimos a la vida en la zona central de África, desde ahí en un continuo peregrinar, a lo largo de miles de años, poblamos el resto del mundo, la llegada a América significó el último gran salto invasor, cuando la Tierra pasaba por la más reciente fase glacial, lo que generó un puente de tierra que unía los extremos asiáticos y americanos.

Las migraciones se siguieron dando con la llegada de las civilizaciones, pues las poblaciones humanas se han caracterizado por ser alta demandantes, tanto de satisfactores naturales (alimentos), así como de otros de generación artificial (objetos manufacturados).

Las causas de las migraciones humanas se pueden dividir en dos grandes bloques: naturales y humanas. Las primeras aluden a sucesos naturales que alteran las condiciones necesarias para la subsistencia de las poblaciones, tales como son sequías, inundaciones, erupciones, terremotos (por mencionar los más notables, aunque el listado exhaustivo, es mucho más extenso); por otro lado, las causas sociales (sin que necesariamente estén disociadas de las naturales) aluden a guerras e invasiones.

México, obviamente no ha escapado a las reglas generales descritas en los párrafos precedentes, desde la llegada de los primeros grupos humanos en tiempos prehistóricos, hasta el surgimiento de las primeras civilizaciones en Mesoamérica, pasando por los continuos flujos migratorios inmediatamente

previos a la llegada española (los mexicas fueron de los últimos grupos procedentes del norte que ocuparon el centro de lo que hoy es México); posteriormente a la conquista española y la etapa de la Colonia, se evidencia un nuevo flujo migratorio de gente de Europa y África; más adelante, y concomitante a la independencia de México la llegada de migrantes de Asia (más el nunca concluido proceso de llegada de migración europea), han sido la constante. Por último, ya en períodos posrevolucionarios, la política nacional de asilo, facilitó la llegada de migrantes de naciones donde se vivieron procesos de persecución a disidentes políticos, así que miles de migrantes de España y varios países sudamericanos (sobre todo Chile), mostraron la continuidad de la permanente migración hacia México; sin embargo, la migración no sólo ha sido de afuera hacia dentro, con la entrada de los Estados Unidos (EUA) a la Segunda Guerra Mundial, la falta de mano de obra en ese país y la alta demanda de jornaleros, derivó en el inicio de un proceso de migración mexicana hacia EUA, la cual se acentuó con las crisis económicas que asolaron a nuestro país desde principios de los años ochenta; finalmente, para cuando se escriben estas líneas, tenemos que México se ha convertido en un país de tránsito y destino, para migrantes de diversas partes del mundo (Centro y Sudamérica, El Caribe y África).

Así tenemos que, México, la nación multicultural y multiétnica que nos define como mexicanos, ha tenido siempre una dinámica migratoria, desde la época prehispánica, que se mantuvo bajo la égida española y que, en esencia no se ha modificado (si acaso, se ha vuelto más compleja) con el período independiente. México, no sólo es punto de llegada de migrantes (de todos los confines del mundo), sino también lugar de salida de flujos migratorios (por millones).

El 30 de agosto de 2021 fue noticia nacional el trato que recibió un grupo de inmigrantes procedentes de Haití, Guatemala y Honduras, en especial, destacó el reporte de un migrante que fue golpeado por agentes del Instituto Nacional de Migración. Aquí es oportuno detener un tanto la reflexión, recordando que la gran mayoría de la población mexicana es descendiente de inmigrantes (y en estricto sentido, aludiendo a que la humanidad no nació en América, todos lo somos).

Y que, por décadas, el mal trato recibido hacía nuestros connacionales en EUA, ha sido motivo de un reiterado reclamo contra el país vecino. Tampoco debe escapar a nuestro análisis que, en los hechos, como condición para la entrada en vigor del nuevo tratado de libre comercio entre EUA, Canadá y México, se exigió que (de manera fáctica) México se convirtiera en un tercer país seguro (contenedor del flujo migratorio hacia EUA).

Ahora entremos al análisis de este complejo fenómeno a la luz del orden jurídico nacional (en esencia, los principios constitucionales): la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), base del ordenamiento jurídico nacional y norma suprema, tiene diversas disposiciones que tienen (o deben tener) aplicación directa para el asunto que estudiamos, de manera destacada, el artículo primero, el cual indica:

## CAPÍTULO I

### DE LOS DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS

**Artículo 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos

humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.

Como puede advertirse, la tutela de los derechos humanos que el Estado mexicano reconoce, no puede limitarse a la población mexicana, sino a todos los seres humanos que se encuentren en territorio mexicano; esto es significativo, y al menos, en el discurso jurídico, ubica al Estado mexicano en el pináculo de la práctica jurídica universal. Lamentablemente en la realidad, el Estado mexicano, sigue en una deuda notable por cuanto hace al cumplimiento debido de lo mandado por este artículo primero.

Concluyendo este breve ensayo, las líneas de acción ejecutadas por las autoridades migratorias de los Estados Unidos Mexicanos, muy probablemente se están desarrollando en contravención a los principios constitucionales; es cierto que el Estado mexicano debe velar por la seguridad nacional y que, eventualmente, los flujos migratorios masivos pueden ponerla en riesgo, sin embargo, deberán generarse marcos de acción que puedan conciliar la seguridad nacional de la población mexicana y el irrestricto respeto a los

derechos humanos para cualquier persona, por el sólo hecho de ser humano, con independencia de su nacionalidad.

Finalmente, la legislación secundaria, es oportuno recalcar, nunca puede contravenir lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si esto aplica para la legislación, con mayor razón, respecto de las disposiciones de índole administrativa.





# Conoce nuestras Maestrías

Maestría en **Derecho Aduanero  
y Derecho de Comercio Exterior**



Maestría en **Sistema Acusatorio  
y Juicios Penales Orales**

Maestría en **Derecho Fiscal  
y Administrativo**



Maestría en **Derecho Civil  
y Familiar**

Maestría en **Derecho  
Constitucional**





# LA REFORMA CONSTITUCIONAL LABORAL Y EL T-MEC



## Mtro. Magdaleno Villanueva Flores

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, de donde egresó con la especialidad de derecho del trabajo. Maestro en Derecho fiscal y administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, doctor honoris causa y doctorando por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Docente en la UNAM-SUA, Instituto Patria Bosques, Instituto Universitario de las Naciones Hispánicas y el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Abogado postulante en materia de laboral, civil y familiar desde 1992 a la fecha. Apoderado legal de INFONAVIT de 2005 a 2014 y de Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S. A. de C. V., de 2008 a 2014. Director de Procesos Contenciosos Penales y Laborales de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 2015 a 2020.

**D**espués de un siglo de sueño y de letargo, el derecho del trabajo recobra su dinamismo, se mueve y está más vivo que nunca. Recordemos que fue en la Constitución de 1917 cuando México se erigió como el primer país que elevó a rango constitucional el derecho al trabajo y estableció las bases para que se desarrollara el derecho del trabajo, que ha regulado las relaciones entre trabajadores y patrones desde entonces a la fecha.

El despertar de dicho sueño llegó con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación del 24 de febrero de 2017. Con ella se modificó, en primer término, el artículo 107, fracción V, inciso d), para precisar la procedencia del juicio de amparo en contra de las sentencias definitivas que se emitan por los tribunales laborales, locales o federales, en materia de trabajo.

En segundo término, se modificó el artículo 123, apartado A, fracción XX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En dicha modificación se establecieron las bases a las que tenía que ceñirse la reforma legal en materia del trabajo, la cual fue publicada el 1 de mayo de 2019.

Entre otras bases, la reforma constitucional señalada estableció que la justicia laboral pasaba al ámbito del poder judicial, tanto en el fuero federal como en el fuero común, mediante la creación de tribunales judiciales competentes en materia de trabajo. Justicia laboral que, como es conocido, permanecía adscrita

al poder ejecutivo, a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje desde 1931.

De igual manera, con esta modificación constitucional se establecieron los lineamientos para extraer la etapa de conciliación del proceso laboral judicial y dejarla a cargo de los centros de conciliación en el fuero común, cuya creación quedó a cargo de las legislaciones de cada entidad federativa; mientras que, en el fuero federal, la conciliación quedó a cargo del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Dichas instituciones fueron dotadas de personalidad jurídica y patrimonio propios, así como de plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Sin embargo, quedaron adscritas a los poderes ejecutivos, local o federal. Además, se estableció la obligación de las partes en conflicto de agotar la etapa conciliatoria antes de acudir al juicio laboral.

Asimismo, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral fue designado constitucionalmente para realizar la función registral de todas las organizaciones sindicales y de todos los contratos colectivos de trabajo; así como para intervenir en todos los procesos administrativos relacionados. De esta manera, dicha función fue centralizada al ámbito federal, relegando de la misma a las autoridades del fuero común.

Por otro lado, para asegurar la negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores y patrones,

constitucionalmente se instruyó que los procedimientos y requisitos que establezca la ley deben garantizar, entre otros, los principios de representatividad de las organizaciones sindicales y la certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo.

Por último, dicha reforma estableció que cuando se trate de resolver conflictos entre sindicatos, de solicitudes para la celebración de un contrato colectivo de trabajo y para la elección de dirigente sindicales será necesario consultar a los trabajadores, quienes emitirán su voto de manera personal, libre y secreta.

Posterior a dicha reforma constitucional, el 30 de noviembre de 2018, a través de sus respectivos Gobiernos, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se celebró el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y

Canadá (el T-MEC), con el cual se sustituyó al Tratado de Libre Comercio (TLCAN) celebrado entre dichos países el 1 de enero de 1994.<sup>1</sup>

A través del capítulo 23 del T-MEC,<sup>2</sup> al igual que sus socios comerciales, México se comprometió a que sus leyes laborales deberán de estar directamente relacionadas con los siguientes derechos laborales internacionalmente reconocidos, a saber: libertad de asociación, reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, abolición del trabajo infantil, eliminación de toda discriminación para ocupar un trabajo y a establecer condiciones aceptables de trabajo respecto a salarios mínimos (donde incluye reparto de utilidades, bonos, jubilación y cuidado a la salud), horas de trabajo y seguridad y salud en el trabajo.

Además, junto con sus socios del norte, México reconoció que dichas obligaciones las afirmaba como miembro de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y que, por tanto, reconoce la importancia del papel que corresponde a las organizaciones (sindicatos) de trabajadores y empleadores en la protección de los derechos laborales internacionalmente reconocidos; así como que, entre otros, es objetivo del T-MEC el comerciar únicamente mercancías producidas en cumplimiento a las obligaciones en materia laboral contenidas en el capítulo 23 del tratado.

En el artículo 23.4 del T-MEC, los signantes del Tratado, México entre ellos, reconocieron que es inapropiado fomentar el comercio o la inversión debilitando, o reduciendo las protecciones otorgadas por las leyes laborales de cada parte respecto de los derechos mencionados en los párrafos precedentes; sobre todo si con ello se afecta al comercio o la inversión entre las partes. Además, en el artículo 23.5.1, las partes se comprometieron a aplicar de forma efectiva sus leyes laborales para evitar dichas afectaciones.

Por tanto, para promover el cumplimiento de sus leyes laborales, en el artículo 23.5.2 del T-MEC, México y sus socios comerciales se comprometieron a implementar medidas gubernamentales adecuadas, como nombrar y capacitar inspectores, vigilar el cumplimiento e investigar presuntas violaciones, buscar garantías de cumplimiento voluntario, requerir informes y el mantenimiento de registros, y fomentar la creación de comisiones obrero-patronales para abordar la regulación laboral en los centros de trabajo. Además, a promover y fomentar servicios de mediación, conciliación y arbitraje; a iniciar procedimientos para procurar sanciones o remedios adecuados por violaciones a sus leyes laborales, y a implementar remedios y sanciones impuestas por incumplimientos a sus leyes laborales, incluyendo la recaudación oportuna de multas y la reinstalación de los trabajadores.

México y sus socios comerciales reconocieron, en el artículo 23.7 del T-MEC, que los trabajadores y los sindicatos deben ejercer los derechos laborales de libre asociación y de negociación colectiva en un clima libre de violencia, amenazas e intimidación. En consecuencia, consideran imperativo abordar de forma efectiva los incidentes de violencia, amenazas e intimidación que se emitan en contra de los trabajadores; sobre todo si esto afecta al comercio o la inversión entre las partes.

Con el objetivo de cumplir con las obligaciones contraídas en el T-MEC, en el artículo 23.10, los signantes se comprometieron a promover el conocimiento público de sus leyes laborales y a asegurar que las personas con interés jurídico en algún asunto particular tengan acceso apropiado a tribunales administrativos, cuasi judiciales, judiciales y laborales para la aplicación de sus leyes de trabajo.

<sup>1</sup> Protocolo por el que se sustituye al Tratado de Libre Comercio de América del Norte por el Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá. [https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465881/T-MEC\\_Protocolo.pdf](https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465881/T-MEC_Protocolo.pdf)

<sup>2</sup> Capítulo 23 del Tratado entre los Estados Unidos de América, los Estados Unidos Mexicanos y Canadá. <https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/465805/23Laboral.pdf>



Tribunales que deberán de ser justos, equitativos y transparentes, además de cumplir con el debido proceso legal. Asimismo, su participación deberá de ser gratuita, generalmente en audiencia pública, dentro de plazos razonables y sin incurrir en demoras de forma injustificada que perjudiquen a los justiciables en materia de trabajo.

Además, las partes del T-MEC se asegurarán de que quienes contiendan en estos procedimientos, tengan derecho a sustentar o defender sus respectivas posturas. Esto con la finalidad de que las decisiones finales sobre el fondo de la controversia estén basadas en información o evidencia con la que se haya dado vista a las partes para que tuvieran oportunidad de contraargumentar o probar en contrario. De esta manera, se busca que los procedimientos sean justos y equitativos, además de ser conducidos por funcionarios imparciales.

Además de los compromisos comunes signados entre las partes del T-MEC en materia laboral, mediante el Anexo 23-A México se comprometió a adoptar y mantener medidas necesarias para el reconocimiento del derecho a la negociación colectiva, como reconocer el derecho de los trabajadores a participar en actividades de negociación o protección colectivas y a organizar, formar y afiliarse al sindicato de su elección. También se comprometió a prohibir el

sindicales, en hechos de discriminación o coerción en contra de los trabajadores por participar en actividades sindicales o de apoyo a éstas; así como a prohibir que el patrón se niegue a negociar colectivamente con un sindicato reconocido legalmente.

Para ello, México se comprometió a establecer y mantener órganos independientes e imparciales encargados de registrar las elecciones y resolver las controversias relacionadas con la contratación colectiva y el reconocimiento de los sindicatos. Obligación que se ajustó a las bases decretadas en la reforma constitucional al artículo 123, apartado A, publicada el 24 de febrero de 2017, donde se ordenó la creación de tribunales laborales, tanto en el fuero federal como en el fuero común, con adscripción a los Poderes Judiciales respectivos, por un lado; así como la creación de un organismo descentralizado de carácter federal, quien será el encargado de conocer, además de la función conciliadora en conflictos de laborales de competencia federal, del registro de todas los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones sindicales y de todos los procesos administrativos relacionados con ellos, por el otro.

Por último, mediante el Protocolo Modificadorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá<sup>3</sup>, firmado el 10 de diciembre de 2019, se realizaron modificaciones al T-MEC en general y al capítulo 23 de éste en particular. Asimismo, se insertaron los anexos 31-A y 31-B, donde se establecieron mecanismos laborales de respuesta rápida entre México y Estados Unidos y entre México y Canadá, respectivamente. Mecanismo que aplicará cuando se niegue a los trabajadores de dichos países el derecho de libre asociación y de negociación colectiva.

Por tanto, conforme a las bases establecidas en la reforma constitucional supra citada y los compromisos adquiridos en el T-MEC y sus anexos, así como su protocolo modificadorio, México ha realizado diversas reformas legales en materia de trabajo, las cuales comentaremos en próximas entregas.



<sup>3</sup> Protocolo Modificadorio al Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá. <https://www.gob.mx/stps/documentos/el-tmec-y-su-mecanismo-laboral-de-respuesta-rapida-una-guia-de-accion-para-mexico?idiom=es>



Dr. Balam Lammoglia Riquelme

# VALORACIÓN ADUANERA

Prólogo:

Dr. Juan Rabindrana Cisneros García



DE  
VENTA  
EN

**librosyrevistas**[cuej.com](http://cuej.com)

el SÓTANO



EDITORIAL  
PORRÚA



mercado  
libre

# LA VALORACIÓN ADUANERA Y SU RECHAZO EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

**Dr. Balam Lammoglia Riquelme**

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM. Maestro en Derecho fiscal y administrativo. Especialista en Derecho del comercio exterior. Doctor en Derecho por la Universidad Panamericana; todos los anteriores con mención honorífica. Candidato a doctor por la Universidad de Salamanca, España. Doctor en Derecho aduanero por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Actualmente es abogado postulante en la firma Lammoglia Riquelme & Asociados.



**P**ara entender el comercio entre las naciones es indispensable saber que, desde los inicios del intercambio de bienes, existió un tributo a pagar en el país de entrada de los bienes y en muchos casos, incluso pagar esa contribución por la exportación.

Así, teniendo como base la obligación de pagar un ad valorem por el ingreso de dichos bienes, las naciones se vieron en la necesidad de entender de mejor manera cuál iba a ser la base del tributo, esto es el precio de los bienes, para lo cual, era indispensable determina, si ese precio sería fijado por el país o, por el contrario, sería el precio que el importador declarara como costo de adquisición en el país de exportación.

## 1. GATT

Entendido qué es lo anterior, entremos de lleno al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comercio (GATT) por sus siglas en inglés, que nace en 1947, como fruto de una desafortunada negociación<sup>1</sup> que frustró el nacimiento de la Organización Internacional del Comercio (OIC).

En su artículo VII, se establecen las bases del Valor en Aduana de las mercancías, dicho texto dispone entre otras cosas:

- Reconoce principios generales de valoración y el compromiso de aplicarlos.

- El valor de transacción, es el método primario siempre que no exista vinculación o que la misma no afecte el precio.
- El método primario establece que será el valor pagado o por pagar, punto medular y novedoso en la metodología.
- El valor en aduana de las mercancías deberá basarse en el valor real. Cuando sea imposible determinar el valor real, el valor en aduana debería basarse al equivalente comprobable que se aproxime más a dicho valor.

## 2. ACUERDO DE VALOR

Su nombre correcto es “Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del GATT” y se trata de un cuerpo normativo que desdobra lo dispuesto en el artículo VII del Acuerdo, instrumento creado expresamente para “reglamentar” y explicar perfectamente en sus primeros artículos los métodos de valor y sus particularidades.

Asimismo, explica las condiciones para determinar el uso o no del método de valor de transacción, así como la posibilidad de que las autoridades aduaneras puedan poner en duda la declaración del valor por parte de un importador<sup>2</sup>.

<sup>1</sup> A principios de 1947, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas convocó a la Conferencia Internacional sobre Comercio y Empleo, donde se concretaría la emisión de la “Carta de la Habana”, en la cual constaban ciertos principios generales de valoración que serían de gran importancia para el desenvolvimiento posterior de la materia. Tomado de ZOLEZZI, Daniel, Valor en Aduana, Código Universal de la OMC, Editorial La Ley, Buenos Aires, 2003, p. 2.

<sup>2</sup> Cfr. Artículo 17 del Acuerdo.



Tenemos entonces que el Acuerdo de valor tiene por objeto establecer un sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduana de las mercancías: un sistema que se ajusta a las realidades comerciales y que prohíbe la utilización de valores arbitrarios o ficticios.<sup>3</sup>

### 3. RECHAZO DE VALOR

Hemos mencionado que la estructura y espíritu del sistema de valor, es confiar en los importadores y en el libre intercambio de bienes, privilegiando la declaración del gobernado respecto del valor en aduana de las mercancías que pretende importar.

Empero, el propio Acuerdo, permite a las administraciones de aduanas poner en duda dicho valor e iniciar un protocolo para cuestionar al importador a efecto de que éste proporcione elementos de convicción para demostrar que la operación es legal. En caso contrario, las autoridades le harán saber al importador que el valor transacción o su método determinado es inaplicable<sup>4</sup>.

### 4. COMITÉ TÉCNICO

En el Acuerdo de valor, se establecen 2 organismos indispensables, el primero denominado “Comité de valor”, está formado por un representante de cada país miembro, normalmente el titular de aduanas, con el compromiso de reunirse al menos 2 veces al año en el seno de la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El otro organismo es el “Comité técnico de valor”, conformado por verdaderos expertos de la materia, los cuales son enviados por sus países para reunirse y determinar criterios consultivos de acuerdo con casos planteados por los propios miembros ante situaciones complejas. Esto es, es dicho comité auspiciado por Organización Mundial de Aduanas (OMA), se discuten y resuelven los casos más complejos del mundo de la valoración, destacando los casos relativos a las regalias o cánones. Sus resoluciones son criterios obligatorios para los países miembros.<sup>5</sup>

Destaca dentro de sus acuerdos más notables la “Decisión 6.1. Casos en que las administraciones de aduanas tengan motivos para dudar de la veracidad o exactitud del valor declarado”<sup>6</sup>. Criterio indispensable para entender la función fiscalizadora y de investigación de las autoridades aduaneras y su posibilidad de rechazar el valor.

### 5. CASO MÉXICO

En primer lugar, es indispensable señalar que, para que un país se pueda integrar al GATT, tiene que modificar toda su legislación, a efecto de que esté acorde a dicho Acuerdo, específicamente, es obligatorio que la legislación mexicana en materia de valor en aduana sea idéntica al Acuerdo de Valor.

En nuestro país no existe a nuestro juicio una adecuación correcta al texto del artículo 17 del Acuerdo de Valor, ni a la Decisión 6.1., pues como hemos visto para que una autoridad pueda rechazar el valor de transacción debe de consultar a los importadores para que éstos realicen las aclaraciones pertinentes que soporten su valor. En cambio, en México primero rechazan y luego consultan.

En efecto, en los artículos 151 fracción VII y 177, fracción XII, cuyos textos se transcriben, la autoridad mexicana puede rechazar valor sin consultar primero a la autoridad. Veamos:

**Artículo 151.** Las autoridades aduaneras procederán al embargo precautorio de las mercancías y de los medios en que se transporten, en los siguientes casos:

VII. Cuando el valor declarado en el pedimento sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, salvo que se haya

<sup>3</sup> OMC | Puerta de acceso a la valoración en aduana (wto.org) consultado el 13 de septiembre de 2021.

<sup>4</sup> Cfr. Artículo 17 del Acuerdo. <sup>5</sup> Suelo señalar que, a nuestro juicio, dichas resoluciones son como las jurisprudencias o bien, como ahora por criterios.

<sup>6</sup> Suelo señalar que, a nuestro juicio, dichas resoluciones son como las jurisprudencias o bien, como ahora por criterios.

<sup>6</sup> Cuando haya sido presentada una declaración y la Administración de Aduanas tenga dudas de la veracidad o exactitud de los datos o documentos presentados como prueba, podrá pedir una explicación complementaria. Si después de haber brindado mayores elementos, se tiene aún dudas razonables, podrá determinar que el valor en aduana de las mercancías no se puede determinar conforme al artículo 1. Antes de adoptar una decisión definitiva, se le comunicará al importador por escrito si fuere solicitado los motivos para dudar de la veracidad o exactitud de los datos y documentos proporcionados. Una vez adoptada una decisión definitiva, la Administración de Aduanas le comunicará por escrito al importador, indicando los motivos que la inspiran.

otorgado la garantía a que se refiere el artículo 86-A de esta Ley.

**Artículo 177.** Se presumen cometidas las infracciones establecidas por el artículo 176 de esta Ley, cuando

XII. Con motivo del ejercicio de facultades de comprobación, se detecte que quien introduzca al país mercancías bajo un régimen aduanero que le permita la determinación de contribuciones sin su pago, declare en el pedimento o documento aduanero de que se trate, un valor que sea inferior en un 50% o más al valor de transacción de mercancías idénticas o similares, determinado conforme a los artículos 72 y 73 de esta Ley, siempre que con los datos aportados, de haberse destinado la mercancía de que se trate al régimen de importación definitiva, se hubiere omitido el pago total o parcial de los impuestos al comercio exterior y, en su caso, de las cuotas compensatorias.

De los anteriores textos, podemos afirmar que los mismos son inconventionales, pues no se encuentran acordes al artículo 17 del Acuerdo de valor. En efecto, si bien es cierto, que los procedimientos establecidos en la Ley Aduanera, son procedimientos seguidos en forma de juicio que permiten la aportación de pruebas y alegatos, también lo es, que no están expresamente acordes al texto del acuerdo.

Incluso, llama la atención que, en los textos transcritos, el legislador mexicano haya determinado que las mercancías comparables sólo sean las idénticas o similares, cuando la propia ley y

el Acuerdo de valor disponen de otros 2 métodos adicionales, para determinar el valor de las mercancías, puntos que deberá ser estudiados a fondo por nuestros tribunales para decretar su ilegalidad por inconventionalidad, claro está, siempre y cuando los postulantes los lleven a sus demandas.

## 6. CONCLUSIONES

- A. El GATT tiene un sistema claro y robusto que establece los métodos de valor, y sus métodos alternativos.
- B. El propio Acuerdo de valor, contempla comités que permiten su correcto funcionamiento y actualización. Incluso, el comité técnico dotado de facultades para emitir criterios vinculantes.
- C. El Estado mexicano adoptó en la Ley Aduanera de 1995, los principios rectores del artículo VII del GATT y del Acuerdo de valor.
- D. Los artículos 151 fracción VII y 177 fracción XII de la Ley Aduanera, fueron adicionados años después y no respetan los postulados del Acuerdo de valor, lo cual cuestiona su constitucionalidad por convencionalidad.





# CREACIÓN DE UN NUEVO ORGANISMO ADMINISTRATIVO DE LA SHCP

**Lic. Sandra Díaz Ceballos Camacho**

Es licenciada en Derecho, egresada de la Facultad Nacional de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Candidata a maestra en Derecho aduanero y Derecho del comercio exterior por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Laboró en el despacho Whitaker México - Business & Consulting, S.C. Fue becaria en la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Actualmente labora en el despacho Lammoglia Riquelme y Asociados, S.C., en donde se dedican a litigar asuntos en materia fiscal y de comercio exterior.

**E**l presente artículo tiene la finalidad de dar a conocer, en términos generales, lo que nos espera con la implementación de la Agencia Nacional de Aduanas de México, lo que se sabe hasta el momento, las generalidades, principales atribuciones y lo que, a nuestro juicio, podría ser benéfico o no para los servicios aduaneros de nuestro país.

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) surge a través del “Decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, el cual, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de julio de 2021, con fundamento en el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, precepto constitucional que faculta al Ejecutivo federal para promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión.

Dentro de los considerandos del Decreto en cuestión, se citó lo siguiente:

Que es conveniente realizar acciones que fortalezcan la seguridad nacional, principalmente en los puntos de acceso al país, considerando preferentemente la contratación de personal que se haya destacado por ser garante de la transparencia, honestidad y servicio al

pueblo de México, como es el caso de quienes pertenecen o han pertenecido a las fuerzas armadas, para incorporarse como personal del nuevo órgano administrativo desconcentrado;

Que es prioritario fortalecer el sistema aduanero mexicano hacia una visión de servicio, atención y apoyo expeditos a los importadores y exportadores, además de que coadyuve al reforzamiento de la seguridad nacional, así como armonizar los procesos que involucran los servicios aduanales y de inspección con los acuerdos internacionales que México ha suscrito para eliminar barreras comerciales y propiciar el libre comercio, y;

Que para estos efectos resulta oportuno la creación de un órgano administrativo desconcentrado, jerárquicamente subordinado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público e independiente del Servicio de Administración Tributaria, que tenga asignado el reto de elevar sustancialmente la calidad, eficiencia y eficacia de los múltiples procesos que generan la organización y la dirección de los servicios aduanales y de inspección, con apego a las normas jurídicas que regulan la entrada, tránsito o salida de mercancías de o en el territorio nacional, he tenido a bien expedir el siguiente.



De los considerandos previamente citados, se destaca lo siguiente:

1. El énfasis que se hace en fortalecer la seguridad nacional, para lo cual se estima preferente la contratación de quienes pertenecen o han permanecido a las fuerzas armadas para incorporarse como personal del nuevo órgano administrativo desconcentrado;
2. Adicional al reforzamiento de la seguridad nacional, es prioritario fortalecer el sistema aduanero mexicano hacia una visión de servicio, atención y apoyo expedito a los importadores y exportadores;
3. Al tratarse de un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, será independiente del Servicio de Administración Tributaria.

De tal forma que, de conformidad con el artículo 1° del Decreto por el que se creó la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estaremos ante un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es decir, tendrá la misma jerarquía que el Servicio de Administración Tributaria.

Por lo que hace a su objeto, el artículo 2° del Decreto en cuestión establece que, se organizará y dirigirá los servicios aduanales de inspección para aplicar y asegurar el cumplimiento de las normas jurídicas que regulan la entrada y salida de mercancías del territorio nacional, así como las relativas al cobro de las contribuciones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior.

Una de las cuestiones más relevantes que tendrá la ANAM en lo relativo a su patrimonio, es que este se constituirá de los bienes muebles e inmuebles; recursos materiales; tecnológicos y financieros que le sean asignados; **los fondos y fideicomisos que se constituyan o en las que participe en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para tales fines; los ingresos que obtenga por la prestación de servicios y gastos de ejecución y**

las asignaciones que establezca el presupuesto de egresos de la Federación.

Ahora bien, en el Decreto que emitió el Ejecutivo federal para crear la Agencia Nacional de Aduanas de México se establecieron las facultades con las que contaría, destacando las siguientes:

- Recaudar contribuciones, aprovechamientos y sus accesorios de acuerdo con la legislación y conforme a los tratados internacionales de los que México sea parte, cuando estas atribuciones deban ser ejercidas por las autoridades aduaneras;
- Dirigir tanto los servicios aduanales y de inspección, así como realizar operativos correspondientes, a la verificación de la legal estancia de mercancías en territorio nacional y de mercancías en transporte, incluyendo su verificación de origen.
- Embargar o asegurar las mercancías de las que no se acredite su legal estancia en el país y resguardarlas en calidad de depositario.
- Administrar los padrones de importadores, de importadores de sectores específicos y de exportadores sectoriales.
- Determinar y liquidar las contribuciones y aprovechamientos aplicables a las operaciones de comercio exterior y sus accesorios.
- Coordinar con las fuerzas armadas e instituciones de seguridad nacional y de seguridad pública para preservar la seguridad en los puntos de acceso al país.
- Solicitar y proporcionar a otras instancias e instituciones públicas, nacionales o del extranjero, el acceso a la información necesaria para evitar la evasión o elusión fiscal en materia aduanera y otros ilícitos o infracciones.
- Participar en la negociación de los tratados internacionales que lleve a cabo el Ejecutivo federal en materia aduanera.
- Mantener la coordinación con el Servicio de Administración Tributaria sobre la información necesaria para la correcta administración, recaudación y

contabilidad de las contribuciones y aprovechamientos federales y sus accesorios.

- Proponer para aprobación superior la política de administración aduanera y ejecutar las acciones para su aplicación

Como se puede observar de las atribuciones que tendrá la Agencia Nacional de Aduanas de México, dentro de las más relevantes serán que podrá proponer la política de administración y ejecutar las acciones para su aplicación.

Además, tendrá la atribución para embargar o asegurar las mercancías, administrar los padrones de importación y exportación, determinar y liquidar las contribuciones y aprovechamientos, así como coordinar con las fuerzas armadas e instituciones de seguridad nacional y de seguridad pública para preservar la seguridad en los puntos de acceso al país.

La Agencia Nacional de Aduanas de México estará a cargo de un titular, el cual será nombrado y removido libremente por el presidente de la República, a propuesta del secretario de Hacienda y Crédito Público.

Para ser titular de la ANAM se deberá acreditar poseer, al día del nombramiento, título profesional en las áreas de derecho, administración, economía, contaduría o materias afines, con una antigüedad mínima de diez años, así como contar con experiencia probada y estudios en materia fiscal, aduanera, comercio exterior, financiera o alguna otra relacionada.

Las facultades que tendrá el titular, entre otras son las siguientes:

- Dirigir, supervisar y coordinar el desarrollo de las actividades de las unidades administrativas de la Agencia Nacional de Aduanas de México (fracción II, del artículo 7° del Decreto);
- Expedir las disposiciones administrativas necesarias para aplicar eficientemente la legislación fiscal y aduanera, relacionada con la entrada y salida de mercancías del territorio nacional (Reglas Generales de Comercio Exterior) (fracción III, del artículo 7° del Decreto);

- Nombramiento de sus subordinados (fracción IX, del artículo 7° del Decreto).

Por lo que hace a cuestiones que están pendientes, pero que serán un hecho, es lo relativo a las oficinas y sedes que tendrá la Agencia Nacional de Aduanas de México, las cuales serán las que determine el Ejecutivo federal, puntualizando que, contará con oficinas en las entidades federativas y sus plazas más importantes, así como en el extranjero, a efecto de garantizar una adecuada desconcentración geográfica, operativa y de decisión en asuntos de su competencia.

Además, tendrá las unidades administrativas que se determinen en su reglamento interior, de conformidad con las estructuras orgánica y ocupacional que autorice la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el ámbito de sus competencias.

Luego entonces, quedó claro que la ANAM tendrá un reglamento interior que deberá de crear la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en un plazo máximo de ciento ochenta días naturales, contados a partir de la entrada en vigor del Decreto de referencia, siendo que, deberá de proponérselo al titular del Ejecutivo federal.

El Decreto por el que se crea la Agencia Nacional de Aduanas de México como un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entrará en vigor en la fecha en la que inicie la vigencia de las reformas legales que otorguen la competencia que actualmente tiene el Servicio de Administración Tributaria en materia fiscal y aduanera a la ANAM.

Adicionalmente, el 29 de julio del año en curso, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se delegan facultades a los servidores públicos del Servicio de Administración Tributaria, el cual nos hace pensar que aunque “*de iure*” falta la implementación legislativa y normativa para la creación de la ANAM, “*de facto*” se empezó a percibir lo manifestado por el Ejecutivo federal con este Acuerdo, pues se le delegó a la Administración General de Aduanas facultades para otorgar y cancelar las auto-

rizaciones a que se refiere el artículo 16 de la Ley Aduanera, y respecto de los recursos del fideicomiso público para administrar la contraprestación conforme a lo siguiente:

- Proponer a las instancias competentes los programas anuales de trabajo del fideicomiso, adoptar e implementar normas y procedimientos para la operación del sistema de contabilidad, del presupuesto, activos, pasivos, ingresos y gastos.
- Celebrar contratos, convenios, llevar a cabo los procedimientos de contratación de servicios correspondientes.

- Suscribir, modificar, revocar, suspender, dar por terminado anticipadamente y rescindir administrativamente los convenios y contratos que celebre y de cuya ejecución se desprendan obligaciones patrimoniales a cargo del fideicomiso.
- Así como de los demás documentos que impliquen actos de administración de dichos recursos.

Por lo tanto, podemos estar seguros que se acerca la implementación e inicio de actividades de la ANAM; por ello, a continuación, como manera de conclusión, se inserta lo que consideramos pros y contras:

PROS	CONTRAS
Autonomía presupuestal.	Militarización.
Capacitación propia.	Radicalización.
Manejo de fideicomisos.	Posible conflicto por concurrencia en atribuciones de fiscalización.
Facultades de comprobación previas (post despacho).	Corrupción (falta de exámenes de control de confianza).
Emisión de reglas.	Rotación del personal.
Acuerdo con el secretario de Hacienda.	Fideicomisos.
Identidad propia.	
Posible creación de policía aduanera.	
Posibilidad de entrega o pago de multas (sobre sueldo o estímulo).	
Creación del servicio profesional de carrera.	







DE  
VENTA  
EN

**librosyrevistas**cuej.com

el SÓTANO 



EDITORIAL  
PORRÚA



mercado  
libre

# UNA RADIOGRAFÍA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS



## Dr. Miguel Ángel Granados Atlaco

Doctor en Derecho, licenciado en Lengua y Literaturas Hispánicas, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Catedrático por oposición de la Facultad de Derecho de la UNAM, director del Doctorado en Derecho en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Ha sido condecorado con dos medallas Gabino Barreda en la UNAM.

**M**anuel Tamayo Sáez<sup>1</sup> indica que debe entenderse por políticas públicas al conjunto de objetivos, decisiones y acciones que un gobierno ejecuta con el fin de solucionar los problemas considerados prioritarios por el citado ente público y su elemento humano.

Se trata de un proceso iniciado al ser detectado un problema por el gobierno o un directivo público, mismo que se agota a través de las siguientes fases:

1. Identificación y definición del problema.
2. Formación de las alternativas de solución.
3. Adopción de una alternativa.
4. Implantación de la alternativa seleccionada.
5. Evaluación de los resultados obtenidos.<sup>2</sup>

No se trata de un *numerus clausus*, debido a que se trata de una construcción conceptual, por tanto, no todas las políticas públicas siguen este proceso rígidamente.

En cuanto al análisis de políticas, Tamayo asevera que se trata de un conjunto de técnicas, conceptos y estrategias emanadas de diversas áreas del conocimiento, encaminadas a mejorar la calidad de ese proceso de transformación de recursos en beneficios sociales. Este análisis involucra al proceso de la política pública en su totalidad y se puede centrar en los siguientes aspectos:

- Los aspectos externos a la administración pública.
- La implicación y comportamiento de los actores sociales críticos.
- Los objetivos y las metas, particularmente la adecuación entre las previsiones y los logros.
- Los medios e instrumentos utilizados para desarrollar la política.

Existe en consecuencia una relación evidente entre el proceso de la política pública y su análisis que se pone de relieve a través de dos perspectivas: la del responsable de la política en cualquiera de sus fases (policy maker) y la del análisis de las políticas públicas para enriquecer el universo de información.

El analista debe aplicar sus conocimientos técnicos, a la par de su visión política del problema, para estar en aptitud de dar respuestas útiles para el policy maker.

Luis F. Aguilar Villanueva<sup>3</sup>, al analizar este tema, parte de la premisa de justificar el análisis, estudio y diseño de políticas en función de elementos tales como la necesidad de que el gobierno sea eficaz en sus tareas y capaz de ofrecer soluciones, en un marco de racionalidad y publicidad política.

Destaca Aguilar que las políticas han encontrado orientaciones diversas y disímolas a partir de realidades que llevan a su vez a la ponderación de

1 Cfr. Manuel Tamayo Sáez, "El análisis de las políticas públicas". En *La nueva Administración Pública*, España Alianza Editorial, 1997, p. 281.

2 Manuel Tamayo Sáez, *Op. cit.*, p. 281.

3 Cfr. Luis F. Aguilar Villanueva, *El estudio de las políticas públicas*, Colección de Antologías de Políticas Públicas, México, Editorial Porrúa, 1994



circunstancias tales como las limitaciones del Estado y de los gobiernos, o el imperioso consumo de recursos políticos y fiscales en las decisiones gubernamentales, como parte de un aprendizaje dejado por la vivencia de los años de la crisis.

Como consecuencia lógica, la elección racional en las políticas se traduce en democracia y eficiencia de la gestión pública.

Otro impacto evidente en las dimensiones de la gestión pública está en la redefinición obligada de las fronteras entre el ámbito público y el privado; es de vital importancia esclarecer qué asuntos son de interés público y por tanto deben incluirse en la agenda de gobierno.

Considera que el redimensionamiento del gobierno se orienta hacia la reforma del Estado, agregando que los efectos políticos rebasaron a los propósitos iniciales, que eran de carácter financiero y administrativo. De igual manera, este autor señala que la privatización, la desincorporación, la desregulación, la liberalización y la apertura, son procesos para devolverle al Estado sus funciones originales, su razón de ser.

Mas el centro de la preocupación no es el redimensionamiento, sino las políticas a construir y seleccionar, tomando como base sus costos, las consecuencias y su efectividad. Lo importante es la calidad de las políticas públicas, de su formulación y de la propia gestión de las políticas.

El gobierno por política pública capta los problemas y diseña opciones de acción ajustadas al caso, con las peculiaridades que impone el asunto; pone fin a la ilusión fiscal de recursos públicos ilimitados; incorpora opiniones, participación, corresponsabilidad y dinero de los ciudadanos. El carácter público genera una gama de estrategias de acción corresponsable entre gobierno y sociedad.

Aguilar considera que retomar la naturaleza pública de las políticas de gobierno representa una aspiración constante, como respuesta a las políticas influidas o determinadas por grupos de interés con demandas exclusivas.

## LA DEFINICIÓN DE LOS PROBLEMAS PÚBLICOS

Este tópico constituye la primera fase del ciclo, en ella el analista debe prioritariamente identificar a los

actores con algún interés en el problema y reconstruir sus definiciones, la forma en que conciben el problema, hecho que reviste una importancia ingente, al ser determinante para el desarrollo posterior de la política pública, ya que con ello se reduce el espectro de alternativas.

Por lo que hace a la **detección de los problemas**, que no es otra cosa que desarrollar una tarea de búsqueda de información para reconocer demandas, amenazas u oportunidades, en el afán de orientar las políticas, es importante anticipar los problemas para hacer factible el control de sus efectos; esta detección no va a asegurar el éxito de la política, pero sí permitirá a su responsable una postura privilegiada para la búsqueda de soluciones.

Tamayo nos ilustra los siguientes mecanismos para detectar problemas:

1. La función directiva, cuyo rol esencial es mantener a su organización en contacto permanente con el entorno.
2. La participación en redes de gestión para intercambiar recursos e información.
3. El diseño de segmentos organizativos especializados en la detección de problemas.
4. El análisis de los clientes, que representan la principal fuente de información, ayuda a descubrir problemas nuevos o cambios de tendencias en los problemas ya identificados.
5. La evaluación de las políticas y de los programas en funcionamiento, que permitirá generar información de calidad para orientar nuevos procesos de decisión.

Otro rubro insoslayable es el **diseño de la agenda**, ya que, si bien no hay una de carácter exhaustivo, si nos auxilia para generar prioridades. Con base en lo anterior se puede hablar de dos clases de agenda mensurables: la sistémica, que incluye los problemas que preocupan a una sociedad en un momento determinado; y la institucional o política, que está condicionada a la sistémica, en la que la inclusión de proble-



mas es una condición necesaria, pero no suficiente para su atención.

Influye en la inclusión de temas el sesgo en la accesibilidad a la agenda institucional, aunque Tamayo reconoce la existencia de contras sesgos, tales como los medios de comunicación, el deseo de crecimiento de las organizaciones públicas, así como el comportamiento y las actitudes de los decisores y la competencia política.

Sesgos negativos:

1. El poder y la capacidad de presión de los grupos de interés poderosos, su influencia en las decisiones públicas les permite una inclusión mayor de temas en la agenda.
2. Los sesgos culturales, los valores y la cultura política generan también un filtro para la agenda.
3. El peso de la tradición, al considerarse más fácil la inclusión de un problema conocido que, de uno desconocido, al propiciar un alto grado de incertidumbre.
4. Las actividades y valores de los decisores públicos, al reflejarse su visión axiológica en las decisiones.

Sesgos positivos que van a atemperar a los negativos:

1. Los medios de difusión colectiva, que se basan más en problemas emotivos, que enlazan valores y tendencias en situaciones que afectan la legitimidad del sistema.
2. La competencia política, es el caso de los procesos electorales.
3. Los deseos de crecer de las organizaciones públicas, en un afán de posicionamiento social.

## LA FORMULACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Agotada la fase anterior, comienza el proceso de elaboración de la política pública con el objetivo de intentar su solución.

## LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA CONTIENE:

1. El establecimiento de metas y objetivos.
2. La detección y generación de alternativas.
3. La valoración y comparación de impactos de cada alternativa.
4. La selección de una alternativa o combinación de las existentes.

En la formulación de las políticas públicas identificamos a dos corrientes: el racionalismo y el incrementalismo. Para los racionalistas se debe sustituir un proceso de decisiones intuitivo por un proceso racional de adopción de decisiones, consideran que las decisiones públicas sean decisiones cuantificables, operativas y guiadas por criterios de eficacia y eficiencia económica; en cambio, los incrementalistas se inclinan por preponderar lo ya existente, mientras más se aleje una alternativa de las políticas ya conocidas, habrá mayor dificultad para anticipar los impactos y las consecuencias, así como para generar apoyos y aceptación.

## LA IMPLANTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS

Se puede entender de diversas maneras a esta fase de aplicación. La implantación como puesta en marcha en la que se entendería a la administración como una variable dependiente de la política, visión a la que obedece el **modelo top-down** (arriba abajo).

En cambio, la implantación vista como proceso de interacción entre las condiciones iniciales y los resultados esperados, implica que no se le conciba como un momento sino como todo un universo evolutivo que implica muy variadas decisiones de las que no es factible distinguirlas con facilidad.

Tamayo afirma que la implantación es un campo de negociación política, donde los actores legitimados establecen las condiciones que permiten la instrumentación de la política pública.

Bajo este rubro nos explica la posibilidad de dos casos de políticas fallidas: las políticas que no se

implantan, mostrando un error en la formulación, y las políticas que dan lugar a una implantación deficiente. Este segundo caso puede tener su origen en muchas causas (error en la teoría que sostiene el programa).

En caso de que la implantación se retrase o fracase en sus objetivos, estaremos en presencia de problemas de implantación estrictamente.

La complejidad de un programa se puede medir en función del número de decisiones necesarias para el funcionamiento. Mientras más elevado sea el número de actores y el número de decisiones, mayor dificultad encontraremos en controlar el proceso de implantación.

Otra forma de ver a la implantación es entenderla como un proceso de ensamblaje, es decir, como la sucesión de actividades para ensamblar los distintos elementos del programa, que se encuentran en manos de diferentes actores y que dan pauta a diversas estrategias, ello en función de las ideas de Bardach, quien resalta el carácter eminentemente político del proceso de implantación de las políticas públicas.

De la aplicación de esas estrategias se pueden derivar algunos efectos negativos:

1. La disipación de los recursos del programa, producida por los intentos de aprovechamiento de esos recursos para otros fines, lo que trae como resultado un incremento de los costes del programa.
2. La disipación de los objetivos del programa, cuando se han establecido de manera imprecisa.
3. La resistencia al control de la conducta de los participantes, cuya dureza o flexibilidad condicionará la participación o no de actores.
4. La pérdida de energías en imaginar y participar en estrategias y juegos. La causa es la incertidumbre que domina a todos los actores sobre cuál será el comportamiento de los demás.

La implantación con base en el modelo bottom-up (desde abajo) nos da una perspectiva distinta, ya que mientras el **modelo top-down** refleja una concepción jerárquica, el modelo *bottom-up* explica la implantación como el proceso para conseguir los impactos deseados sobre la población, ello a través de una visión pragmática y más particular, que se traduzca en una implantación “adaptativa”, en contrapunto con la implantación “programada” del modelo *top-down*.

## LA FASE DE EVALUACIÓN

Última fase del proceso de la política pública, en la que encontramos razones técnicas, organizativas y de gestión que hacen menester la evaluación.

En los sistemas democráticos la evaluación representa las siguientes utilidades políticas, según Warin:

1. “El control parlamentario de las actuaciones del ejecutivo y sus administraciones.
2. La presentación de resultados a los usuarios de los servicios públicos y al resto de los ciudadanos.
3. La legitimación de acciones de rediseño organizativo o de políticas de ajuste de recursos.
4. El mantenimiento de la confianza y la cooperación entre los actores públicos y no públicos que participan en el proceso de las políticas públicas.
5. El reforzamiento —o la destrucción— de la reputación de eficacia, eficiencia y oportunidad de una política.
6. El reforzamiento de la legitimidad de un tipo de liderazgo y de las oportunidades organizativas de apropiación presupuestaria.”<sup>4</sup>

La evaluación no sólo cumple una función política al ofrecer un mecanismo de justificación gubernamen-

<sup>4</sup> Citado por Manuel Tamayo Sáez, op. cit., p. 306

tal, sino que produce información útil para orientar y valorar las decisiones vinculadas al diseño, la gestión y el futuro de las políticas públicas.

Podemos distinguir la existencia de nueve tipos de evaluación, las cuales procedemos a describir someramente:

1. Evaluación anticipativa. Permite identificar el contexto político, administrativo, legal, social y económico de la política pública y en el estudio del problema al que hay que hacer frente.
2. Evaluación de la evaluabilidad de la política. Da la oportunidad de descubrir los eventuales puntos débiles del diseño de la misma, ofreciendo información para la puesta en marcha, en su caso, de una evaluación más profunda.
3. Evaluación de necesidades. Con el objeto de conocer a fondo el problema que la política pretende resolver. Busca delimitar al problema, así como su alcance y las posibles conexiones con otros problemas no considerados.
4. Evaluación de la viabilidad política. Con ella se busca verificar si el diseño de la política permite lograr las metas y los objetivos esperados.
5. Evaluación del contexto. Es una modalidad de la evaluación anticipativa y consiste en la revisión del contexto y el entorno en el que se desarrolla la política pública, con el fin de afrontar las amenazas y aprovechar las oportunidades presentes en ese entorno.
6. Evaluación de la implantación/evaluación de procesos. Alimenta el proceso de adopción de decisiones al momento de su puesta en marcha. Se busca con ella determinar el grado de cumplimiento.
7. Estudios de seguimiento de programas. Paralelamente a la implantación, este seguimiento permi-

te la introducción de las correcciones pertinentes en su operación.

8. Evaluación de la eficacia/impacto. Se busca contar con la información necesaria para estar ciertos de los efectos o impactos de la política pública.
9. Evaluación de la calidad. Con la pretensión de saber si se están produciendo los beneficios esperados por los actores. El hecho de que no cubra las expectativas y demandas de los ciudadanos, no significa que deje de ser eficaz la política, al alcanzar todos sus objetivos.

Deseamos cerrar este artículo con la siguiente afirmación lapidaria de Manuel Tamayo Sáez: “La política pública no existe en la realidad, sólo la intervención del analista otorga un sentido a la multitud de decisiones y comportamientos de los administradores y de los demás actores sociales involucrados en el proceso.”<sup>5</sup>



4 Citado por Manuel Tamayo Sáez, op. cit., p. 306





# OBLIGACIONES DE LOS CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

**C.P. Víctor Hugo Castañeda Pérez**

Contador público y auditor fiscal egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Máster en impuestos por parte del Instituto GVA consultoría y Capacitación, S.C. Maestrando en Derecho fiscal y administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Diplomado en seguridad social por el Centro de Estudios Fiscales A.C. Reconocido como uno de los fiscalistas más importantes de México por la revista Defensa Fiscal en su edición de enero 2021. Capacitador en materia fiscal y de nóminas a personal de empresas como Grupo Holcim México, Comisión Federal de Electricidad, Banco de México, Club de Banqueros de México A.C., entre otros. Director general de la firma Asesores especializados en seguridad social y fiscal S.C.

**E**l IVA es un impuesto que grava el consumo. Su objeto es la enajenación de bienes, la prestación de servicios independientes, el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes y la importación de bienes o servicios; así está señalado en el artículo 1º de dicha ley:

**Artículo 10.-** Están obligadas al pago del impuesto al valor agregado establecido en esta Ley, las personas físicas y las morales que, en territorio nacional, realicen los actos o actividades siguientes:

- I.- Enajenen bienes.
- II.- Presten servicios independientes.
- III.- Otorguen el uso o goce temporal de bienes.
- IV.- Importen bienes o servicios.

Aunque lo causa la persona, física o moral, que realiza algunas de las actividades anteriores, quien realmente paga el impuesto es el consumidor final.

En este orden de ideas, en el caso de enajenación, quien vende el producto debe cobrar a su cliente un 16 % adicional sobre el valor de este para a su vez pagarlo al SAT.

A manera de ejemplo tenemos:

Valor del producto	1,000.00
16% adicional de IVA	160.00
<b>Total cobrado al cliente</b>	<b>1,160.00</b>

Conforme a las cifras anteriores, los \$160.00 cobrados a la persona que adquirió el producto no son propiedad del vendedor, dicho dinero pertenece al fisco y deberá enterarse y pagar en los plazos que la misma ley indica. Sólo se permite disminuir, bajo una figura llamada acreditamiento, el IVA que el enajenante pagó para producir o adquirir el bien que vendió.

De esta forma, la cantidad que debe enterarse y pagar al fisco es la siguiente:

IVA cobrado al cliente	160.00
IVA pagado para producir o adquirir el bien	90.00
<b>Total a pagar al fisco</b>	<b>70.00</b>

De igual manera debe hacer quien presta un servicio independiente u otorgue un bien en arrendamiento.

Así, las personas físicas o morales que realizan los actos o actividades señalados en la Ley del IVA, deben

cobrar a su contraparte el correspondiente impuesto, generalmente el 16 % del valor total de la contraprestación, y pagarlo al SAT, previo acreditamiento.

Como pudimos observar ciertos contribuyentes tienen temporalmente en su poder un dinero que no les pertenece. Fue cobrado a los clientes por disposición de ley, pero debe entregarse a la autoridad a más tardar el día 17 del mes siguiente.

Y todo esto implica cuentas claras

Por ello fue necesario establecer obligaciones a las personas causantes del impuesto al valor agregado para que en caso de revisión de la autoridad se pudiera demostrar que el impuesto que se le está pagando es el que corresponde conforme a las disposiciones aplicables.

## OBLIGACIONES QUE LA LEY DEL IVA IMPONE A LOS CONTRIBUYENTES

Es el artículo 32 de la Ley del impuesto al valor agregado que señala:

**Artículo 32.-** Los obligados al pago de este impuesto y las personas que realicen los actos o actividades a que se refiere el artículo 2o.-A tienen, además de las obligaciones señaladas en otros artículos de esta Ley, las siguientes:

### LLEVAR CONTABILIDAD

La primera fracción del artículo 32 impone:

1. Llevar contabilidad de conformidad con el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento.

Es importante señalar que la obligación de llevar contabilidad establecida en la Ley del IVA es independiente de la señalada en la Ley de ISR y en la de IEPS y, aunque no implica que tengamos que llevar tres contabilidades, sí es importante que no perdamos de vista que, si una o dos de las leyes mencionadas nos eximen, con una de las tres que nos obligue debemos cumplir con esta obligación.

Por ejemplo: una persona física que da en arrendamiento un local comercial y que para efectos de ISR aplica la deducción opcional del 35 % mejor conocida como deducción ciega, en términos del artículo 118 fracción II de la ley de ISR no tiene obligación de llevar contabilidad; a su vez, por no ser el arrendamiento del local comercial objeto del IEPS tampoco existe en esta ley tal obligación. Sin embargo, por tratarse de la renta de un local comercial y estar gravada dicha actividad por el IVA, sí existe, en términos del transcrito artículo 32 fracción I, la obligación de llevar contabilidad.

Debe quedar claro pues que, independientemente de que las otras leyes fiscales nos eximan de hacer contabilidad, al obligarnos IVA, debemos cumplir so pena de una sanción por parte de la autoridad.

Otro punto importante respecto a la obligación de llevar contabilidad es que debe hacerse en términos del Código Fiscal de la Federación el cual en su numeral 28 fracciones I a IV indica la información y documentación que la integra así como la manera en que deben efectuarse los registros contables sobresaliendo el requisito de hacerla de manera electrónica cumpliendo las especificaciones técnicas que en reglas de carácter general da a conocer el SAT, así como la de enviar ciertos archivos en formato XML emanados justamente de la contabilidad.

En las reglas misceláneas 2.8.1.6, 2.8.1.7, 2.8.1.16, 2.8.1.19 y también en el artículo 33 apartados A y B, podrá encontrar, amable lector, más información al respecto.

### EXPEDIR CFDI

Otra obligación contenida en el artículo 32 que estamos analizando es la siguiente:

### III. Expedir y entregar comprobantes fiscales.

Esta obligación debe cumplirse aun y cuando el adquirente del bien o servicio no lo solicite.

Existe una mala práctica en muchos contribuyentes de incrementar el precio en un 16 % cuando el cliente solicita su factura; incluso, hay quien se atreve a poner en su negocio el siguiente mensaje: “si requiere factura se incrementará el 16 % de IVA”.

Esto es una mala práctica tanto por el lado fiscal como el comercial ya que como lo indiqué antes, se pida o no el CFDI, se debe cobrar el IVA y se debe expedir el comprobante. Al respecto es conducente señalar que el SAT en su página de internet [http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/solicita\\_consideraciones.htm](http://omawww.sat.gob.mx/factura/Paginas/solicita_consideraciones.htm) ha señalado como una práctica indebida **“incrementar el precio del bien o servicio cuando se solicita la factura”** e invita a los contribuyentes a denunciar tal práctica por medio de un correo electrónico enviado a la dirección **denuncias@sat.gob.mx**.

Por otra parte, la Ley Federal de Protección al Consumidor señala en el siguiente artículo:

**ARTÍCULO 7 BIS.-** El proveedor deberá informar de forma notoria y visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que ofrezca al consumidor.

Dicho monto deberá incluir impuestos, comisiones, intereses, seguros y cualquier otro costo, cargo, gasto o erogación adicional que se requiera cubrir con motivo de la adquisición o contratación respectiva, sea ésta al contado o a crédito.

Como podemos apreciar, el cobro del impuesto es independiente de que el cliente solicite o no su factura, pero además esto último es una obligación en términos de la Ley del IVA por lo que de no hacerlo se estará expuesto a una sanción económica en términos de los artículos 83 y 84 del CFF.

Otra mala práctica respecto a la expedición del comprobante fiscal es la de solicitarlo para “tramitar el pago” incluso cuando no se haya entregado el bien, prestado el servicio o efectuado algún anticipo.

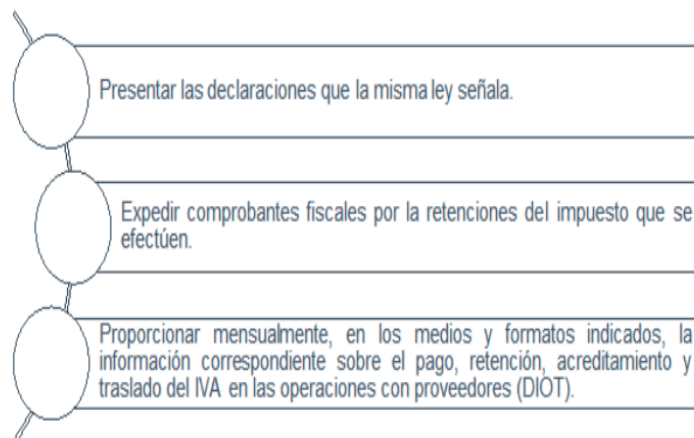
Recordemos que de hacerlo así dicha acción no tiene ningún sustento y nos coloca en el supuesto de un CFDI sin operación (materialidad).

El deber ser es: primero la entrega del bien, prestación del servicio o cobro del anticipo y después la expedición del comprobante. El artículo 39 del reglamento del código fiscal de la federación les da a los contribuyentes 24 horas de plazo contados a partir de la realización de la operación.

En el caso de que quisiera, amable lector, conocer cómo se expide un CFDI cuando el cliente no lo solicita le sugiero lectura de la regla miscelánea fiscal 2.7.1.24

### OTRAS OBLIGACIONES

Además de las obligaciones comentadas, hay otras señaladas en el artículo 32 de la Ley del IVA:



### CONCLUSIÓN

Como pudimos notar, realizar los actos o actividades que la Ley del Impuesto al Valor Agregado señala como gravados, implica además de la obligación de trasladar expresamente y por separado el impuesto, la obligación de cobrarlo, pagarlo al SAT en las fechas y formas establecidos, cumplir con diversas obligaciones que más de un contribuyente no conoce.

En este artículo he señalado algunas haciendo algunas precisiones que he considerado útiles para los lectores de esta prestigiada revista.



# AGRADECIMIENTOS

## Mtro. Sergio Casillas Macedo

Maestro en Derecho, exservidor público del Tribunal Superior de justicia de la Ciudad de México con una antigüedad de 34 años. Ha sido catedrático como catedrático a nivel licenciatura, diplomado y maestría durante 25 años.



**A**gradezco infinitamente al Dr. Juan Rabindrana Cisneros García, rector del CUEJ y, a la Lic. Fabiola Flores Téllez, directora académica, por su confianza y apoyo en la gran responsabilidad que me brindaron para ser el titular del programa de televisión que se llevó a cabo en esta primera etapa de los meses de marzo a junio del presente año, respecto de las entrevistas a diversos invitados e invitadas de diferentes instituciones sobre temas legales.

Asimismo, mi más sincero agradecimiento a todas y a todos mis invitados que confiaron en mí y en el CUEJ para la celebración de este tan importante programa, con un eterno cariño y admiración al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que me dio la oportunidad de laborar en tan grande institución por 34 años de manera ininterrumpida, otorgándome el honor de trabajar para ellos y así adquirir experiencia y conocimiento para desempeñarme profesionalmente.

Dentro de este período antes señalado, tuve la oportunidad y un gran honor de platicar con juezas, jueces y directores del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, y de otras instituciones, comentando diversos asuntos legales de interés general como los siguientes:

- Procedimiento de los juicios orales en materia familiar.

- Análisis sobre el interés superior de los menores.
- Adopción nacional e internacional.
- Protocolos de actuación enfocados a la impartición de justicia en materia de niñas, niños y adolescentes.
- Controversias del orden familiar como son alimentos, guarda y custodia, y régimen de visitas y convivencias.
- Análisis de la filiación como consecuencia de la adopción.
- El dictamen psicológico, alcances, límites y responsabilidad profesional.
- La difusión de la cultura jurídica en la Ciudad de México, anales de jurisprudencia y boletín judicial.

- La carrera judicial en la Ciudad de México, como modelo de una profesionalización continua.
- La elaboración del convenio en la tramitación del juicio de divorcio en el proceso anal judicial.
- La suspensión de la patria potestad, concepto y su procedimiento.
- Estrategias para la efectividad en la enseñanza/aprendizaje del Derecho.

Como se darán cuenta, el programa de televisión abarcó temas diversos que fueron muy interesantes y algunos de ellos muy complejos, sobre todo aquellos en los que se encuentran involucrados los derechos

de las niñas, niños y adolescentes y los grupos vulnerables.

También es de destacar que nuestros invitados e invitadas, nos brindaron sus conocimientos y experiencias profesionales en cada uno de sus ámbitos profesionales, a lo cual nuevamente agradezco que nos hayan tenido la confianza para llevar a cabo cada una de las entrevistas realizadas y ya comentadas.

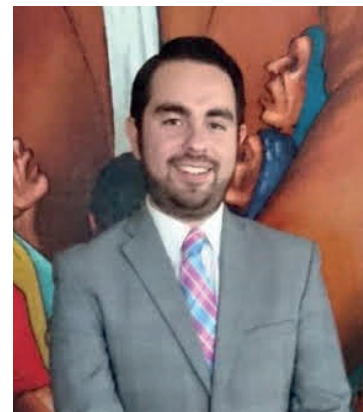
En lo personal espero que se hayan cumplido las expectativas de todos nuestros seguidores, de la comunidad CUEJ y del público en general al haber platicado con los peritos en cada una de sus materias.

Muchas gracias; la verdad es un gran honor el poder colaborar en esta gran Institución que tan dignamente dirigen nuestro señor rector y la directora académica.

**HASTA PRONTO.**



# LA UMA COMO VALOR PARA EL LÍMITE DEL CÁLCULO DE LAS PENSIONES



## Mtro. Edgar René Marín Gómez

Licenciado en Derecho con mención honorífica, especialista en Derecho administrativo, ambos por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Derecho aduanero y en Derecho de comercio exterior, doctorando en Derecho, por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos, así como catedrático en esta misma institución, capacitador externo del SAT y abogado litigante en la materia administrativa y fiscal.

**E**l reconocimiento del derecho al trabajo y a la seguridad social nació de la necesidad para satisfacer los anhelos de justicia social de los hombres, así como la posibilidad de tener acceso al trabajo, que se convierte en una obligación solidaria y subsidiaria de la sociedad para asegurar la subsistencia a todos aquellos que cumplen con su deber. Además, el Estado mediante diversos sistemas, tiene el deber de otorgarle seguridad social para que los trabajadores tengan un nivel de vida decoroso durante su vida productiva y así como al jubilarse.

La seguridad social debe plantear soluciones integrales a los problemas de la pobreza y la miseria, promoviendo el bienestar material y cultural. En nuestro país, durante los últimos años, se han modificado sustancialmente el concepto de las pensiones principalmente en la actualización del monto de éstas, aunque desafortunadamente siempre por debajo del crecimiento del costo de la vida por lo que es necesario una constante revisión en el marco jurídico con el fin de corregir sus deficiencias.

Ahora bien, dentro de la seguridad social existen seguros<sup>1</sup> que por su propia naturaleza jurídica crean derechos para cada asegurado acordes con las cotizaciones pagadas, las que permiten que de manera individual se reciban las prestaciones correspondientes a los seguros de invalidez, vejez, cesantía

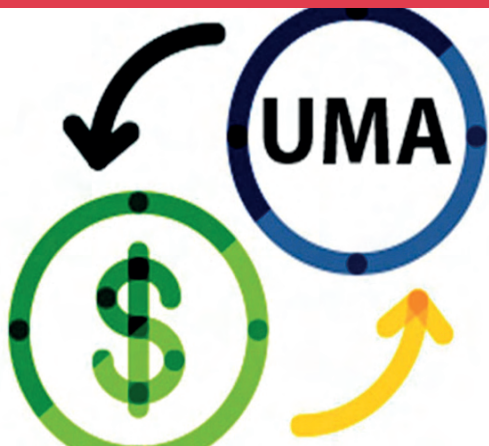
en edad avanzada y muerte. Para llevar a cabo la transferencia de dichos fondos es necesario el pago de una cuota llamada prima. El total de las primas sirve para constituir un fondo de reserva del cual se tomarán los recursos para hacer frente a las adversidades individuales.

En relación con la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado mexicano, en el año de 1925 apareció la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro, en la cual, por primera vez, se otorgaban pensiones a los trabajadores de la Administración Pública; asimismo el Estado reconocía su obligación de contribuir a su bienestar y seguridad social.

En el año de 1959 apareció la primera Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. En 1984 durante la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, entró en vigor la siguiente Ley del Instituto citado, misma que fue abrogada el 31 de marzo de 2007, transformándose sustancialmente el régimen de seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado.

Tras la reforma a la Ley del Instituto en el año de 2007, hubo trabajadores al servicio del Estado que no aceptaron las cuentas individuales o el bono de pensión ofrecido por el gobierno, ya que decidieron permanecer en el régimen de pensión vitalicia que





paga el Estado con recursos públicos y que tiene un límite superior equivalente a diez veces el salario mínimo, de conformidad con el artículo 7 del Reglamento para el otorgamiento de pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Posteriormente, el 28 de enero de 2016 entró en vigor el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de enero del mismo año.

Con este decreto, se creó la Unidad de Medida y Actualización (UMA) con la finalidad de desindexar al salario mínimo como referencia económica, es decir, llevar a cabo la desvinculación del salario en tanto unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos, prestaciones, etcétera, lo que contribuye a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos.

Bajo este contexto, el Instituto comenzó a cuantificar las pensiones de los que fueron trabajadores e iniciaban el trámite de sus pensiones vitalicias, conforme al seguro correspondiente previsto en la Ley del Instituto, con un tope de diez veces el valor de la UMA,

provocando que algunos de ellos acudieran ante la autoridad jurisdiccional vía juicio contencioso administrativo para que la autoridad estableciera el tope con base en el valor del salario mínimo y no conforme al valor de dicha unidad.

Ante las resoluciones que no favorecieron a los pensionados se promovieron juicios de amparo directo y ocurrió que los tribunales colegiados resolvieron en diferentes sentidos, es decir, unos le dieron la razón a los particulares y otros al Instituto, lo que generó una contradicción de tesis cuya resolución le correspondió a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por lo que, en la sesión del miércoles 17 de febrero de 2021, los ministros resolvieron que la cuantificación de las pensiones se realizará utilizando como base el valor de la UMA, al indicar que la reforma constitucional en materia de desindexación del salario, que entró en vigor en enero de 2016, eliminó el salario mínimo como parámetro para calcular multas, créditos y aportaciones de seguridad social.

La jurisprudencia de la Suprema Corte indica esencialmente que todo lo relativo a la pensión “a su monto, actualización de pago o límite máximo debe aplicarse el salario, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza; además de atender

para esos aspectos a la Unidad y Actualización se desnaturalizaría la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión, lo cual jurídicamente no es permisible”.<sup>2</sup>

En este sentido, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impacta económicamente en el cálculo de las pensiones a los trabajadores del Estado, pues el cómputo conforme este nuevo escenario significa que el tope de la pensión cuantificado en salarios mínimos, que hoy sería de alrededor de \$42,000 mensuales, en comparación a una pensión que tenga como unidad de tope el valor de la UMA, equivaldría a alrededor de \$26,000 mensuales, es decir, ese monto sería el máximo a alcanzar por pensión jubilatoria mensual para un trabajador.

<sup>2</sup> Tesis 2a./J. 30/2021 (10a.), *Semanario judicial de la Federación y su Gaceta*, Undécima Época, t. IV, junio de 2021, p. 3604. Registro digital 2023299.

Al respecto, es importante enfatizar el hecho de que en la exposición de motivos que dio origen a esa reforma constitucional en materia de desindexación del salario mínimo, se advierte que su creación tuvo como objetivo que se use como índice, unidad, base, medida o referencia para indexar ciertos supuestos y montos ajenos a la naturaleza del salario mínimo, como el entero de multas, contribuciones, saldos de créditos a la vivienda otorgadas por organismos de fomento, entre otras.

Ahora bien, la pensión de los trabajadores es una prestación de seguridad social derivada de la relación de trabajo sustentada propiamente en el salario, pues incluso para generarla y pagarla se atiende al fondo constituido durante la vida activa laboral, mediante aportaciones del salario percibido, topadas a la cantidad máxima de diez veces el salario mínimo. En consecuencia, es claro que se trata de una prestación laboral, derivada de la relación que existe entre el trabajador y el patrón de derecho público.

Por lo que dicha prestación en cuanto a su monto, actualización, pago o límite máximo debe aplicarse como unidad el valor del salario mínimo, por no tratarse de cuestiones ajenas a su naturaleza laboral, caso contrario implicaría desnaturalizar el carácter de la pensión y se utilizaría un factor económico ajeno a la prestación de seguridad social referida, distinta al salario y ajeno a la pensión.

Empero, conforme a un enfoque de derechos humanos, el criterio emitido por la Suprema Corte, no se encuentra acorde con lo dispuesto en el artículo 1° constitucional, pues propicia que las autoridades no atiendan cabalmente el principio de progresividad que establece la obligación del Estado de procurar todos los medios posibles para la

satisfacción de los derechos, a adoptar las medidas legislativas, judiciales y administrativas, para tal efecto y, por supuesto, a la prohibición de cualquier retroceso, aunado a que son derechos de los servidores públicos que generaron durante sus años de trabajo, es decir, su titularidad es inherente de su actividad laboral y no con posterioridad.

De esta manera, se afecta la posibilidad del trabajador a tener acceso a bienes de consumo que satisfagan sus necesidades, tanto básicas como personales. Esto, se encuentra previsto en numerosos tratados y convenciones, que procuran asegurar a la persona, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por otros medios de protección social.





# EFFECTOS FISCALES DEROGACIÓN DE LA REGLA 5.2.5 DE LAS RGCE PARA EL 2020

**Lic. Guillermo Bonilla Gándara**

Licenciado en Derecho por el Instituto de Estudios Superiores y Estratégicos Siglo XXI y en Comercio Internacional por el Instituto Internacional de Estudios Superiores, maestrante en Derecho fiscal y administrativo por el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Tiene experiencia como auditor, asesor y consultor en comercio exterior especialmente en empresas IMMEX, abogado postulante defensor en derecho administrativo, fiscal y aduanero. Fue gerente jurídico de la Asociación de Agentes Aduanales de Reynosa, A.C., actualmente encargado del área legal de Grupo Aduanal Sustaita, S.C.

**E**l presente artículo aborda los efectos fiscales de la derogación de la regla 5.2.5 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el 2020, en específico en lo que se refiere a los supuestos de retención a que se refiere el artículo 1-A, fracción III de la Ley del IVA.

En el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 27 de mayo del 2021 se publicó la Quinta Resolución de Modificaciones a las Reglas Generales de Comercio Exterior (RGCE) para el 2020, dicha resolución entró en vigor al día siguiente de su publicación, con excepción de la derogación a la regla 5.2.5 la cual entró en vigor a los 30 días siguientes al de su publicación en el DOF, siendo el 8 de julio del 2021.

La regla citada señalaba que la enajenación que realicen residentes en el extranjero de mercancías importadas temporalmente por una empresa con Programa IMMEX a dicha empresa, se considerará efectuada en el extranjero y continuarán bajo el mismo régimen de importación temporal, por lo que únicamente, en el caso de cambio de régimen de importación temporal a definitivo de las mismas, procederá la determinación correspondiente en términos de la Ley del IVA.

En otras palabras, si un residente en el extranjero (Corporativo) transmitía la propiedad de sus inventarios importados temporalmente a la propia empresa IMMEX importadora (Filial), bajo el cobijo de la regla derogada 5.2.5, se consideraba dicha enajenación efectuada en el extranjero<sup>1</sup> y solamente si se realizaba un cambio de régimen de temporal a definitivo, entonces procedería la determinación del IVA en los términos de la Ley de la materia, esta regla quedó derogada.

## ¿CUÁNDO SE DEBEN DE RETENER EL IVA A UN RESIDENTE EN EL EXTRANJERO?

El artículo 1-A de la Ley del IVA establece los supuestos que de actualizarse generarán el nacimiento de la obligación para el adquirente de bienes de retener el impuesto que se le traslade.<sup>2</sup>

Julio César Cuevas Castro en su libro “Correcta Aplicación del Impuesto al Valor Agregado en Operaciones de Comercio Exterior”<sup>3</sup> nos hace ver que de las fracciones establecidas del artículo 1-A, es la

<sup>1</sup> El artículo 10 de la Ley del IVA señala que la enajenación se efectúa en territorio nacional, si en él se encuentra el bien al efectuarse el envío al adquirente y cuando, no habiendo envío, en el país se realiza la entrega material del bien por el enajenante.

<sup>2</sup> Artículo 10.-A.- Están obligados a efectuar la retención del impuesto que se les traslade, los contribuyentes que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: ... III. Sean personas físicas o morales que adquieran bienes tangibles, o los usen o gocen temporalmente, que enajenen u otorguen residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país.

<sup>3</sup> Cuevas Castro, Julio César, Correcta Aplicación del Impuesto al Valor Agregado en Operaciones de Comercio Exterior, México, Editorial CENCOMEX S.A. de C.V., 2016, p. 20.



fracción III la que se refiere a operaciones de comercio exterior, pues indica que se deben de realizar actos jurídicos internacionales entre una empresa nacional con una extranjera sin establecimiento permanente en territorio nacional, actos jurídicos consistentes en la enajenación de las mercancías, o bien el otorgamiento de estas para su uso o goce temporalmente.

La obligación de la retención del IVA se motiva, debido a que el impuesto causado por la enajenación o el otorgamiento el uso o goce temporal de bienes que efectúe el residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, en los términos del artículo 1, fracciones I y III de la Ley del IVA al adquiriente en territorio nacional, no podría ser enterado al fisco por el residente en el extranjero y el legislador estableció la obligación de retener y enterar dicho IVA que se le traslade a la empresa adquiriente de los bienes en territorio nacional.

Los requisitos que enuncia el artículo 1-A, fracción III de la ley del IVA para que nazca la obligación de retener y enterar el impuesto al valor agregado trasladado por el extranjero son los siguientes: (1) que la propiedad de los bienes sea de un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en territorio nacional; (2) que exista una enajenación (transmisión de propiedad) de dichos bienes al residente en territorio nacional o bien, un otorgamiento para el uso o goce temporal (arrendamiento); (3) que los bienes que se adquieren sean enviados o entregados en territorio nacional.

Así mismo, el artículo 1 de la Ley del IVA en su segundo y tercer párrafo señala que el impuesto se calculará aplicando a los valores que señala la Ley (valor de actos o actividades como su base gravable), la tasa del 16 % y que el contribuyente, trasladará dicho impuesto de forma expresa y por separado a las personas que adquieran bienes o los usen o gocen temporalmente, entendiéndose por traslado del impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe hacer a dichas personas de un monto equivalente al impuesto establecido en la Ley del IVA, inclusive cuando se retenga en los términos del artículo 1-A de dicha Ley.

Por lo que podríamos agregar un requisito adicional para que nazca la obligación de retención y es que (4) el residente en el extranjero traslade el impuesto, esto es que efectúe un cobro o cargo del IVA de forma expresa y separada al adquiriente en territorio nacional para que este lo retenga.

## HECHO IMPONIBLE

Carlos Javier Verduzco Reina en su libro Derecho financiero nos enseña que el principio de legalidad implica el otorgar seguridad jurídica a los gobernados respecto de la estructura legislativa para el establecimiento de las contribuciones, teniendo el Poder Legislativo en los artículos 72 inciso H, 73 y 74 de la Constitución la facultad para la creación de leyes con el fin de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto (artículo 73, fracción VII) 4, así mismo por disponerlo el artículo 31, fracción IV de la Carta Magna, son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes.

En ese tenor, tenemos que el Código Fiscal de la Federación en su artículo 6 nos ayuda a definir el presupuesto de hecho de la obligación tributaria, al indicar que las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran.

Dicho en otras palabras, el numeral 6 antes mencionado, señala que, si bien existen hechos tributarios o bien hipótesis previstas en las leyes fiscales, también lo es que existe un hecho imponible, lo cual se refiere al momento cuando el acto jurídico del particular encuentra cabida en la hipótesis legal, para que nazca la obligación tributaria.

Por lo que, solamente cuando la conducta del particular, encuadre en la hipótesis prevista en la Ley del IVA, luego entonces existirá una obligación tributaria de causar, retener y enterar el IVA al fisco en caso contrario, no existirá dicha obligación tributaria.

## OPERACIÓN MAQUILA

La industria maquiladora por regla general, aunque existen sus excepciones, se rige con base a lo señalado en el artículo 181 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, que se refiere a una operación de maquila, la cual tiene como requisitos entre otros, que un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país, suministre y mantenga inventarios propios en territorio nacional para que una empresa maquiladora con motivo de un contrato de maquila y al amparo de un Programa de Maquila autorizado por la Secretaría de Economía, lleve a cabo procesos de elaboración, transformación o reparación, por lo que

la operación de la empresa maquiladora conforme al artículo aludido, se efectúa con bienes que no son de su propiedad.

Una importación bajo el esquema de una operación de maquila, se basa en el régimen temporal de importación para elaboración, transformación o reparación en programas de maquila de exportación y las mercancías importadas efectuadas bajo este régimen, se encuentran obligadas a retornar al extranjero o destinarse a otro régimen aduanero en los plazos previstos para ello según lo indica el artículo 90, inciso b), fracción I y, 108 Ley Aduanera, también podrán ser transferidas a otras empresas con Programa de conformidad con el artículo 112 del mismo ordenamiento.

Por lo que hecho de que una empresa maquiladora efectúe una operación de cambio de régimen de temporal de definitivo de las mercancías, o bien las transfiera a otra empresa con Programa, no necesariamente significa que adquirió la propiedad de las mismas al residente en el extranjero para que nazca la obligación tributaria de retener y enterar el IVA trasladado al fisco, debemos recordar que la Ley Aduanera regula la entrada y salida de mercancías de territorio nacional no actos que definen la adquisición de propiedad de los bienes, ya que para analizar si existe o no enajenación, habrá que revisar estrictamente sus supuestos establecidos en el artículo 14 del Código Fiscal de la Federación.

## CONCLUSIONES

Primera. La derogación de la regla 5.2.5 de las Reglas Generales de Comercio Exterior para el 2020 no actualiza automáticamente los supuestos de entero y retención a que se refiere el artículo 1-A, fracción III de la Ley del IVA.

Segunda. Es menester analizar cada acto jurídico para determinar si se trata de una venta en territorio nacional y si se encuentra en los supuestos de la retención del impuesto, en caso contrario, al no estar frente a la situación jurídica prevista en la Ley, tampoco existiría una obligación tributaria para ello.

Tercera. En caso de que a una empresa IMMEX le sea enajenada mercancía por un residente en el extranjero sin establecimiento permanente en el país y dichos bienes que se adquieren sean enviados o entregados en territorio nacional, deberá efectuar la retención y el entero del impuesto que se le traslade de conformidad con la mecánica establecida para ello, a menos que identifique y legalmente le sea aplicable algún beneficio<sup>5</sup> que le exima de dicha obligación.



4 Verduzco Reina, Carlos Javier, *Derecho Financiero*, México, Editorial IURE Editores, S.A. de C.V., 2018, p. 39.

# LA REFORMA LABORAL EN MÉXICO



## Lic. Raymundo Huerta Lucio

Abogado socio fundador de SIO Consultores Legales, con especialidad en prevención y persecución en operaciones con recursos de procedencia ilícita y maestrando en Derecho fiscal y administrativo. Experiencia en el sector privado como consultor de operaciones corporativas, legales y en materia de cumplimiento (compliance) para organizaciones públicas y privadas, postulante en materia administrativa y fiscal; y en el sector público como asesor en SAGARPA, en la Cámara de Diputados, LXIII Legislatura y jefe de departamento de recursos humanos del Sistema de Aguas de Huixquilucan, Estado de México.

**E**l 24 de febrero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Laboral.

En virtud del citado decreto se contemplan los siguientes puntos:

- La justicia laboral quedará a cargo del Poder Judicial de la Federación y de los Poderes Judiciales locales, según sean los conflictos de materia federal o local, respectivamente;
- Procedimientos para garantizar la libertad de negociación colectiva y democracia en las organizaciones sindicales;
- La obligatoriedad de acudir a la instancia conciliatoria;
- La constitución de un organismo descentralizado de carácter federal, que además de llevar a cabo los procedimientos de conciliación en dicha materia, se encargue del registro de todas las asociaciones sindicales del país y del registro y depósito de los contratos colectivos de trabajo y;
- La creación de centros de conciliación, especializados e imparciales, en las entidades federativas.

Asimismo, el artículo segundo transitorio del decreto en mención establece que las adecuaciones legisla-

tivas que correspondan para dar cumplimiento a la citada reforma del apartado "A" del artículo 123 constitucional, deberán ser realizadas por el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo.

Fue así como el 1° de mayo de 2019 se publicó el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de la Defensoría Pública, de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y de la Ley del Seguro Social, en materia de Justicia Laboral, Libertad Sindical y Negociación Colectiva.

En este orden de ideas, en el régimen transitorio del citado decreto, se establece una serie de obligaciones y plazos para realizar la implementación de forma gradual, de tal manera que las instituciones responsables cuenten con el tiempo suficiente para planear e instrumentar exitosamente la reforma laboral denominada Estrategia nacional para la implementación del sistema de justicia laboral.

Para instrumentar dicha reforma, se formó un Consejo de Coordinación, instancia nacional de consulta, planeación y coordinación, que determinó tres etapas de implementación para las entidades federativas para dar cumplimiento oportuno a los plazos previstos en los artículos transitorios de la Ley Federal del Trabajo y crear los tribunales laborales locales; para



el año 2022, cada una de estas entidades federativas ya deben contar con sus tribunales laborales.

Las metas y acciones específicas establecidas en la Estrategia nacional para la implementación del sistema de justicia laboral son:

## 1. NORMATIVIDAD Y ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA

Con el propósito de contribuir al logro de la encomienda constitucional es de vital importancia hacer compatibles las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo con las disposiciones estatales, con los fines, primero, de evitar conflictos entre normas, y segundo, para proteger y garantizar los derechos laborales. De este modo, corresponde a las autoridades legislativas y ejecutivas locales revisar la legislación de cada una de las entidades federativas para modificar su marco normativo, y asegurarse que estén armonizadas con lo establecido en la Constitución Federal. Por otra parte, corresponde al Congreso de la Unión expedir la Ley Orgánica del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

## 2. CREACIÓN E INSTALACIÓN DEL CENTRO FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y REGISTRO LABORAL

El Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Organismo Público Descentralizado, otorgará y promoverá la conciliación para la solución de controversias entre trabajadores y patrones, así como entre personas trabajadoras y sindicatos o bien, entre sindicatos. Por otra parte, registrará todos los contratos colectivos, convenios de administración de contratos-ley, reglamentos interiores de trabajo y registro de organizaciones sindicales; igualmente, emitir la constancia de representatividad y se hará cargo de la verificación de que los procedimientos de elección de dirigencias sindicales y de consulta para la aprobación mayoritaria de los contratos colectivos de trabajo, se realicen mediante voto personal, libre, secreto y directo.

## 3. INSTRUMENTACIÓN DE ORGANISMOS PÚBLICOS, DESCENTRALIZADOS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS

Conforme a la fracción XX del apartado A del artículo 123 constitucional antes de acudir a los Tribunales Laborales, las personas trabajadoras y patronas deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, la función conciliatoria estará a cargo de los centros de conciliación, especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas, su integración y funcionamiento se determinarán en las leyes locales, representando el reto de una coordinación interinstitucional necesaria para instrumentar exitosamente esta instancia de conciliación en cada entidad federativa.

## 4. TRANSFERENCIA Y DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES

Con la finalidad de llevar a cabo la planeación de la transferencia de los acervos laborales registrales de asuntos colectivos al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, en el presente apartado se proponen las directrices para realizar la transferencia de los expedientes y documentación, que de acuerdo con sus atribuciones, tengan bajo su atención o resguardo la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Federal, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje, al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

## 5. CREACIÓN Y ENTRADA EN FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES LABORALES

Dentro de las reformas de la Ley Federal de Trabajo, se contempla la creación de Tribunales Laborales en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para transitar a una nueva autoridad responsable de los conflictos laborales, con lo que se hace efectiva la independencia del sistema de justicia laboral respec-



to del Poder Ejecutivo, transfiriendo así la impartición de justicia en la materia al Poder Judicial, a los que les corresponderá instrumentar los nuevos procedimientos y juicios en forma breve, ágil y eficiente.

## 6. CONCLUSIÓN DE LOS ASUNTOS EN TRÁMITE PENDIENTES DE RESOLUCIÓN

Parte de la transición al nuevo modelo de justicia laboral implica la extinción de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, para lo cual es necesario concluir en un tiempo razonable los asuntos que se encuentran actualmente en las Juntas, así como los que se sigan acumulando hasta en tanto entren en operación los Centros de Conciliación y los Tribunales Laborales, de ahí la necesidad de establecer programas de abatimiento del rezago.

## 7. PROFESIONALIZACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA LABORAL

Gran parte del éxito de la instrumentación de un nuevo sistema de justicia no sólo depende de la disponibilidad de recursos materiales y tecnológicos, sino que los operadores del mismo cuentan con las herramientas, habilidades, actitudes y destrezas necesarias

para afrontar de la mejor manera la implementación del Sistema.

La capacitación es un pilar fundamental para que el proceso de implementación transite adecuada y eficazmente; es por ello que deben quedar claras las bases para el desarrollo de dicha capacitación y en su caso profesionalización de las personas operadoras.

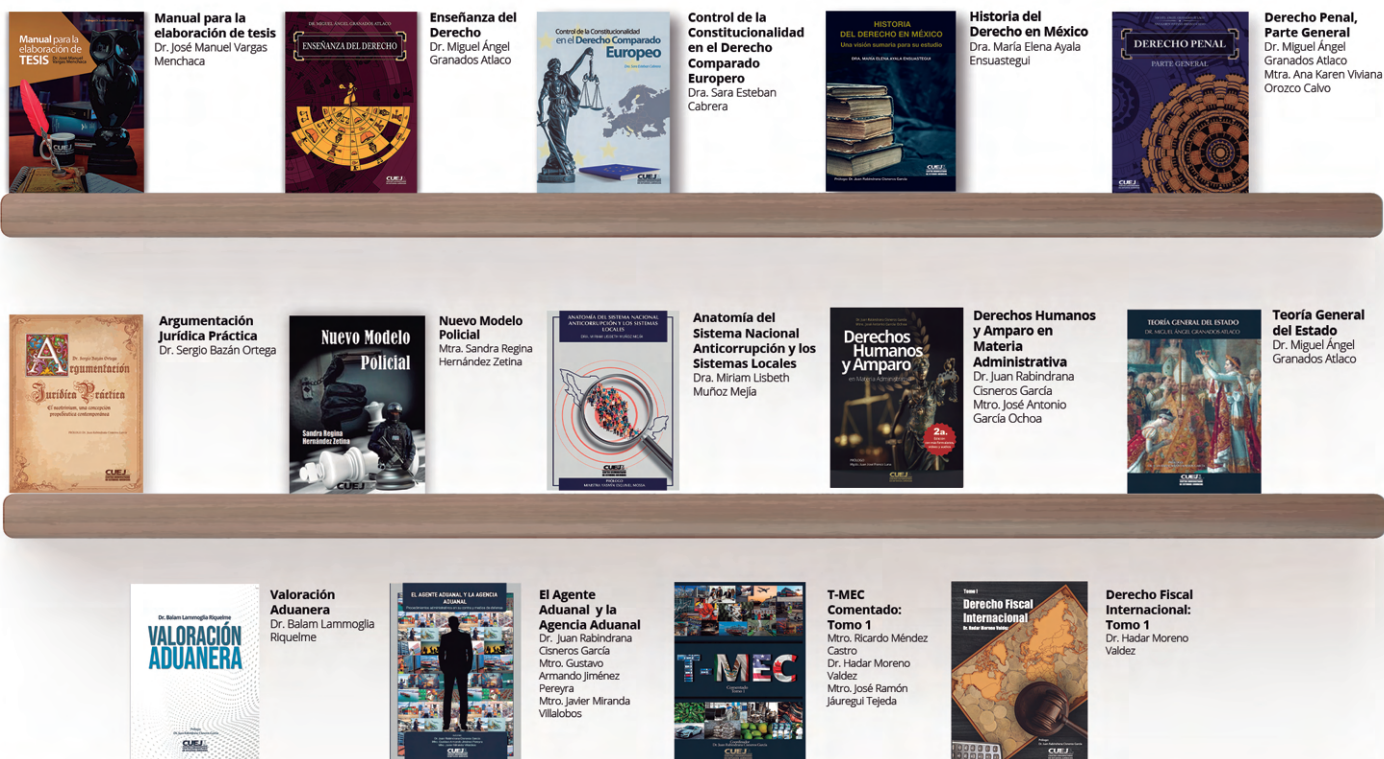
## 8. PROCEDIMIENTOS PARA GARANTIZAR LA DEMOCRACIA SINDICAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA AUTÉNTICA

La libertad democracia sindicales constituyen elementos básicos de cualquier Estado democrático de Derecho; por ello en esta reforma laboral se establecieron los siguientes mecanismos para garantizar los principios y derechos de tipo colectivo.

## 9. PERSPECTIVA DE GÉNERO

La reforma laboral consideró necesario reafirmar los principios de igualdad y no discriminación, por lo que se propone incluir una política de perspectiva de género para garantizar que esta se instrumente de forma transversal tanto en la conformación de las nuevas instituciones como en los procedimientos a cargo de estas, haciendo así exigible el respeto, igualdad y dignidad de las personas trabajadoras.

En conclusión, se puede determinar que México se encuentra ante un paradigma que requiere la voluntad de todos los actores involucrados en esta reforma, por lo que la constante capacitación es importante para cada uno de ellos, y así se puedan mejorar las relaciones laborales de los mexicanos.



**+10 Libros**  
para su análisis jurídico

DE VENTA EN  
**librosyrevistascuej.com**

el SÓTANO



EDITORIAL  
PORRÚA



mercado  
libre



**Libros Impresos**



**Libros Digitales**



# LOS DELITOS INFORMÁTICOS Y SUS IMPLICACIONES EN LA REGULACIÓN JURÍDICA DE MÉXICO A NIVEL FEDERAL



**Ing. José Mendieta Zúñiga**

Agente capacitador externo ante la STPS y la SGIRPC en la empresa ATICSA, ingeniero eléctrico electrónico con especialidad en telecomunicaciones por la UNAM. Diplomado en gerencia profesional de ventas por el ITESM, diplomado en programas integrales de protección civil por el Instituto Mora y otros cursos de complemento curricular en el área de administración, informática, protección civil y seguridad industrial.

**E**l presente artículo expone de manera sencilla y general, información realizada con una investigación de gran importancia en nuestra vida cotidiana, relacionada con el tema de los delitos informáticos y sus implicaciones en la regulación jurídica en México a nivel federal.

El uso de dispositivos electrónicos ha facilitado el acceso a la información y el conocimiento a través de internet; lo cual ha llevado a nuestras manos la búsqueda de información en diferentes áreas del conocimiento, a través de dispositivos modernos que nos acercan a los ambientes digitales. Se tiene conocimiento que “México cuenta con 65.8 millones de personas que utilizan internet y 60.6 millones que usan teléfonos inteligentes de acuerdo con la encuesta realizada por el INEGI en 2016”.<sup>1</sup>

Para el desarrollo de la investigación del presente artículo se definieron tres hipótesis, hipótesis de investigación (Hi) “La regulación jurídica en México a nivel federal para delitos informáticos actualmente es muy deficiente”; hipótesis nula (Ho) “La regulación jurídica en México a nivel federal para delitos informáticos actualmente es muy eficiente” y finalmente; la hipótesis alterna (Ha) La regulación jurídica en la CDMX para delitos informáticos actualmente es muy eficiente.

A nivel mundial, las autoridades han invertido tiempo, esfuerzos y cantidades monetarias considerables en tratar de limitar al crimen cibernético; sin embargo, continúan trabajando en dicha materia; puesto que, es muy complejo, derivado a que existen grandes espacios que las autoridades no han podido cubrir para la protección de la información de los usuarios a nivel jurídico, por lo que, el crimen organizado a nivel digital, ha llevado a cabo estrategias para efectuar diferentes tipos de delitos cibernéticos.

Cabe señalar que una de las definiciones en este ámbito de tecnología, fue aportada por Parker; quien definió los abusos informáticos como “cualquier incidente asociado con la tecnología; en el cual la víctima sufrió o pudo haber sufrido un daño y el autor, intencionadamente, obtuvo o pudo haber obtenido un beneficio”.<sup>2</sup>

Existen países que han avanzado considerablemente, entre casos particulares que han intentado crear una regulación para los delitos cibernéticos se encuentran Alemania, Austria, Francia, Gran Bretaña, Holanda, España, Chile y Estados Unidos. En el caso de México, se presume que tiene ya casi dos décadas en donde ha empezado a trabajar en la delimitación hacia los delincuentes cibernéticos; sin embargo, con la extensión del internet a nivel mundial, ha habido apertura de conocimiento y de información

<sup>1</sup> INEGI, mayo de 2016. Estadísticas a propósito del día mundial de Internet.

<sup>2</sup> Parker, Donn, Crime by computer, pp. 12 y 237.

que, al día de hoy, México está en proceso de regulación, aunque ha sido afectado por las grandes empresas del ámbito digital que llegan a través de internet en todas partes a nivel mundial. Empero, la delincuencia organizada ha aumentado y por consiguiente se ha sofisticado cada día más para tener alcance la información privada y pública, a través de diferentes mecanismos ilícitos.

Es importante señalar que los primeros riesgos que enfrentan los individuos y las corporaciones son las amenazas de virus informáticos y el acceso ilícito por individuos ajenos, a sistemas de información, también en segundo lugar están las afectaciones contra el patrimonio por fraudes cibernéticos. Algunos de los crímenes que se pueden cometer a través de internet son: sabotaje informático, piratería informática, cajeros automáticos, tarjetas de crédito, "phreaking", "hacktivismo", "cryptojacking", criptodivisas entre otros.

Además, se encuentran las afectaciones a la comunidad infantil y los jóvenes adolescentes por males asociados al "ciberbullying", ingeniería social, "sexting" y pornografía infantil. Ya que la información que se expone y comparte en redes sociales, el nivel de exposición, así como un bajo control de sus perfiles y poca supervisión de padres de familia son algunos comportamientos que facilitan la manipulación de los menores por parte de los delincuentes informáticos. Por otra parte, los "hackers" se clasifican en dos tipos: "white hat hackers": son individuos cuya actividad es buscar vulnerabilidades en redes y sistemas sin que realicen alguna actividad maliciosa, sólo reportan los fallos que observan y, los "black hat hacker": son personas con cierto conocimiento específico en el ámbito de informática que buscan corromper y desestabilizar la seguridad de un sistema.<sup>3</sup>

Cabe señalar que en México no existe una regulación específica para los delitos informáticos específicos, aunque se tienen sanciones para actos ilícitos llevados a cabo mediante recursos tecnológicos en diversos ordenamientos, siendo el sector financiero el que más ha avanzado en este aspecto, un hecho que no es de sorprenderse pues en México el delito mediante computadoras que más se lleva a cabo es el fraude, llamado "fraude cibernético".

Se puede apreciar que el entendimiento del tema relacionado con los delitos cibernéticos no es el

mismo en todos los estados de la república mexicana, ya que algunos estados cuentan con un índice de población superior al alcance a los dispositivos tecnológicos, así pues, los estados más industrializados son quienes cuentan con mayor acceso a la tecnología, lo cual los hace más vulnerables puesto que sus transacciones son mayoritariamente digitales.

Por otra parte, es comprensible que las autoridades en México no puedan ir a la par o más avanzadas en el ámbito jurídico en temas de delincuencia cibernética; puesto que se aprecia que los delincuentes cibernéticos están a la vanguardia ya que cuentan con presupuestos económicos significativos para invertir en el conocimiento de las deficiencias que tiene el ámbito jurídico en México y de ahí, cometer los actos ilícitos.

En cuanto al contexto penal mexicano incluye temas relacionados con: delitos informáticos que tienen la finalidad de destruir, alterar, o extraer información no autorizada de los sistemas informáticos y los delitos del orden común que se cometen a graves daños con nuevas tecnologías, por ejemplo el phishing.

El Código Penal Federal en su Capítulo II, "Accesos ilícito a sistemas y equipos de informática"; en los artículos bis 1,2,3,4 y 5 estipula sanciones vinculadas con este tipo de acciones ilícitas.<sup>4</sup>

Actualmente existe la tendencia a la digitalización, y México no es la excepción, muchas empresas están tomando la decisión, iniciando o en proceso de la digitalización, por lo que los responsables de la legislación en México; tienen un arduo trabajo por hacer.

Debido a la carencia de algunos temas particulares en el ámbito de seguridad informática, las corporaciones privadas y las instituciones públicas han considerado realizar las siguientes actividades, como precaución ante la vulnerabilidad de algún delito informático: administración de los servidores, capacitación del personal en los equipos informáticos, seguridad física, involucrando los accesos a las áreas de cómputo y sistemas, seguridad en el software y seguridad en los datos entre otros.

Como se ha mencionado, se han creado instrumentos internacionales, siendo el primero y más famoso el Convenio sobre Ciberdelincuencia o Convenio de

<sup>3</sup> Loredó Gonzalez, J. Alberto, Delitos Informáticos: su clasificación y su visión general de las medidas de acción para combatirlos, p 3

<sup>4</sup> Recuperado de: [http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf\\_mov/Codigo\\_Penal\\_Federal.pdf](http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf_mov/Codigo_Penal_Federal.pdf)

por gran número de países de los cuatro continentes, siendo la mayoría de ellos europeos, en el caso de México, no está considerado.

Algunos de los estados de la República mexicana, han avanzado en el ámbito normativo relacionado con los delitos informáticos, por lo que la hipótesis inicial es afirmativa, puesto que la deficiencia en cuanto a la normatividad de los delitos informáticos en todos los estados de la República mexicana es deficiente, incluyendo la Ciudad de México.

De todo lo anterior podemos concluir que la hipótesis principal inicial (Hi) “La regulación jurídica en México a nivel federal para delitos informáticos actualmente es muy deficiente” es certera, así como también se confirma de forma negativa las dos hipótesis complementarias; ya que es deficiente la normatividad mencionada, incluyendo la ciudad de México. A pesar de que México cuenta con apartados relacionados con la delincuencia informática en algunas leyes, falta integrar los alcances de la normatividad en este ámbito, de una manera

más central y no dispersa, una de las posibles causas es que como nación existen prioridades que entender y esta no es una de ellas ya que las autoridades asignan presupuesto a diferentes rubros, como se puede apreciar que actualmente se ha limitado el presupuesto para el tema de investigación, por otra parte, la falta de preparación de las autoridades encargadas de investigar, la falta de abogados especialistas que estén con amplio conocimiento específico en el tema. Por lo que falta mucho por hacer en este aspecto, y con la tecnología que avanza a un ritmo acelerado, necesitamos mirar hacia el futuro de manera local e internacional y tenemos que preocuparnos como ciudadanos de nuevas modalidades de delitos que se están llevando a cabo cada vez con mayor frecuencia.







# FEMINICIDIO

**Benjamín Argumedo Perrusquia**

Estudiante del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ) y estudiante de la licenciatura de contaduría en la Escuela Bancaria y Comercial.

**E**l presente artículo aborda el delito de feminicidio en el Estado de México, revisando desde su significado, hasta realizar una reflexión que nos ayude a entender qué requerimos como sociedad para poder disminuir los índices de violencia por ese delito.

El feminicidio en el Estado de México es un tema de suma importancia, pues, pese a que existe una tasa muy alta de este delito en los últimos años, el gobierno tanto federal como estatal no han realizado lo suficiente para detener este problema.

Cabe destacar que aun sabiendo el Estado mexicano que los feminicidios suceden por misoginia<sup>1</sup>, machismo o rechazo al sexo femenino de parte de los hombres, no es capaz de encontrar la manera de terminar con ello.

Requerimos tener claro que el feminismo, no es un grupo radical que busca dividir o fomentar el odio hacia el género masculino, sino que es un movimiento político y social que supone la toma de conciencia de las mujeres como grupo, en contra de la opresión, la violencia sexual, subordinación y explotación, que busca condiciones de igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en relación con los hombres, así como condiciones sociales justas para ambos sectores.

Las personas que cometen esos actos denigrantes, desgraciadamente en su mayoría son las parejas sentimentales actuales o anteriores de las víctimas, también pueden ser conocidos e incluso parientes de la víctima, ya sea por odio, rechazo o incluso o por

trata de personas (aunque en México este delito es penado en el código penal federal con una pena de 50 a 70 años de prisión. Artículo 325).<sup>2</sup>

Desafortunadamente la violencia en México ha crecido de manera alarmante, superando a las instituciones del Poder Judicial y el Estado de México ocupa los primeros lugares en este delito.

Cabe hacer mención que existen dos tipos de feminicidio: directos o activos y pasivos e indirectos. Los directos o activos son las muertes de mujeres y niñas como resultado de violencia doméstica, ejercida por la pareja o el padre en el marco de una relación de intimidad o de convivencia; también lo es, el asesinato misógino de mujeres y niñas cometidas en nombre del honor, los feminicidios activos también son las muertes debidas a abortos inseguros y clandestino, o por prácticas dañinas (por ejemplo, las ocasionadas por la mutilación genital femenina o la muerte de las niñas o de las mujeres por negligencia, por privación de alimento o maltrato).

Los feminicidios pasivos o indirectos pueden ser por trata de blancas en su modalidad de prostitución, que nos indica la muerte de una mujer por el hecho de ejercer este oficio; racismo; otra forma de feminicidio pasivo se da por el simple hecho de ser de un origen étnico diferente y se da un rechazo u odio a la mujer, e incluso el transfóbico que el victimario actúa en contra de la víctima únicamente por su orientación sexual, como podemos observar el feminicidio en México sin duda alguna tiene mucho que ver con el machismo de la sociedad.

<sup>1</sup> Aron, Nina Renata, "¿Cómo luce la misoginia?", *The New York Times*, 18 de marzo de 2019, recuperado de <https://www.nytimes.com/es/2019/03/18/espanol/cultura/asi-luce-la-misoginia.html> La palabra, que convencionalmente significa el odio hacia las mujeres. Sin embargo, ahora parece haber eclipsado a los más amables "sexismo" y "chauvinismo" en el habla popular.

<sup>2</sup> Código Penal Federal, Capítulo V Feminicidio. Artículo 325. Comete el delito de feminicidio quien prive de la vida a una mujer por razones de género.

Sin duda alguna el tema del feminicidio es muy amplio, aparte de que es un tema delicado del cual requerimos tomar conciencia.

Es aquí donde requerimos gente preparada para saber identificar un feminicidio y ¿de qué manera sabemos que fue un feminicidio? Pues las investigaciones nos indican que, para identificarlo, las víctimas deben presentar signos de violencia sexual, lesiones o mutilaciones, otro factor a considerar es que haya existido una relación sentimental con el agresor.

Pero no hay que dejar de lado la parte de los responsables para dictar dichas sentencias, puesto que para ello, requerimos de personal judicial capacitado para poder diferenciar un feminicidio de un homicidio<sup>3</sup>, esto aunque se ve sencillo, es en realidad un tema de suma importancia, porque de ello depende un juicio justo para la víctima, su familia y la sociedad.

El Estado mexicano registró en el 2019, 976 denuncias por feminicidios, esto nos da un incremento del 137 % respecto al 2015, según datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es una situación tan atroz, puesto que lejos de ir mejorando, estamos empeorando, seguimos y siendo un país dentro de los 10 países con más feminicidios es en el mundo, ¿esto es lo que queremos en nuestro país? ¿Es lo que queremos para nuestros hijos o hijas?

Considero importante la creación de una fiscalía especializada en feminicidios, ya que hoy por hoy, sólo tenemos fiscalías para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas, pero esta atiende una gama muy amplia de delitos vinculados a la violencia de género y no sólo al feminicidio.

Para mí es relevante resaltar una grata mención a María Marcela Lagarde y de los Ríos que independientemente de ser una política, académica, antropóloga e investigadora mexicana, ha sido una pieza fundamental sobre la historia del feminicidio en México, puesto que ella fue quien promovió la inclusión del término «feminicidio» como delito en el Código Penal Federal al igual que la Ley General de

Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia, vigente desde 2007. Participó como perito en el caso Campo Algodonero que llegó a la corte Interamericana de Derechos Humanos, el primer punto de partida de Feminicidio en México. Sumándole a esos logros el impulso a la Ley General de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.<sup>4</sup> No cabe duda de que es una mujer que siempre tuvo claros sus objetivos y que su intención siempre fue sumar a favor de las mujeres, marcar un antes y un después en nuestro país, formando parte de la erradicación de este acto tan horrendo que está sucediendo en nuestro país.

En México tenemos mujeres que siguen luchando contra el feminicidio, ¿qué esperamos para apoyar a todas esas mujeres y unirnos para la erradicación de dicho fenómeno? Es momento de trabajar en conjunto y no sólo dejar el trabajo al sexo femenino, es momento de verlo desde otra parada, de ser más empáticos hacia con los demás, sin la necesidad de vivenciarlo para poder actuar y únicamente de esa manera poner nuestro granito de arena.

Quizás este sea un punto de partida para poder disminuir este delito tan atroz, que tiene conmovida a la sociedad mexicana, trabajando de manera responsable sin politizar una función meramente judicial.



<sup>3</sup> Artículo 302 del Código Penal Federal Comete el delito de homicidio: el que priva de la vida a otro, SEA HOMBRE O MUJER. (CAPITULO II Homicidio) Artículo 325 del Código Penal Federal Comete el delito de feminicidio quien priva de la vida a una mujer por razones de género

<sup>4</sup> "El Vaticano ha dañado más a la mujer que el narco" *El País*, 14/11/2012.



## EL PAMA Y SUS CONSECUENCIAS

**María Cristina Martínez Marcial**

Alumna del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ).

**E**l presente artículo aborda la problemática en que se ven envueltas las importadoras al ser dictaminadas con un PAMA y las consecuencias que trae consigo este procedimiento, así como las desventajas que tiene la parte afectada ante la autoridad en un procedimiento administrativo en materia aduanera. Las empresas importadoras en México enfrentan un grave problema cuando se les dictamina un procedimiento administrativo en materia aduanera (PAMA). Si bien es meritorio de sanción algún error u omisión cometida durante la importación de las mercancías, estas deberían ser más proporcionadas al tipo de infracción que se cometió. En cambio, muchas de ellas a pesar de ser mínimas las multas llegan a grados desproporcionados, sin tomar en cuenta que una multa o sanción no es el único estrago que genera, así mismo afecta al agente aduanal que correrá el riesgo de perder su patente como tal, en el caso de las importadoras el de ser suspendidas en el padrón de importadores. De igual forma se puede perder la mercancía que será embargada.

El PAMA trae consigo problemas jurídicos y económicos muy difíciles de superar, los gastos que se siguen generando a partir del embargo precautorio son otro motivo de preocupación. Tomando en cuenta, que se seguirán pagando día con día los gastos que la mercancía tales como demoras y almacenajes. Hay

que considerar que el tiempo que tendrá que transcurrir para una resolución de PAMA puede ser muy extenso. Debido a que en principio son 5 días en los que la autoridad revisará si se levanta el PAMA, esto más 10 días que la autoridad da a la importadora para presentar pruebas y alegatos, una vez pasado esto, la autoridad cuanta con un lapso de 4 meses para dar una resolución ya sea condenatoria u absolutoria. Juan Rabindrana García expone: es un procedimiento que dura mucho tiempo, se considera que el plazo de 4 meses es muy largo y excesivo<sup>1</sup>. Si contamos todo este tiempo ya son alrededor de 135 días mismos que ya generaron demoras y almacenajes. Esto se puede extender en caso de que la parte afectada decida interponer una defensa. Por lo que los días se extenderán hasta que se dictamine la resolución.

Existen diferentes defensas que se pueden ejercer ante el PAMA estos son el juicio contencioso, el recurso de revocación y el juicio de amparo. Todos ellos buscarán defendernos de las pretensiones de la autoridad sobre todo cuando hay inconsistencias en el levantamiento del acta o por faltas menores que la autoridad busque castigar fuertemente. Siendo el procedimiento de amparo el que buscará la devolución de la mercancía embargada, evitar la suspensión de la patente aduanal, así como la del padrón de importadores de la importadora involucrada.

<sup>1</sup> Cisneros García, Juan Rabindrana, Manual Práctico de amparo VS El embargo de mercancías, México, Cencomex, 2017, p. 195.



“ El levantamiento de actas de PAMA ha ido en aumento con los años en la década de los noventa eran mucho menos los casos, pero en las estadísticas del año 2019 y 2020 como última referencia se ha visto en aumento. ”

Las autoridades aduaneras si bien deben sancionar las irregularidades, sería mucho más justo si fuera de acuerdo con la falta cometida. No es lo mismo cometer una subvaluación del más del 50 % del valor de la mercancía a cometer un simple error de clasificación. Es ahí donde radica un desacuerdo con el PAMA, no debería ser un procedimiento con tanta desventaja del afectado. En primer lugar se trata de un procedimiento en donde la autoridad es “juez y parte”, ya que es la misma autoridad la que inicia, tramita y resuelve el PAMA lo que pone de manifiesto la parcialidad de sus resoluciones<sup>2</sup>. Dando así casi ninguna oportunidad a los afectados de obtener resultados absolutorios y teniendo o bien que allanarse y pagar las multas, o tener que acudir a un método de defensa que como ya se vio es un procedimiento más largo y de igual forma, aunque se gane no quita el que haya perdidas para la importadora por los pagos que se generaron en la aduana dentro del tiempo que se esperó resolución. De igual forma la aduana tendría que ser responsable al cometer procedimientos por cosas tan simples y llevar al afectado a un desgaste en todos los aspectos.

Si los importadores asumen las consecuencias de sus errores, las autoridades aduaneras deberían de hacer lo mismo y tener algún tipo de sanción por ello.

No ser directamente parte de este mundo aduanero y conocer al 100 % la realización de las importaciones y por consecuencia los errores que se pueden cometer en el proceso sí me dan una limitación. No obstante, al ser espectadora directa de sus fatales consecuencias me alienta a conocer más sobre el PAMA.

Considero que las autoridades aduaneras deberían incentivar, facilitar y promover el comercio no de

obstaculizarlo y hacerlo un martirio para las personas que se dedican a esto.

En conclusión, un PAMA es un procedimiento lleno de fatales consecuencias para quien lo enfrenta, además de tener clara desventaja al ejercer defensa ya que la autoridad juega como juez del proceso. Teniendo ya desde ahí la clara inclinación a perder.



<sup>2</sup> Ídem



## IMPACTO EN LAS CUOTAS OBRERO-PATRONALES POR LA REFORMA A LA SUBCONTRATACIÓN DE PERSONAL

**Lic. Israel Hilario Ávila Alegría**

Licenciado en administración por de la UNAM y alumno en la licenciatura de Derecho del CUEJ, experiencia en la iniciativa privada en recursos humanos, en específico en materia laboral, seguridad social, nóminas.

**E**l presente artículo aborda el tema del impacto que sufrirá las contribuciones de cuotas obrero-patronales al IMSS e INFONAVIT por la reforma a la subcontratación de personal, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril de 2021.

Como antecedente tenemos que a finales del siglo pasado, al terminar la Segunda Guerra Mundial, las empresas llevaban a cabo a sus operaciones con personal propio y por lo tanto no dependían de otros, lo cual fue bueno en su momento, pero con el paso del tiempo con el avance tecnológico, dichas empresas no pudieron estar a la vanguardia en todos sus departamentos y dejaban de ser competitivos, sin embargo, la empresas especializadas podían enfocarse en mantenerse actualizadas en sus campos de acción.

Ya en la década de los noventa aparecen cada vez más las empresas con servicios corporativos con el objetivo de prestar servicios a diferentes compañías incluso de un mismo dueño y se distinguían por no generar utilidades, constituyéndose por lo general como sociedades civiles.

Para el año del 2012 se publica una reforma en materia de subcontratación de personal, pero ¿a qué nos referimos a subcontratación de personal?, la misma reforma nos indica en el artículo 15-A de la LFT que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas.<sup>1</sup> Sin

embargo este artículo fue derogado en este 2021 específicamente el 23 de abril cuando se publicó la más reciente reforma a la subcontratación de personal, por la cual se modifica el artículo 12 de la LFT indicando que queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose esta cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra.<sup>2</sup>

De acuerdo con lo anterior surge la cuestión de saber si por fin se regularizarán los outsourcing con dicha reforma y, más interesante aún, como impactará en la carga social en este tipo de empresas que se evitaban ese gasto.

Considerando que por mucho tiempo se han llevado a cabo con malas prácticas en donde los trabajadores son los más afectados, ya que muchos no cuentan con seguridad social al estar contratados con el régimen de asimilados a salarios o, si tienen seguridad social, no es con el total de su sueldo ya que los contratan con esquema mixto en el que con la menor parte del sueldo si no es que con el salario mínimo los registran ante el IMSS y, la otra parte por medio de asimilados a salarios, consecuentemente también afecta a los trabajadores su aportación para el retiro ya que entre más bajo sea el salario registrado ante el IMSS menor será su aportación para su retiro y/o una pensión con el IMSS, por si fuera poco los trabajadores no pueden acceder a un crédito hipotecario por parte del INFONAVIT si no están inscritos en el IMSS y entre más bajo sea su salario tendrán muy poca aportación para su vivienda y el crédito será menor.

Dicho lo anterior se puede confirmar que también afecta al gobierno al no recibir la contribución de

<sup>1</sup> Ley Federal del Trabajo, artículo 15-A, adicionado el 30-11-2012 y derogado el 23-04-2021.

<sup>2</sup> Ley Federal del Trabajo, artículo 12.

todos aquellos trabajadores que no están inscritos en el seguro social o que estén con salarios mínimos, ya que el gobierno se hace allegar de todas las contribuciones para solventar el gasto público.

Ahora, de acuerdo con punto anterior, es importante considerar algunas de las modificaciones que sufrieron efectos a cusa de la reforma de subcontratación de personal.

Tal es el caso del artículo 15-D del CFF, el cual nos indica que no tendrán efectos fiscales de deducción o acreditamiento, los pagos o contraprestaciones realizados por concepto de subcontratación de personal para desempeñar actividades relacionadas tanto con el objeto social como con la actividad económica preponderante del contratante.<sup>3</sup>

Por otra parte, el artículo 4 de la LIVA indica que el impuesto que se traslade por los servicios que se refiere el art. 15-D, primer y segundo párrafos del CFF, no será acreditable en los terminos de la presente Ley.<sup>4</sup>

También para el caso de la LISR nos indica que de no entregar la información del contratista al contratante de los servicios siempre y cuando no sean del mismo objeto social, se pueden considerar multas que van desde los 150,000.00 a los 300,000.00 pesos y además de que serán considerados como delitos de defraudación fiscal.

Por lo que puedo observar es que el gobierno esta orillando a todos los outsourcing que regularicen y se registren en el padrón de servicios especializados de la Secretaría del Trabajo, ya que si no cumple costará más pagar multas que pagar sus cuotas de seguridad social, además de que si el patrón decide registrarse en al padrón de la Secretaría del Trabajo deberá estar el día con sus pagos al IMSS.

Al ser una reforma nueva y que todavía tienen aproximadamente un mes como vigencia para se terminen de regularizar los patrones que subcontrataban, no hay cifras exactas de cuantos nuevos patrones van a contribuir en las cuotas de seguridad social. Pero de acuerdo con los datos en el portal de la Secretaría del Trabajo de los registros en el padrón eran 35 mil visitas,<sup>5</sup> posteriormente para el 24 de junio el titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo Alejandro Salafranca Vázquez, comentó que de acuerdo a la información proporcionada por el IMSS, “más de medio millón de trabajadores ya pasa-

ron a las plantillas laborales de las empresas que antes los subcontrataban, y ya van 65 mil visitas, de las cuales ya 8 mil empresas iniciaron el trámite de su registro en el padrón”.<sup>6</sup>

Es por ello que el impacto que causaría la nueva reforma en subcontratación de personal, aumentaría las contribuciones de cuotas obrero patronales, aunque también es de considerar como una alternativa en la que aumentaría el desempleo, ya que al tener más carga social algunos patrones no podrían solventar ese gasto, principalmente algunas de las pequeñas y medianas empresas, lo que conllevaría a cerrar su negocio y por lo tanto generar desempleo.

En conclusión de acuerdo a las modificaciones en las diferentes leyes y a las cifras que otorga la secretaría del trabajo de que si va funcionando el registro en el padrón, si se incrementará la contribución por seguridad social, ya que poniendo en una balanza las condiciones que impuso la reforma nos daremos cuenta de que si quieren seguir operando los outsourcing tendrán que registrarse en el padrón y una vez ya registrados van a tener que cumplir con las disposiciones de las diferentes leyes para que no los multen y por consiguiente pagarán sus cuotas obrero patronales, las cuales incrementarán la recaudación de impuestos en seguridad social.

Creo que México pudiera llegar a contar con una mejor justicia laboral, en defensa de los trabajadores y también que no afecte mucho a los empresarios, sobre todo las pequeñas y medianas empresas a las cuales les es más difícil solventar la carga de los impuestos en este caso la carga social, si contáramos con una mejor legislatura en la que no beneficie sólo a algunos sectores empresariales o a grandes corporaciones, sino que ayuden a que sea más equitativo.

Es recomendable considerar que el 24 de julio es el límite para que se integren las plantillas de trabajadores a los nuevos patrones que antes los subcontrataban y que se revise en el padrón de la Secretaría del Trabajo el registro de los patrones como servicios especializados cuando pase la fecha de vigencia que sería el 24 de agosto del 2021 el listado que liberará el IMSS para verificar con cifras exactas cuantos nuevos patrones se inscribieron en el padrón y también que generarán un alza en las contribuciones en seguridad social, de los cuales hasta el momento sí se han inscrito un número considerable de patrones.

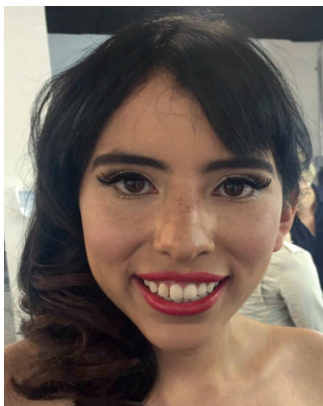
3 Código Fiscal de la Federación, art. 15-D

4 Ley del Impuesto al Valor Agregado, art. 4

5 <https://www.gob.mx/stps/prensa/disponible-y-en-linea-se-encuentra-el-padrón-publico-de-contratistas-de-servicios-u-obras-especializada>.

6 <https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-un-mes-8000-empresas-inscritas-como-subcontratacion-especializada-20210624-0029.html>





# CAROLINA HERRERA Y PLAGIO A DISEÑOS TEXTILES MEXICANOS

Regina del Rosario García Gualo

Estudiante del Centro Universitario de Estudios Jurídicos (CUEJ), en la licenciatura de Derecho.

**C**arolina Herrera siendo una marca mundialmente famosa por su línea de ropa destaca por sus diseños y materia prima de primera calidad, fue señalada en el 2019 por su colección “Resort 2020” que mostraba unos diseños de origen mexicano en su colección.

El gobierno mexicano argumentó que esto era apropiación cultural y plagio a los diseños de diferentes pueblos originarios y partes de México, la Secretaría de Cultura envió una carta a la firma, pidiendo una explicación del porqué utilizaron los diseños de varias comunidades indígenas, también argumentó que era necesario saber si dichas comunidades tendrían alguna remuneración debido a estos diseños.

Wes Gordon, director creativo de la reconocida marca y la famosa diseñadora argumentaron que esta colección era “juvenil, fresca y fiel a las raíces de la marca” así como que la diseñadora sentía gran admiración por la cultura mexicana debido a sus colores y que la colección era un homenaje a esta.

En respuesta a esto, el gobierno mexicano decidió proceder legalmente contra la reconocida marca de ropa, en el caso específico de un vestido con el diseño con el sarape de Saltillo, este caso sería respaldado por las leyes de derecho de autor, en específico el capítulo tres de la Ley de Derechos de Autor.

Dicha ley, en los artículos 157, 158, 159 y 160, habla sobre estos temas, sin embargo, no se establece que

no pueden ser utilizados los diseños sin consentimiento o permisos pertinentes, al contrario, dice que se pueden utilizar según lo estipulado por el título VII, el cual indica que los derechos y permisos pueden ser utilizados si existe una condición de trabajo, también si son parecidos y no idénticos no son necesarios los permisos de la Secretaría de Cultura.

Al respecto el gobernador de Coahuila declaró que “el problema a nivel global, al igual que en la música, es que cuando haces un arreglo a algo que ya está creado, pasa como si fuera algo nuevo, por ello, deben tener mayores lineamientos para proteger las obras tanto de diseño artesanal como con la música, así como en otras áreas de las bellas artes”.

Debido a que Carolina Herrera modificó el diseño del sarape, pasó desapercibida la demanda y no procedió, también se argumentó

“Se puede hacer un buen trabajo a raíz de que ya ocurrió esto, no podemos negar que los diseños son bellísimos, pero son muy apegados a los diseños originales o tradicionales de los sarapes, creo que siempre se le debió dar una forma el crédito, que pertenecían a diseños ya establecidos por tejedores, ya sea de

## México y de otros países” argumento el gobernador de dicho estado.”

Cabe destacar que México es parte del Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, sin embargo, lamentablemente no se especifica qué pasa con las obras artísticas de las comunidades originarias de los países participantes en este convenio.

También México es partícipe del convenio de París o Convenio Universal de los Derechos de Autor, este se incorporó en 26 de julio de 1976 a pesar de su creación desde el 20 de marzo de 1883, el objetivo de este convenio son las patentes de invención, de manera artística, científica o industrial, por ser patrimonio cultural, no obstante estas comunidades no tienen patentes, no es sino a partir del 2014, que empezó la pelea por la apropiación cultural de las marcas, en reiteradas ocasiones estas han intentado obtener las patentes sobre los diseños, sin éxito alguno debido a que son patrimonio cultural.

A partir del incidente con Carolina Herrera, el gobierno mexicano decidió implementar una reforma hacia la ley federal de derechos de autor<sup>1</sup>, reforma que fue implementada a partir del 1 de julio del 2020, sin embargo, dicha reforma no aclara estos puntos en los artículos antes mencionados, de hecho, en la reforma sólo fueron modificados los artículos que tenían que ver con el tema de internet, creación de contenido y redes sociales. Esta reforma básicamente fue para la protección de creadores de contenido y de artistas gráficos.

También se reformaron algunos artículos sobre demás y juicios, estos aclaran desde cómo tramitar una demanda hasta los resultados, como las consecuencias y sentencias, aclarando que pueden ser desde el precio de la obra o hasta 5 veces el precio de la obra, dependiendo del caso.

Las comunidades afectadas por el caso de Carolina Herrera fueron: el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca,

Tenango de Doria en Hidalgo, Saltillo Coahuila y el Istmo Huichol de Jalisco.

En los derechos de los pueblos y comunidades indígenas<sup>2</sup>, tiene un apartado de derecho de identidad social y cultural, en él tampoco es mencionado los derechos de autor como comunidad indígena, tampoco en el apartado de desarrollo, dependiendo de cada zona de la comunidad puede llegar a variar, sin embargo, en ninguno es mencionado.

Las autoridades a partir de este caso decidieron tomar iniciativa para hacer reformas a estas leyes y derechos, empero, no se han visto los resultados deseados y se lleva casi dos años intentando hacer avanzar estas reformas sin resultado alguno.

Las autoridades asignadas para este rubro no están tomando cartas en el asunto a pesar de que se ha declarado que planean hacer reformas para que esto no siga pasando, no se ha tomado la suficiente atención a este tema, en comparación de las reformas efectuadas el año pasado, dando respaldo mayormente a los creadores de contenido en redes sociales o artistas gráficos, sólo haciendo referencia a los permisos que se deben efectuar en internet con respecto al contenido creado ahí.

Considero que se debe presionar a las autoridades para crear una reforma a los artículos 157, 158, 159 y 160 de la Ley de Derechos de autor para amparar a nuestras comunidades indígenas.<sup>3</sup>

Las autoridades deben de tomar en cuenta los convenios en los que son partícipes, también deben de tomar en cuenta los casos suscitados desde el 2014, que siguen creciendo y con más mayor frecuencia, en lo que va del 2021 por lo menos ya son 3 casos, incluso hay marcas que tienen temporadas con dichos diseños, como las reconocidas marcas Vans y NIKE que cada año sacan su línea de día de muertos en octubre y noviembre.

En conclusión, debemos de tener en cuenta que a pesar de las reformas efectuadas el año pasado,

<sup>1</sup> Ley de los Derechos de Autor, México, Congreso de la Unión, 01/07/2020.

<sup>2</sup> Derechos de los pueblos y comunidades indígenas, México, Congreso Nacional de los Derechos Humanos, 2018.

<sup>3</sup> Ley de derechos de autor, México, Congreso de la Unión, 24/12/1996, reforma 01/07/2020

<sup>4</sup> ¿qué es exactamente la apropiación cultura?, México, Forbes, 30/10/2017

siguen existiendo plagios, este año no es una excepción, a partir del 2014 fueron por lo menos 36 apropiaciones culturales<sup>4</sup> a nuestras comunidades, contando la de Carolina Herrera y sin contar las efectuadas en el 2020 y en lo que va del 2021.



\*TODAS LAS IMÁGENES SON PROPIEDAD DE CAROLINA HERRERA©\*



REVISTA DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS JURÍDICOS

# CUEJ

M.R.

PARA ESPECIALISTAS, ENTRE ESPECIALISTAS



# DESCÁRGALA TOTALMENTE GRATIS

LIBROSYREVISTAS**CUEJ**.COM



## PARA ELLA...

**S**abes, el día de hoy, medito que hace tiempo que partiste de este mundo terrenal y que, sin embargo, tu recuerdo, permanece perenne en mi corazón;

Con tu viaje, se quebró parte de mi existencia y razón de vivir, desde que tuve conocimiento, aquel fatídico día, en el cual comenzaste tu travesía al sueño eterno, desde entonces, la tristeza invadió mi alma, al conocer, que no podría volver a ver o sentir tu rostro y cuerpo junto al mío, y debo señalar que parte de mi ser partió contigo;

Te comento que mi interior me dice que tal vez, físicamente las circunstancias nos separaron, sin embargo, tu imagen sigue viva y latente dentro de mí, tu alma descansa inmanente al interior de mi vida, y en tardes lluviosas, a veces pareciera que hasta puedo ver tu figura caminar entre la gente, y observar tu silueta confundirse con el caer del agua; durante el otoño e invierno, en ocasiones percibo leves ráfagas de viento que recorren mi cuerpo, como si delicadamente quisieras tocar mis manos y rostro;

En otros momentos, pareciera que escucho al viento susurrar palabras de tus labios que llegan a mis oídos y que se traducen en suaves y tenues frases de amor, incluso, pienso que en realidad nunca te fuiste y que el tiempo se detuvo para nosotros, como en una vista al cielo, en la cual, tu juegas por las nubes, saltando con espectacular alegría característica de tu personalidad, mientras los rayos del sol caen sobre la tierra;

Recuerdo tu hermosa sonrisa cuando me mirabas extrañada, sobre todo, cuando pronunciaba frases tontas, mas, al final reías, y eso bastaba para generar alegría a mi existir; tu cabello, castaño claro, ocasionalmente siento que recorre mi cara por las noches y hasta casi creo poder sentirlo, de contexto suave y delgado, de olor juvenil, fresco y sutil. Y sabes, cuando pienso en ti, los amaneceres llegan más pronto y la luz del sol parece más intensa y radiante, vigorizando con ello mi existir;

Nadie te podrá arrebatarte de mí; en vida, se opusieron a lo nuestro; pero, en la eternidad, fuiste, eres y serás mía, y yo de ti; tu corazón me acompaña en cada paso que doy y mi alma irá contigo a donde quiera que tú estés; y tal vez, en algunas ocasiones, me llegues a visitar en mis más profundas cavilaciones, y seguro perturbarás mis sueños, ya que, de otra manera, no me podría explicar tu presencia en mi mente; mirar tu figura en mi subconsciente ilumina los días y noches, llenándome de fe y esperanza;

Aunque en esta vida, el destino nos quitó la oportunidad de estar juntos, seguro estoy, que te volveré a ver, y cuando eso suceda, nuevamente nos reuniremos, amor, y entre tanto, ruego a Dios te ilumine, que te colme de bendiciones, y si acaso tuviera para ti, otro destino diverso al mío, pido al mismo, que te brinde toda la felicidad, paz y amor que tú te merecías en vida;

Te he extrañado tanto que duele, pero quizás algún día y ante la luz del cielo, reflexiono que estaremos juntos, para siempre.

Eterno caminante.





**AGENCIA  
ADUANAL**



**SERVICIO DE  
TRANSPORTE**



**UNIDAD DE  
VERIFICACIÓN**



**ALMACEN GENERAL  
DE DEPÓSITO**



**DEFENSA LEGAL  
Y CONTABLE**



# DACIS

AGENCIA ADUANAL S.C.

 [www.dacis.com.mx](http://www.dacis.com.mx)

CONTACTO

Begonias #18, Col Clavería Alcaldía Azcapotzalco,  
CDMX C.P. 02080.

[contacto@dacis.mx](mailto:contacto@dacis.mx)

**(55) 5341 4041 | (55) 6650 6454**